

Centro de Análisis Político -CAP-
Universidad EAFIT

RETOS DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA

EN UN ESCENARIO POSTCONFLICTO
EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN



Universidad EAFIT
Centro de Emprendimiento, Consultoría y Empresarismo –CICE–
Centro de Análisis Político
Para: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC– de la
Secretaría de Seguridad del Municipio de Medellín

Retos de la seguridad y la convivencia en un escenario postconflicto en la ciudad de Medellín.

Universidad EAFIT
Medellín
2015

Rector

Juan Luis Mejía Arango

Decano Escuela de Humanidades

Jorge Giraldo Ramírez

Equipo de trabajo

Coordinador del Proyecto - Investigador principal

Andrés Casas-Casas

Coordinación metodológica - Investigadora

Nathalie Méndez Méndez

Asesor Internacional

Enzo Nussio. Postdoctoral fellow, Institute for Latin American Studies - Stockholms universitet

Asesores temáticos – Departamento de Gobierno y Ciencia Política, Universidad EAFIT

Gustavo Duncan, Ph.D.

Santiago Leyva, Ph.D.

Mauricio Uribe, Ph.D.

Apoyo para la recolección de información

David Álvarez

Juan David Correa

David Murcia

Apoyo administrativo – CICE

Tatiana Valencia

¿Quiénes somos y qué hacemos?

El Centro de Análisis Político (CAP) de la Universidad EAFIT tiene como misión fortalecer la proyección de la Universidad a través de la innovación social orientada a la transformación de problemas colectivos. Desde un enfoque de investigación y consultoría académica aplicada, que busca articular teoría y práctica de manera rigurosa, nuestra misión es la de poner el conocimiento al servicio de la toma de decisiones informadas para la transformación social.

Desde 2007, el CAP ha buscado desarrollar y aplicar avances teóricos, metodológicos y prácticos para la comprensión, discusión y atención de problemas compartidos, en el nivel local, regional y nacional. A través de los años hemos desarrollado un enfoque de economía política de las periferias, que además de producir conocimiento empírico sobre problemáticas sociales complejas marcadas por la diversidad institucional, ha permitido desarrollar una caja de herramientas para contribuir al análisis e intervención de problemas colectivos. En estos años de trabajo hemos desarrollado esta perspectiva a través de alianzas estratégicas con diferentes organizaciones del sector público y del sector privado, cuyas acciones tienen un alcance comunitario y ciudadano.

Gran parte del trabajo del equipo del CAP-EAFIT se ha centrado en la comprensión de la persistencia de diferentes formas de violencia en el país y sus regiones. Nuestro énfasis se ha centrado en las transformaciones recientes de la guerra y de las nuevas dinámicas criminales resultantes, prestando especial atención a los efectos que estas tienen sobre los órdenes políticos, económicos y los atributos comunitarios en ámbitos subregionales.

Para la Universidad EAFIT es una prioridad contribuir a los esfuerzos que desde diferentes espacios de toma de decisión se orientan a alcanzar la paz en el país en clave territorial. A través de la identificación y reflexión sobre los aprendizajes internacionales y locales en materia de buenas prácticas, buscamos apoyar la generación y difusión de información pertinente para el fortalecimiento de capacidades locales que faciliten el tránsito de la guerra a la paz en las regiones de Colombia.

Resumen

¿Cómo hacer para que en Medellín la paz no sea peor que la Guerra? ¿Cómo aprovechar la experiencia de la guerra para enfrentar la incertidumbre de la transición hacia la paz? ¿Cómo establecer dichos retos dados los cambios que ha vivido la ciudad en los últimos años? ¿Está Medellín preparada para enfrentar los retos que en materia de seguridad y convivencia podrá traer un acuerdo de paz con las FARC? Este informe reúne los resultados de un ejercicio de inteligencia colectiva, desarrollado con el fin de resolver estas preguntas, establecer escenarios, y ofrecer las bases de una agenda en materia de seguridad y convivencia que le permita a Medellín prepararse y aprovechar la oportunidad de la transición y la construcción de la paz a través de sus territorios físicos y simbólicos.

CONTENIDO

I INTRODUCCIÓN	20
II. POSTCONFLICTO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	25
III METODOLOGÍA.....	59
IV. RETOS DEL POST ACUERDO PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN	64
ESCENARIOS	64
<i>Escenarios de acuerdo con las FARC.....</i>	<i>66</i>
<i>Reflexiones del evento de socialización frente a los escenarios</i>	<i>77</i>
<i>Escenarios sin un acuerdo con las FARC.....</i>	<i>79</i>
<i>Escenarios de acuerdo con el ELN</i>	<i>82</i>
RETOS	86
<i>Desafíos de la institucionalidad frente a los escenarios del post-acuerdo.....</i>	<i>86</i>
<i>Desafíos de Medellín frente a las subregiones del departamento.....</i>	<i>99</i>
<i>Reflexiones del evento de socialización frente a los retos</i>	<i>101</i>
RECOMENDACIONES	103
<i>Recomendaciones para hacerle frente a los retos.....</i>	<i>104</i>
<i>Aprendizajes de experiencias internacionales y nacionales</i>	<i>107</i>
<i>Reflexiones del evento de socialización frente a las recomendaciones.....</i>	<i>112</i>
ACTORES INVOLUCRADOS	113
<i>Reflexiones del evento de socialización frente a los actores clave</i>	<i>115</i>
TENDENCIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.....	116
SÍNTESIS DE LOS HALLAZGOS	119
V. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL POST ACUERDO: UNA AGENDA PARA MEDELLÍN	123
VI. BIBLIOGRAFÍA	134
VII. ANEXOS.....	155
ANEXO 1. MANUAL DE CÓDIGOS DEL ANÁLISIS DE ENTREVISTAS	155
ANEXO 2. LISTADO DE EXPERTOS ENTREVISTADOS	163
ANEXO 3. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE PRENSA.....	163

AGRADECIMIENTOS

El equipo del Centro de Análisis Político de la Universidad EAFIT agradece de manera especial a los más de 71 participantes en las entrevistas, grupos focales y en el evento de socialización y retroalimentación para la estimación de escenarios que con sus voces hicieron posible alcanzar las metas analíticas de este proyecto. Con su generosa disposición, aportes, opiniones y experiencias contribuyen a la reflexión para la toma de decisiones informada, de cara a la construcción territorial de la paz en los municipios de Colombia.

Entre los expertos internacionales participantes agradecemos a Caroline Moser (Emeritus Professor University of Manchester), Jenny Pearce (Bradford University), Robert Muggah (Instituto Igarapé), James A. Robinson (Chicago University), Stathis Kalyvas (Yale University), Rafael Grasa (Instituto Internacional Catalán para la Paz); Oliver Kaplan (University of Denver), Adam Baird (Coventry University), Enzo Nussio (Stockholms universitet), Fernando Chinchilla (Universidad de Monterrey); por su apertura y disposición así como por el gran aprecio y compromiso que en sus investigaciones manifiestan por nuestro país. Así mismo estamos en deuda con Ana María Arjona (Northwestern University), Angelika Rettberg (Universidad de Los Andes), Juan Carlos Palou (Fundación Ideas para la Paz), Pablo Emilio Angarita (Universidad de Antioquia), Mauricio Romero (Pontificia Universidad Javeriana), Mauricio Uribe (Universidad EAFIT), Hugo Acero (Consultor independiente), Gustavo Duncan (Universidad EAFIT) y Jorge Giraldo (Decano de la Escuela de Humanidades, Universidad EAFIT); todos destacados académicos colombianos cuyas valiosas reflexiones resultaron clave para entender el importante avance y constatar la creciente rigurosidad de los estudios locales sobre el tema en Colombia.

El proyecto tuvo el privilegio de contar con el apoyo y participación de algunos de los más importantes expertos locales en los temas de seguridad, convivencia y construcción de paz que desde Medellín han contribuido al análisis, comprensión diseño e implementación de iniciativas de paz que han generado valiosos aprendizajes en la ciudad. Agradecemos a Luz Patricia Correa (Unidad de Municipal de Atención y Reparación a Víctimas), Lucía González (Museo Casa de la Memoria), Valeria Mejía (Secretaría de Juventud), Paula Álvarez (Unidad de Convivencia, Secretaría de Gobierno), Jaime Fajardo Landaeta (Secretaría de Seguridad de Medellín), César Herrera De la Hoz (Subsecretario de Gobierno-Gobernación de Antioquia), Edward Jaramillo (Gerente de Municipios, Gobernación de Antioquia), Janna Greve (MAPP-OEA), Santiago Londoño (Ex Secretario de Gobierno, Gobernación de Antioquia), Max Yuri Gil, Mario Agudelo,

Gonzalo Murillo (Red Prodepaz), José Antonio Girón (Instituto Popular de Capacitación-IPC), Juan Diego Restrepo, Miguel Tamayo (Corporación Convivamos), y al Coronel (r) Erick Rivas.

Un agradecimiento especial por su apoyo a Ursula Wagner, al Comité de Postconflicto y al Proyecto de Garantías de No Repetición en la búsqueda de sinergías sostenibles que permitan construir una agenda interinstitucional y multisectorial para los próximos años en Medellín, que integre las temáticas de seguridad y de derechos humanos. Así mismo, un especial reconocimiento al permanente apoyo de Paulo Serna, las reintegratoras del Programa Paz y Reconciliación, así como al grupo de Personas en Proceso de Reintegración que compartieron sus experiencias y expectativas para preparar a Medellín de cara a un posible escenario de postconflicto en la ciudad.

Agradecemos además, las discusiones y reflexiones surgidas en los eventos: Instrumentos para la medición de la seguridad y la convivencia realizado por el CAP-EAFIT y la Facultad Administración de Empresas de la Universidad de los Andes entre el 27 y 28 de julio en Medellín en el marco de este proyecto; Primer Simposio Internacional de Arquitectura y urbanismo para la paz y la reconciliación, organizado por la Revista DEARQ de la Universidad de los Andes entre el 14 y 15 de septiembre; Cuarta reunión del Observatorio Colombiano de Violencia y Gobernanza liderado por la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol), celebrado en Cali entre el 7 y el 8 de octubre de 2015 en la Universidad Icesi; así como a todos los participantes en el taller de retroalimentación de resultados de este proyecto llevado a cabo en la Secretaría de Seguridad el 9 de octubre de 2015.

En particular destacamos el compromiso y valiosa gestión de Oswaldo Zapata, Ana María Jaramillo y de todo el equipo del Sistema de información de Seguridad y Convivencia (SISC) de la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín, quiénes con su iniciativa y liderazgo, hicieron posible la realización de este trabajo. Los autores deseamos destacar el desinteresado y excelente apoyo de Luis Felipe Dávila, Diego Cossio y Peter Raab por su valiosa ayuda en la realización y facilitación en actividades clave de este proyecto.

Sea este el espacio para reconocer una vez más el incansable compromiso del Vicealcalde Luis Fernando Álvarez, del Secretario de Seguridad, Sergio Vargas, y de todo su equipo por el permanente impulso a la construcción de miradas heterodoxas en el área, y la toma de decisiones informada técnica y rigurosa en el campo de las políticas públicas de seguridad y convivencia en Medellín.

A lo largo del documento se hará uso de la palabra postconflicto para referirse a la etapa resultante de la firma de los acuerdos de paz en la Habana. Esto se hace para mantener la armonía con la literatura internacional sobre el tema. Sin embargo, los autores y participantes en este estudio comparten la idea de que la palabra adecuada es la de postacuerdo, ya que como se evidencia en el texto, en Colombia se buscará el fin del conflicto armado entre el Estado colombiano y las FARC, pero es evidente que los conflictos viejos y nuevos harán parte de la vida de la transición.

PRESENTACIÓN

Desde 2013 el Centro de Análisis Político de la Universidad EAFIT ha tenido el privilegio de acompañar a la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín en la construcción de una cultura de toma de decisiones informadas, basada en una nueva aproximación que trasciende las miradas exclusivamente normativas, militaristas y securitarias sobre el tema. Los productos de esta alianza desarrollan una aproximación complementaria de la seguridad y la convivencia como los dos pilares de una arquitectura institucional indispensable para el desarrollo humano, el buen desempeño de las organizaciones públicas y el fortalecimiento de la democracia efectiva a través de espirales virtuosas en la vida política, económica y social en la ciudad.

Dicho enfoque, se ha alejado de concepciones tradicionales sobre seguridad y convivencia, para proponer una aproximación novedosa que le ha permitido a la administración revisar la evolución tanto de los enfoques como de los instrumentos desarrollados y aplicados en la ciudad en los últimos diez años; así como de algunas de las principales dinámicas que han afectado la seguridad y la convivencia durante el mismo periodo. Así mismo, ha ofrecido alternativas teóricas, conceptuales, metodológicas y técnicas que han contribuido a la revisión, ajuste y propuesta de estrategias en la materia, desde la mirada de los actores involucrados. El principio rector para poner en práctica esta mirada ha sido el de desarrollar estudios empíricos que sirvan como líneas de base para superar errores de concepción con el fin de mejorar las intervenciones, diagnosticar situaciones de manera compleja, diseñar estrategias, monitorear dinámicas y efectos, así como evaluar intervenciones de cara a su ajuste o transformación.

- *El avance de una cultura de decisiones informadas para la seguridad y la convivencia en Medellín*

Este trabajo conjunto ha dado paso a una aproximación pública que se preocupa por: comprender y fortalecer capacidades locales; aprovechar las buenas prácticas y atributos positivos desarrollados por las personas para lidiar con las amenazas cotidianas y los problemas propios de entornos institucionales débiles; blindar a la ciudad de la influencia perversa del crimen y la corrupción; así como de los riesgos que aumentan la incertidumbre en las relaciones con los otros y los entornos, erosionando la convivencia cotidiana de los habitantes de la ciudad. Para sustentar empíricamente la aproximación pública arriba mencionada, se realizaron dos grandes estudios: el *Acompañamiento al diseño de la política pública de seguridad y convivencia que contó con la participación de 600 personas entre funcionarios, ciudadanos y expertos entre 2013 y 2014*, y la *Encuesta de*

percepción de la seguridad, la convivencia y la victimización en Medellín que contó con 4522 entrevistas cara a cara.

El principal fruto de esta alianza yace en la primera *Política pública de seguridad y convivencia municipal* (Acuerdo 21 de 2015 del Concejo de Medellín) inspirada en una mirada empírica que comprende la importancia de la territorialización de las políticas de seguridad y convivencia, no solo en su aspecto geográfico, sino a través de los territorios simbólicos y mentales de los funcionarios, las comunidades y los habitantes de las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad. Su objetivo no es otro que el de “Aumentar la capacidad de los ciudadanos y de sus instituciones para gobernar los fenómenos que afectan la seguridad y convivencia, decidir y actuar para generar de manera concertada un ambiente seguro, de relaciones armónicas convivientes, que garantice la libertad a los ciudadanos, les permita proyectar y gobernar sus destinos personales y su destino colectivo como sociedad, y romper patrones de victimización y criminalidad, haciendo uso de los distintos recursos e instrumentos personales, colectivos, públicos y privados existentes” (Acuerdo 21 de 2015 del Concejo de Medellín).

Gracias a esta nueva herramienta, en Medellín al igual que en las más grandes y seguras ciudades del mundo, hoy se entiende que el reto en los temas de seguridad y convivencia yace en el fortalecimiento de la confianza y la legitimación de las reglas de juego como producto de una construcción ciudadana, cuyo más valioso dividendo se expresa en ofrecer una mayor libertad, la elección sin prejuicios ni presiones de las propias maneras de vivir y habitar los territorios, así como de disfrutar la ciudad sin ataduras de ningún actor, sin prejuicios y sin miedo (Secretaría de Seguridad, 2015).

- *Seguridad y convivencia en un escenario postconflicto en Medellín*

Pese a este gran avance y a las profundas transformaciones que en general ha venido viviendo la ciudad en la última década, en particular en los temas de seguridad y convivencia, surge un reto adicional que no es nuevo y que la ciudad ha enfrentado en el pasado, aunque en un contexto diferente con actores distintos a los del escenario actual. Es un reto esperado y deseado, y que encuentra a la ciudad en uno de sus mejores momentos para asumirlo.

En 2012 año de inicio del Gobierno actual de la ciudad, iniciaron también las conversaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Tres años después y al cierre de la gestión de la Alcaldía de Aníbal Gaviria, y aunque no se pueda dar por cierto el éxito de las

negociaciones (International Crisis Group, 2014; USAID, 2014), los importantes avances en cuanto a los 5 puntos sustantivos de la agenda aumentan la probabilidad de que las partes se acercan a la meta esperada por el 67% de los entrevistados que para el 3 de octubre de 2015 manifestaban su apoyo al proceso (Revista Semana, 2015). En particular, la reunión sostenida el 23 de septiembre entre el Presidente Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez, Comandante del estado mayor de las FARC, en la que las partes se comprometieron a firmar la paz antes del 23 de marzo de 2016, sentó un punto de no retorno para el proceso de paz (Grasa, 2015, p. 4).

En este sentido, la señal de compromiso lanzada desde La Habana habla de la maduración de las creencias de las partes acerca de la irreversibilidad de un acuerdo que conduzca al fin del conflicto armado más antiguo del continente. Las teorías sobre el empate y la madurez de la negociación desarrolladas por William Zartman (1974, 1977, 1989, 2000, 2007) hacen pensar que es un buen momento para avizorar los posibles escenarios y los retos subsecuente de un posible postacuerdo en materia de seguridad y convivencia en las regiones de Colombia, y en particular en la ciudad de Medellín.

Como ya se afirmó es de resaltar que ha existido un gran avance y compromiso por parte de la Alcaldía de Medellín en la generación de una cultura de toma de decisiones técnica basada en evidencia rigurosa y pertinente. En este sentido los procesos de construcción de conocimiento que han derivado en pistas de rediseño de la política pública de seguridad y convivencia, requieren robustecer uno de los más importantes momentos de cambio que se hace muy probable en el corto plazo en el país. Por esta razón, es apremiante desarrollar análisis asociados con posibles escenarios de construcción de paz y postconflicto en las regiones, así como las posibles implicaciones para las estrategias que han definido esta y anteriores administraciones locales, en temas de seguridad y convivencia en el nivel local.

- *Contexto y justificación*

Por sus características económicas, sociales y territoriales el Departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín han sufrido de manera crítica las peores manifestaciones y efectos de las dinámicas de violencia y de la guerra en Colombia. Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (2015), Antioquia es el segundo departamento en magnitud de afectación de la guerra en el país, y Medellín ha pagado los costos de una larga y dura historia de efectos residuales de la guerra en su manifestación urbana, así como en las dinámicas de mutación o reciclaje de actores y relaciones

perversas que transitan de la guerra a la criminalidad organizada. Por esta razón, no es descabellado pensar que gran parte de la población involucrada y afectada se asiente en zonas urbanas del país.

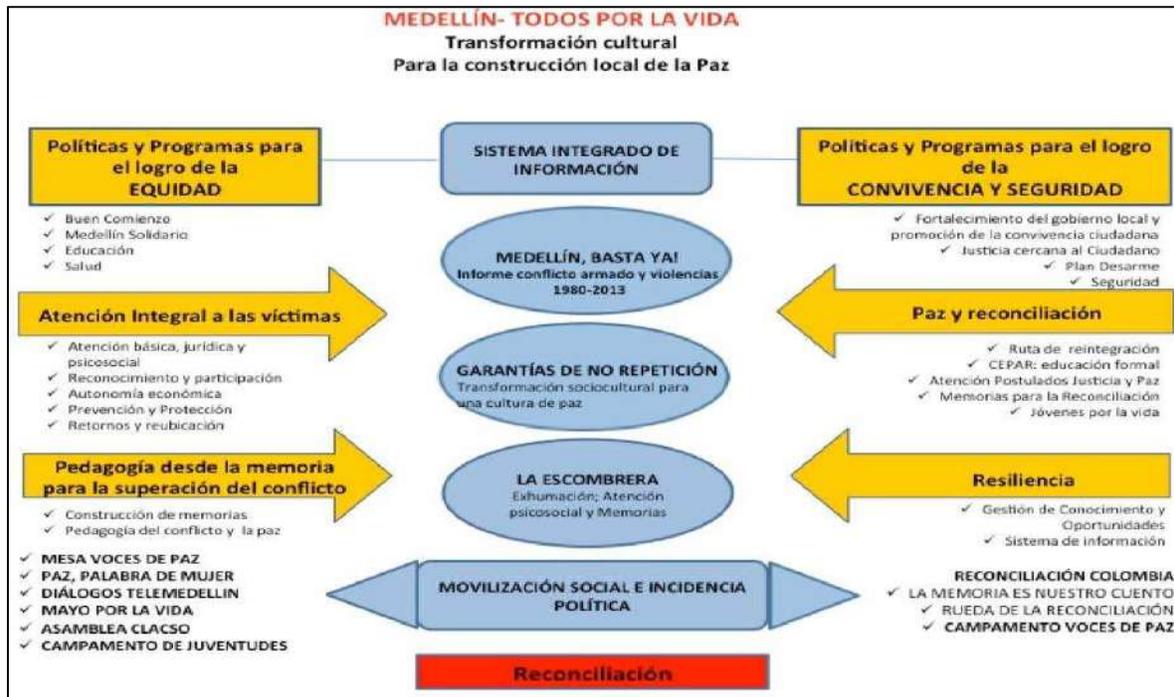
En este sentido, Medellín es un escenario atractivo no solo por la posibilidad de anonimato para los excombatientes y sus bases de apoyo, sino también para las víctimas directas e indirectas de la violencia interesadas en empezar una nueva vida. Lo es además para una franja de población que en un nuevo contexto valorará las oportunidades económicas y sociales que la ciudad, su institucionalidad y mercados ofrecen para iniciar una nueva vida. Así mismo, preocupa que por su pujanza económica y los incentivos para la extracción de rentas criminales, pueda ser escenario para el reciclaje de viejas organizaciones o para el nacimiento de nuevas alianzas criminales entre los grupos residuales en un escenario de paz (InSight Crime, 2015; FIP, 2015).

La historia comparada demuestra que la tendencia natural de los procesos de paz se expresa en brotes de violencia social por diferentes motivos, además en donde hay capital humano preparado para la violencia y la percepción de incentivos para la reincidencia inevitablemente se espera una afectación de la situación en materia de seguridad y sobre todo de convivencia. Hay que recordar que con el éxito del proceso de paz se da tan solo un paso en el aseguramiento del orden social en el país, sus regiones y sus ámbitos más locales. En este sentido, la sociedad local enfrenta los retos y desafíos de la construcción de paz territorial (Jaramillo, 2014) que para su logro debe garantizar la resolución y la estabilidad de los problemas gemelos de la seguridad y la convivencia (Casas, 2015), y las profundas brechas generadoras de asimetrías e inequidades en los proyectos de vida (USAID, 2014); la integración social y la dignificación de la vida laboral de un preocupante porcentaje de población que en Medellín, sigue siendo condenada a la muerte, la violencia, la prisión o la informalidad por su juventud, género, lugar de residencia y por no tener un trabajo digno (Méndez y Casas, 2015).

Estas consideraciones buscan contribuir a fortalecer el Sistema de Seguridad y Convivencia (SISC) y la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, en tanto la ciudad requiere de pautas de intervención frescas y complejas, así como de procesos de producción y sistematización información, monitoreo y evaluación acordes a los desafíos de los nuevos escenarios políticos y sociales a nivel nacional y departamental propios de un contexto de postacuerdo. De cualquier manera, como afirman Giraldo y Preciado (2015) las condiciones parecen estar dadas para que Medellín se ratifique como uno de los laboratorios de la construcción

de paz territorial y de la gestión del tránsito de la guerra a la paz y del proceso que ha vivido la ciudad en la última década.

Gráfica 1. Proyectos estratégicos de transformación cultural para la construcción local de paz en Medellín 2013-2015



Fuente: Comité de Postconflicto-Alcaldía de Medellín, 2015.

En el mismo espíritu, este estudio busca desarrollar los avances alcanzados en las investigaciones previas realizadas por el CAP-EAFIT para la Secretaría de Seguridad, en especial dado el importante terreno ganado por el SISC; identificando sinergias para el diálogo entre el Acuerdo 21 de 2015 y los proyectos estratégicos que la ciudad viene desarrollando de cara a la transformación cultural para la construcción local de paz en la ciudad (Ver gráfica 1). Se busca así contribuir a fortalecer la definición de pilares pertinentes para una agenda de postacuerdo en la ciudad para los próximos años con el fin de aprovechar, de manera consciente y pertinente, los escenarios que se avecinan a partir de intervenciones complejas, sensibles, sostenibles y transformadoras en la materia.

- *¿Cómo pensar alternativas a problemas para la toma de decisiones pertinentes y efectivas en contextos de incertidumbre?*

Como lo ha planteado el International Crisis Group (2014, i),

“Ninguno de los elementos necesarios para lograr la estabilidad en el periodo inmediatamente posterior al conflicto es enteramente nuevo en el contexto colombiano, pero en su conjunto romperán el molde de los anteriores programas de desarme y reintegración. Los negociadores deberán mostrar flexibilidad y tenacidad, y el gobierno deberá renovar sus esfuerzos por impulsar la apropiación social del proceso de paz, en particular en zonas de conflicto. Las anteriores transiciones se tambalearon debido a los altos niveles de violencia, la indiferencia pública, y la tímida participación internacional. Esta vez se necesita una respuesta más rápida y audaz para encauzar a Colombia irreversiblemente hacia la paz”.

Las aproximaciones recientes desde las ciencias cognitivas a los fenómenos sociales e institucionales (Mantzavinos, 2001; Mantzavinos, North y Shariq, 2004), nos enseñan que los seres humanos habitamos un mundo no-ergódico (North, 2005) dominado por la incertidumbre y la contingencia. En un contexto así, la mente desarrolla mecanismos para domesticar la incertidumbre a través de procesos de aprendizaje, individual y compartido, que permiten el tránsito desde la ausencia de soluciones a la estabilización de soluciones a problemas nuevos que al ser enfrentados pasan a constituir problemas viejos o conocidos para los cuáles hay ya una estrategia de solución (Mantzavinos, 2001; Mantzavinos, North y Shariq, 2004). Así, en una escala más amplia, surgen mecanismos sociales y políticos (instituciones) que permiten enfrentar soluciones que se repiten en el tiempo, y cuya expresión contemporánea más estilizada yace en las políticas públicas.

Pero, ¿Qué ocurre cuando aparece un problema nuevo, aunque provenga de una dinámica ya conocida e incluso tenga referentes de manejo en el pasado? ¿Qué pasa cuando por sus consecuencias sociales la presencia de un fenómeno incrementa la incertidumbre y demanda la definición de estrategias de alistamiento y gestión para las inesperadas consecuencias que pueden desprenderse del mismo? La realidad está poblada por innumerables experimentos naturales cuya ocurrencia reta permanentemente la vida colectiva de los pueblos. Ante la incertidumbre y la no disponibilidad de soluciones los sistemas políticos contemporáneos han evolucionado desarrollando funciones, procesos, roles y cargos para enfrentar dichos contextos. Sin embargo, los sistemas políticos dependen de la toma de decisiones de personas, ya sea de sus funcionarios y expertos asesores para contrarrestar los efectos negativos de los problemas colectivos nuevos, o para

aprovechar los réditos positivos que puedan derivarse de la contingencia. En consecuencia, se contratan estudios científicos o de otro tipo para estimar costos y beneficios, así como posibles cursos de acción. Sin embargo, cuando una situación es nueva y compleja ¿Realmente quién conoce la solución o puede demostrar tener la mejor receta para que sea la regla que guíe la acción ante el nuevo desafío? ¿Cómo se define cuáles son las temáticas prioritarias y sus soluciones cuando no hay soluciones comprobadas a un problema novedoso?

Sin duda, un escenario de postacuerdo en Colombia plantea una situación de este tipo, ya que abre múltiples escenarios posibles cuya ocurrencia es difícil de estimar con precisión para definir cursos de acción y tomar decisiones. Si a esto se suma la complejidad dada por el gran número de variables involucradas, resulta todo un reto establecer los efectos que pueden venir con la firma de la paz en las regiones del país, sus ciudades y sus localidades.

En este sentido, el diseño metodológico general del proyecto se inspira en los mecanismos estudiados por autores como sunstein (2006) y James Surowiecki (2004) que demuestran como en ocasiones la heurística humana permite que los grupos resuelvan problemas nuevos mucho mejor de lo que lo hacen los individuos por su cuenta. El fenómeno conocido como ‘la sabiduría de los grupos’ (The Wisdom of Crowds), surge de la observación que comprueba la idea proveniente de la sabiduría popular que reza: “*dos cabezas funcionan mejor que una*”. El supuesto que subyace a esta teoría es que un grupo de personas independientes toman mejores decisiones, e incluso hacen predicciones más acertadas, que un solo individuo o que un experto dadas cierto tipo de condiciones.

En consecuencia, el diseño metodológico de tipo cualitativo emplea dos técnicas principales: entrevistas y análisis del estado del arte sobre el tema de estudio en diferentes fuentes primarias y secundarias; adicionalmente, se utilizaron tres técnicas complementarias: análisis de prensa y socialización de resultados en un evento, a manera de grupo focal. La escogencia de la caja de herramientas para llevar a cabo esta tarea se dió en razón de la necesidad de cumplir con el objetivo de la consultoría, que fue el de: investigar los escenarios, retos y recomendaciones para Medellín en un contexto nacional de postconflicto, y puntualmente de identificar escenarios de intervención, seguimiento y monitoreo en materia de seguridad y convivencia; en torno a programas y proyectos que puedan facilitar un escenario de postacuerdo en la ciudad tras la firma de un eventual acuerdo de paz con las FARC.

Las fuentes principales del estudio son tanto primarias como secundarias. Las fuentes primarias contribuyeron a comprender cómo están configuradas las percepciones de un grupo de expertos y practicantes en la materia, así como las valoraciones que hacen sobre posibles escenarios de transición hacia la paz en la ciudad y sus retos asociados. Adicionalmente, las fuentes secundarias se constituyeron con base en la revisión de la literatura en clave comparada, de estudios de caso acerca de los impactos del postconflicto en la seguridad y convivencia a nivel internacional, y de aquellos disponibles sobre la ciudad de Medellín. Así mismo, se indagó por las políticas y los programas en clave de las categorías de análisis propuestas, lo cual buscó generar información comparada a nivel internacional, nacional y local para la definición de los escenarios, retos y recomendaciones que se desprenden de este trabajo¹.

La justificación de apostar por una aproximación cualitativa que de cuenta de la percepción de expertos de distintos sectores frente al postconflicto en la ciudad, se sustenta en que a través de esta metodología se logran captar una variedad de interpretaciones y las relaciones de estas con el contexto y el tipo de grupos sociales que se esté considerando (Svenden, 2006, p. 42). Cabe aclarar que estas interpretaciones no solo se dan a partir de lo que ocurre en el contexto actual de la ciudad, pues la particularidad de este estudio es que busca recabar información y percepciones sobre las imaginaciones, proyecciones y especulaciones que diferentes personas y grupos tienen sobre el futuro de la seguridad y convivencia en la ciudad de Medellín.

En particular, se hace uso de la metodología *Delphi* o Delfos en castellano, una estrategia de análisis de información cualitativa que como su nombre lo sugiere, es un método prospectivo que parte del supuesto de que bajo ciertas condiciones los juicios de un grupo estructurado son más válidos que los de un individuo (Green et Al, 2007; Turoff, 1970). El *Delphi* es un método interactivo de prospectiva basado en un panel de expertos. Dentro de esta estrategia, el empleo de entrevistas y una sesión de socialización, a manera de grupo focal, es fundamental para construir narrativas individuales y colectivas sobre un tema tan complejo como el objeto de esta consultoría; sirve, además de estimar situaciones, para hacer explícitas las preferencias, sentimientos, motivaciones y perspectivas de los participantes.

¹ La revisión del estado del arte se funda en la generación de un marco teórico y también de una serie de intervenciones asociadas a un problema de política pública. El empleo de estas dos técnicas de investigación buscó, además de profundizar en el objetivo señalado de la consultoría: señalar qué rasgos compartidos y diferencias se evidencian a través del análisis de las fuentes de información; así como triangular ciertas categorías de análisis en aras de identificar los retos y recomendaciones para la definición de los posibles escenarios.

Para esto, y como se explicará más adelante en detalle en la sección metodológica, en un primer momento las entrevistas facilitaron la identificación de posibles escenarios que los expertos consideraron pueden resultar tras la firma de un acuerdo con las FARC; y posteriormente en el evento de socialización se presentaron y analizaron conjuntamente los escenarios, retos, recomendaciones y actores clave resultantes. Cabe mencionar que dentro del grupo seleccionado como participante para el estudio los entrevistados son expertos académicos y de centros de pensamiento, otros son actores que han tenido, tienen o tendrán injerencia en los anteriores, presentes y eventuales escenarios del postconflicto urbano, son practicantes de la construcción de paz, funcionarios públicos, representantes de organizaciones sociales. Finalmente, por su importancia se indagó por las experiencias, opiniones y expectativas de un grupo de personas en proceso de reintegración a la vida civil del Programa de Paz y Reconciliación provenientes de las AUC y de las FARC. Estos tres perfiles de entrevistados proveen información complementaria al ser actores directos, observadores indirectos, y participantes de este tipo de procesos.

Adicional a los instrumentos, el diseño metodológico general del proyecto parte de cuatro categorías generales a partir de las cuales se elaboraron los instrumentos y se realizó el análisis. Estas son: escenarios, retos, recomendaciones y actores clave, como se puede observar en el siguiente gráfico.

Gráfica 2. Diseño metodológico del proyecto



Fuente: Elaboración propia

Se espera que los hallazgos respondan en clave propositiva y prospectiva con el fin de contribuir al trabajo de la unidad de análisis cualitativo del SISC y de la administración municipal actual; así como para los próximos mandatarios y servidores de la ciudad con la esperanza de que mantengan el proceso virtuoso que ha recorrido Medellín en la última década, y profundicen el gran avance técnico en materia de políticas y programas de seguridad y convivencia, de cara a la construcción municipal de paz desde los territorios y para las poblaciones de las 16 Comunas y los 5 corregimientos de la ciudad.

I INTRODUCCIÓN

En los albores del siglo XXI, Colombia se prepara para lo que promete ser un punto de ruptura en la historia del país: la finalización del conflicto armado que por cinco décadas ha atormentado a un porcentaje significativo de la población y ha tenido profundos impactos en los diferentes niveles y dimensiones de la vida nacional, regional y local (Observatorio de Derechos Humanos, 2013). Pese a que no es la única fuente de las principales problemáticas actuales en materia de seguridad y convivencia en el país, su persistencia ha cobrado un grave y complejo impacto en varias generaciones de colombianos que han vivido y muerto sin conocer un país en paz (CNMH, 2013). En la vida de cientos de miles de familias víctimas directas e indirectas las atrocidades de la guerra han dejado una marca imborrable en sus cuerpos, corazones, mentes y territorios.

Su legado se ha expresado en que la incertidumbre sea la regla en la vida de millones de colombianos, la continua erosión de los precarios lazos entre el Estado y las comunidades, de la confianza en las instituciones y la precaria representación de los intereses de los ciudadanos más vulnerables o que habitan en la provincia; así como en la desesperanza frente a la política y las instituciones democráticas para domesticar la incertidumbre, el uso privado del poder y la violencia, y en su capacidad de usar los métodos de coerción de manera productiva para promover un juego incluyente de generación de riqueza y bienestar (Casas, 2015).

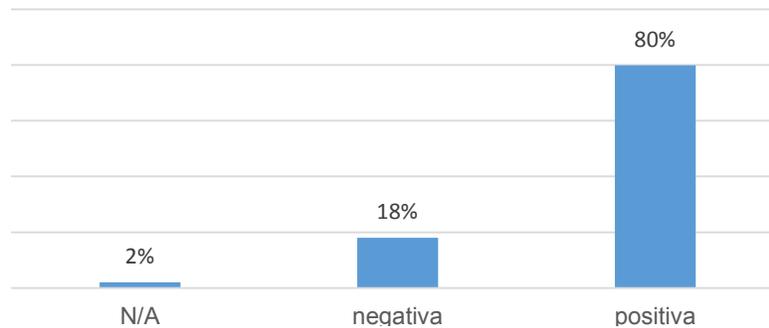
Colombia está *ad portas* de convertirse en un país que vivirá el postconflicto armado entre el Estado y la Guerrilla más antigua del mundo contemporáneo. Sin embargo, para nadie es un secreto que los factores de producción y de reproducción de la violencia continuarán pese a los acuerdos firmados en La Habana, Cuba (Ins Sight Crime, 2015, USAUD, 2014, International Crisis Group, 2014). La violencia y los conflictos violentos son factores persistentes de la vida social de los colombianos y no se puede esperar encontrar soluciones definitivas a los mismos; sobre todo cuando las condiciones, recursos e incentivos que motivan y facilitan el uso arbitrario de la violencia siguen disponibles en ambientes institucionales débiles, con presencia de economías ilegales, altos niveles de pobreza e inequidad, formas de exclusión y marginalidad de grupos poblacionales clave, formas de inclusión perversas a actividades de riesgo para la integridad personal y los proyectos de vida, en

entornos sociales con baja eficacia colectiva y pocas herramientas para la gestión pacífica de los conflictos.

La importante cantidad de análisis de prensa, opinión, así como de investigaciones y reportes sobre la actual coyuntura, coinciden en el hecho de que la Colombia del postacuerdo tendrá que lidiar simultáneamente con múltiples factores que prometen un escenario complejo en el que la seguridad y la convivencia tendrán nuevas amenazas proveniente, ya como fruto de la reorganización de los equilibrios de las estructuras criminales asociadas al narcotráfico y a otras rentas criminales; bien sea por la búsqueda del Estado de victorias tempranas en materia de monopolización de la violencia en territorios previamente controlados por las FARC y otros grupos al margen de la ley; sea ya por la eclosión de conflictos latentes o nuevos conflictos que puedan tener expresiones de violencia dada la carga del pasado, y la disponibilidad y recursos para ejercerla; o por la simple inercia o agudización de los factores que han contribuido y más aportan a los índices de inseguridad dada la acelerada urbanización que vive el país, así como de convivencia violenta motivada por conductas ciudadanas en los ámbitos más próximos y cotidianos.

El análisis de prensa realizado como insumo para este estudio, y que comprendió el periodo del 1 de Enero de 2012² al 30 de Julio de 2015, ilustra la percepción que en la opinión pública suscita el postconflicto. El 80% de los artículos y noticias publicadas, tanto nacionales como internacionales, refleja una percepción positiva del proceso y sus retos, y un 18% se refiere a dicho fenómeno de manera negativa o pesimista.

² La fecha inicial corresponde al año en el que iniciaron los diálogos de paz entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y una fecha de corte correspondiente al cierre de esta fase de investigación en torno al análisis documental. A pesar de que las conversaciones empezaron oficialmente en Octubre de 2012, el análisis se llevó a cabo desde el mes de Enero, debido a que desde ese mes existe registro de material de prensa. Los medios que se tuvieron en cuenta a nivel nacional fueron: El Espectador, El Tiempo, El Colombiano, El Mundo, Revista Semana (Online), La Silla Vacía y Las Dos Orillas. Además se incluyeron tres medios de relevancia internacional que fueron: The Economist, The Guardian y El País. Estos medios (nacionales e internacionales) fueron escogidos arbitrariamente por el equipo de investigación dado su alcance, impacto y reputación. El análisis de prensa buscó obtener información complementaria a las entrevistas; cabe mencionar que este ejercicio es simplemente indicativo de lo que puede ser un proceso profundo de monitoreo de medios, por lo cual los resultados deben considerarse en su carácter ilustrativo y no representativo pues solo se registraron las noticias con mayor número de apariciones en prensa, radio y televisión.

Gráfica 3. Percepción sobre el postconflicto en los medios

Fuente: Elaboración propia

Los porcentajes presentados anteriormente permiten aseverar que los medios de prensa consultados y sus columnistas, tienen una percepción mayoritariamente positiva del postconflicto. Una de las fuentes entrevistada plantea que “hay que pregonarlo sin ambages: que todas las regiones asuman este compromiso. Si por alguna razón las negociaciones no arrojan los resultados que esperamos, igual Colombia tendrá una oportunidad histórica, porque producto de esas manifestaciones, procesos y eventos, dispondremos de una ciudadanía preparada para afrontar los retos que se presenten” (Fajardo, 2013).

En contraposición a lo anterior y de manera más pesimista, una minoría de columnistas tienen una posición negativa la cual se centra en el posible aumento de acciones de bandas delincuenciales dedicadas a controlar negocios ilegales que tienen que ver con microtráfico, extorsión, etc. Además de las disputas que puedan generarse por la captura de los espacios dejados por las FARC: “Si el crimen común u organizado derivado o complementario de las economías ilegales narcotráfico, minería ilegal [...] se esparce y golpea por los cuatro puntos cardinales de la patria en un sinnúmero de modalidades cada vez más audaces y violentas, al tiempo que centuplica su accionar, ¿qué podría ocurrir mañana cuando la paz se firme en la Habana? Simple: la violencia será superior a aquella que venía siendo generada por el conflicto armado” (Uribe, 2015).

En general la agenda mediática en torno al postconflicto en materia de seguridad y convivencia se concentra en temas específicos tales como la construcción de paz en las regiones o posibles reformas de las fuerzas armadas y desminado. Es de destacar que Medellín es mencionada como una ciudad clave en temas de Desmovilización, Desarme y Reintegración (DDR), pues debido a sus experiencias pasadas (desmovilización paramilitar en 2003) y dada su capacidad institucional puede

ser un punto de llegada de desmovilizados. Por otro lado, medios nacionales e internacionales, hacen alusión a las iniciativas de construcción de paz que ha adelantado la ciudad como el Museo Casa de la Memoria, ‘La escombrera’ y las intervenciones en urbanismo social. Se puede afirmar entonces, que según el poco material de prensa encontrado en lo que respecta al papel de las ciudades en el postconflicto, en este caso Medellín, va a estar limitado a temas específicos, pero a su vez la administración local deberá destinar recursos para hacer procesos de construcción de paz que necesita el país con el fin de garantizar la no repetición. Se debe precisar que el debate del postconflicto en los medios no ha estado protagonizado por el papel que tendrán las ciudades. Incluso medios locales como El Mundo y El Colombiano no le dieron, hasta la fecha revisada, una notable importancia al tema del postconflicto en Medellín.

Por un lado, ya sea por sentido común o siguiendo la opinión informada, se espera que el colombiano esté lejos de ser un postconflicto pacífico y sin obstáculos. Las pocas investigaciones prospectivas basadas en la observación juiciosa de dinámicas organizacionales o en datos independientes sobre la situación actual de las FARC en el país no son alentadoras. Estos estudios independientes coinciden en el gran reto que las rentas criminales y la vinculación al negocio del narcotráfico representan para favorecer la fragmentación y una posible facrinización (McDermott, 2015, InSight Crime, 2015, International Crisis Group, 2014). Por otro lado, la opinión pública está dividida frente a las posibilidades de una genuina paz en el país. Mientras que en el campo, al menos en Antioquia, el impacto sobre la vida, la seguridad y la convivencia será importante; en las ciudades no hay grandes expectativas en cuánto al impacto positivo del postacuerdo en la reducción de factores de seguridad y convivencia en Medellín (Alcaldía de Medellín –CAP EAFIT, 2015 y Gobernación de Antioquia- CAP EAFIT, 2014).

En un contexto como este surgen preguntas fundamentales para la toma de decisiones en la ciudad ¿Cómo hacer para que en Medellín la paz no sea peor que la guerra?³ ¿Cómo aprovechar la experiencia de la guerra para enfrentar la incertidumbre de la transición hacia la paz? ¿Cómo establecer dichos retos dados los cambios que ha vivido la ciudad en los últimos años? ¿Está Medellín preparada para enfrentar los retos que en materia de seguridad y convivencia podrá traer un acuerdo de paz con las Farc?

³ Esta poderosa frase es una adaptación de la idea que Lothar Witte director de Fescol ha venido animando socráticamente la discusión sobre construcción de paz en Colombia en diferentes foros en todo el país.

Este informe reúne los resultados de un ejercicio de inteligencia colectiva, desarrollado con el fin de resolver estas preguntas, establecer y estimar la ocurrencia de escenarios, con el fin de ofrecer las bases de una agenda en materia de seguridad y convivencia que le permita a Medellín prepararse y aprovechar la oportunidad de la transición y la construcción de la paz a través de sus territorios físicos y simbólicos.

El texto presenta los resultados de la revisión de fuentes secundarias concentrada en los estudios comparados sobre postconflicto, seguridad y convivencia, así como la experiencia de Medellín en procesos de paz y posconflicto. Además, ofrece el producto del levantamiento y análisis de fuentes primarias a partir de entrevistas, grupos focales y validación de expertos; un ejercicio que involucró 71 participantes entre desmovilizados de diferentes grupos armados, expertos locales, nacionales y extranjeros provenientes de la academia, la toma de decisiones, y de la experiencia práctica de construcción de paz en el país y en la ciudad.

El informe se divide en cuatro secciones adicionales a esta introducción. En la segunda sección se exploran los fundamentos analíticos y empíricos de la relación entre postconflicto, seguridad y convivencia. La tercera presenta la metodología del estudio y los aspectos técnicos para el establecimiento, interpretación y análisis de la información recogida. Para analizar los posibles efectos del postacuerdo para la seguridad y la convivencia en Medellín, en la cuarta sección se exploran los escenarios, retos institucionales, actores clave e implicaciones para la ciudad. Por último, se esbozan los elementos generales de una agenda en materia de seguridad y convivencia en un escenario de postacuerdo en la ciudad.

Con este trabajo se busca contribuir a promover la conversación ciudadana sobre los significados y retos del postacuerdo y el desarrollo de una agenda de cara a la construcción local de paz en los territorios de la ciudad. Se espera que la información consignada le permita a los nuevos gobernantes del municipio, así como a todas y todos los medellinenses aprovechar las oportunidades transformadoras del tránsito de la guerra a la paz, para que la ciudad se convierta en un laboratorio local de construcción de paz territorial. Además de garantizar el buen vivir en sus territorios, Medellín puede aprovechar el desafío del postacuerdo para de manera innovadora convertirse en referente para otras ciudades que aún no se preparan para enfrentar los retos y tomar ventaja de las oportunidades que traerá la paz.

II. POSTCONFLICTO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA⁴

Lothar Witte, director de Friedrich Ebert Stiftung en Colombia y coordinador del *Observatorio Colombiano de Violencia y Gobernanza*, ha venido fomentando la discusión sobre la construcción de paz en el país y sus regiones, sosteniendo una poderosa idea: ¿Cómo hacer para que en Colombia la paz no sea peor que la guerra? El investigador colombiano Juan Albarracín advierte que de haber una negociación exitosa en La Habana, Colombia caerá en la normalidad de América Latina en materia de seguridad y convivencia. Lo cual no es bueno si se tiene en cuenta que América Latina hoy se ha convertido en la región más peligrosa, violenta e insegura del mundo (CAF, 2014; PNUD; 2013).

En este sentido, la firma de la paz no es garantía de un tránsito automático a un estado más positivo del mundo, dados diferentes factores relacionados con el sendero recorrido por Colombia y sus regiones en materia política, social, económica, cultural y territorial (InSight Crime, 2015; USAID, 2014; International Crisis Group, 2014). Son múltiples los factores que harán que el postconflicto colombiano no sea sencillo ni pacífico. Los riesgos provienen de múltiples fuentes y afectan la multi-dimensionalidad de los espacios de relación de la vida institucional, organizacional, interpersonal e intrapersonal (Casas y Méndez, 2015). Dado esto y como lo propone Albarracín, y la gran mayoría de los expertos invitados a participar en este estudio, es importante manejar las expectativas que se tienen frente a los alcances de la firma de un acuerdo con las FARC, pues dado el peso del pasado y la superficialidad de algunos de los acuerdos el resultado puede ser el de la vida tal y como ya la conocen los colombianos en sus espacios locales (“Business as usual in subregional Colombia”).

Así, vale preguntar por cuáles son los alcances esperados del acuerdo en clave de seguridad y convivencia para la ciudad de Medellín. En sintonía con la literatura internacional, el punto de intersección y entrada a la relación entre postconflicto, seguridad y convivencia yace en el problema no resuelto del orden social, ya que una transición de esta magnitud como en otras en el mundo la seguridad es requisito indispensable para poder hablar de paz. En este sentido el problema no es solo militar o policial, es un problema político relativo al fenómeno de construcción estatal (State building). Si se quiere sacar a Colombia de la ‘normalidad’ de la situación de seguridad y

⁴ Esta sección se soporta en el ejercicio de revisión de literatura que se basó en la revisión de 200 referencias bibliográficas y el análisis de 71 documentos con 25 estudios de caso. Estos documentos muestran algunos de los énfasis que se hace en la literatura sobre construcción de paz, políticas públicas y postconflicto.

convivencia que atraviesa América Latina, el postconflicto puede ser la oportunidad para transformar los factores causales, los mecanismos de reproducción y naturalización, así como los efectos que justifican el uso arbitrario, selectivo o indiscriminado de la violencia.

Como lo sugieren varios de los expertos participantes en este estudio, la pregunta de cómo hacer que la paz no sea peor que la guerra, implica introducir la complejidad adicional de un país de renta media, con un acelerado proceso de urbanización, con altos niveles de inequidad y una población que aunque envejece es mayoritariamente joven; marcado por transformaciones en las dinámicas de violencia, criminalidad y convivencia, que de alguna manera han evolucionado de manera independiente a la guerra en el campo. Es en este punto que la literatura sobre postconflicto se queda corta para entender y prever los retos urbanos del postconflicto en Colombia, particularmente en Medellín.

Los estudios empíricos locales sobre la relación explícita entre postconflicto, seguridad y convivencia son escasos y este es un tema aun sujeto a la especulación. Sin embargo algunos estudios clave vienen llenando ese vacío en el país. En el excelente trabajo liderado por Rettberg (2012) diversos autores ofrecen evidencia sobre temas clave para esta relación: Prieto (2012) analiza la coexistencia local entre víctimas, excombatientes y comunidades en Bogotá, Medellín y Valledupar; Palou y Méndez (2012) estudian las lecciones que en el nivel macro y micro dejan los procesos de DDR en Colombia entre (1990 y 2012); Llorente y Vranckx (2012) investigan el problema del control democrático de las armas ilegales en Colombia en clave de construcción de paz; Shultze-Kraft (2012) indaga por la cuestión militar en Colombia y los retos para la construcción de paz, señalando la importancia de las reformas requeridas en las Fuerzas Armadas, así como en las relaciones cívico-militares en un escenario de transición; Arreaza y Mason (2012) estudian el balance del rol de los actores internacionales en la construcción de paz en Colombia; Chaux (2012) identifica los retos y avances de la educación para la convivencia en la construcción de paz; por su parte, Rettberg y Rivas (2012) y Vargas (2012) analizan empíricamente los retos para el sector empresarial, así como la economía del postconflicto y los desafíos económicos para la construcción de paz.

En otro importante esfuerzo liderado por Vargas y Caruso (2013) para entender la relación entre políticas públicas y la economía de la paz en clave de seguridad humana: Arias, Ibáñez y Querubín (2013), analizan las condiciones y motivaciones para el retorno de los desplazados a sus zonas de origen; Cortés y Montolio (2014), estudian estadísticamente cuáles pueden ser las mejores políticas

para reducir la violencia en un contexto como el colombiano; Cárdenas, Casas y Méndez (2013) usan un análisis de economía experimental para estudiar causalmente los retos de la política pública a partir del estudio de los microfundamentos de la justicia y la discriminación de poblaciones vulnerables en la distribución de bienes y servicios en contextos de justicia transicional.

Así mismo, otras importantes contribuciones han sido realizadas por: Arjona (2014) sobre los retos que plantea el peso territorial de las instituciones de la guerra; Moya (2014), sobre los efectos de la guerra en la salud mental y la pobreza; Villa, Restrepo y Moscoso (2014) desarrollan un Modelo Solow-Swan modificado para analizar los retos que para el dividendo de la paz plantea en Colombia la relación entre crecimiento económico, conflicto armado y crimen organizado. De manera reciente se destacan los trabajos de Zukerman y sus colegas en colaboración con la Fundación Ideas para la Paz (2014), quienes usan experimentos de lista para analizar los factores que pueden explicar por qué unos excombatientes reinciden y otros no, así como los aprendizajes para el ajuste de las políticas de reintegración en el país; se destaca el trabajo de Ugarriza y Nussio (2015), quienes a través de experimentos psicológicos exploran mecanismos de reconciliación entre excombatientes y miembros de comunidades afectadas por la violencia en Colombia. Estos estudios aunque contribuyen a un campo seminal que desde el esfuerzo interdisciplinario permite producir análisis empíricos locales, contribuyen a pensar la relación entre postconflicto y políticas públicas en el área de la seguridad y la convivencia, siguen siendo aún marginales dentro de la producción nacional y regional.

En este mismo sentido, esta sección busca sentar de manera panorámica algunos de los puntos de encuentro y de borrosidad dentro la literatura sobre postconflicto, seguridad y convivencia, con el fin de establecer un terreno de discusión con el problema que plantea la construcción de paz en una ciudad como Medellín; así como servir de referente para la interpretación y diálogo para las secciones posteriores de este estudio. En primer lugar, se explora el estado del arte sobre la relación entre postconflicto, seguridad y convivencia; en segundo lugar, los aprendizajes internacionales en materia de políticas públicas dirigidas a la seguridad y la convivencia en situaciones de postconflicto; en tercer lugar se aborda la cuestión urbana dentro los estudios de transición hacia la paz; a continuación se aborda el contexto subregional en el que se dará un posible postconflicto en el departamento de Antioquia; finalmente se exploran los antecedentes de otros procesos y las implicaciones para la ciudad de Medellín.

Postconflicto, seguridad y convivencia: vínculos, cruces y aprendizajes

La búsqueda realizada permitió establecer que pese a la impresionante expansión de los estudios sobre conflictos armados, economía política de la guerra y de las guerras civiles, resolución de conflictos, hacer la paz (Peace making), construcción de paz (Peace building), mantenimiento de la paz (Peace keeping); transición hacia la paz, justicia transicional, DDR, entre otras categorías clave relativas al área de los estudios de paz, el campo interesado en la relación entre postconflicto, seguridad y convivencia está aún en desarrollo. Esto se constata cuándo la búsqueda se centra en situaciones de postconflicto resultantes de la finalización de conflictos armados internos, y en sus efectos sobre las ciudades en países que no fueron colapsados por la guerra.

Existe así un área difusa entre el estudio de la reconstrucción después de la guerra civil y otras formas de conflicto armado interno con intervención internacional para la reconstrucción (miradas inspiradas por autores de la talla de Boutros Galhi, Galtung, Lederach o Barnett), y el problema de la violencia después de la guerra en países con procesos de transición negociada o por victoria militar sin transición política ni intervención internacional. Dado el espacio limitado este estudio no explora este asunto, pero llama la atención sobre lo seminal del estudio no normativo de casos que analicen y establezcan evidencia sobre la relación entre postconflicto, seguridad y convivencia en ciudades. Para el caso que nos convoca, es inevitable el traslapo de la literatura de frontera entre postconflicto y violencia urbana, como el lector podrá identificar, dados los autores y el tipo de trabajos seleccionados.

Pese a los aspectos señalados arriba, la literatura internacional aborda una amplia variedad de experiencias⁵ en las cuales se resaltan los efectos del postconflicto en la seguridad y la convivencia, permitiendo encontrar aprendizajes que pueden ser retomados por la ciudad de cara a un eventual escenario de postconflicto.

Para autores como Junne y Verokren (2005) el postconflicto es una situación en la que el enfrentamiento militar abierto ha terminado. Dichas situaciones se caracterizan por el mantenimiento de la tensión durante años y hasta décadas, y fácilmente pueden renacer en escenarios de violencia a gran escala. Para Collier y sus colegas (2006) el riesgo de recaída o retorno al conflicto armado en los primeros 4 años es de 23%, en los siguientes 6 años de 17%, y en

⁵ Para la realización de este trabajo se hizo una recopilación de más de 200 referencias bibliográficas donde se abordan 25 estudios de caso. Estas fueron obtenidas por recomendación del equipo de expertos nacionales e internacionales que asesoraron la investigación, así como por la búsqueda realizada por los investigadores.

los primeros 10 años es de 40%. Como lo ha planteado Rafael Grasa, “hacer las paces no es lo mismo que hacer la paz” (2015).

Uno de los hallazgos centrales de la literatura internacional sobre postconflicto, seguridad y convivencia, tiene que ver con el fortalecimiento del Estado (Jutersonke, Muggah y Rodgers, 2010; Pearce 2010; Ayuero, Burbano de Lara y Berti; 2014) que permita garantizar su presencia en las zonas marginales, dado que en ellas es frecuente encontrar estructuras criminales que se nutren de la presencia difusa de las instituciones oficiales; o simplemente existen condiciones que facilitan la creación, migración o consolidación de mercados políticos criminales que pueden resultar atractivas para los excombatientes, razón por la cual, es necesario el diseño e implementación de políticas de reintegración integrales que mitiguen dichos riesgos (Wiengik, 2013).

Dentro de los aspectos de mayor importancia se encuentran, la presencia y control de las zonas marginales, el monopolio de las armas y la lucha contra las economías criminales, dado que, “la mayor amenaza para Colombia tras cualquier acuerdo de paz con las FARC es el crimen organizado” (McDermott, 2015, p. 15) que tiene un efecto negativo para la seguridad y convivencia de los territorios donde opera, en su mayoría zonas marginales con baja presencia estatal. Para Junne y Verokren (2005) en áreas en las que el conflicto era más intenso, hay una ausencia de guerra que no implica necesariamente una paz verdadera.

Para autores como Jutersonke, Muggah y Rodgers (2010) y Pearce (2010), es necesario que el Estado cuente con la capacidad de control en las zonas marginales de las ciudades, dado que en ellas, el poder del Estado es difuso y por consiguiente se dan las condiciones para la existencia de estructuras criminales que ponen en jaque la seguridad y convivencia de la ciudad. En esa misma línea, Ayuero, Burbano de Lara y Berti (2014), resaltan la importancia de las relaciones entre el gobierno y los barrios marginales, las cuales, según ellos, oscilan entre la fuerza y la distribución del bienestar social, razón por la cual en escenarios de postconflicto deben ser objeto de un tratamiento especial que contrarreste las probabilidades de reinserción de excombatientes en estructuras criminales, principalmente por la alta capacidad de negociación otorgada por el conocimiento de hacer la guerra (Wiengik, 2013).

En esa misma línea, un elemento relacionado con la atención que el Estado debe prestar a las zonas marginales en escenarios de postconflicto y que tiene repercusiones en la seguridad y la convivencia es la influencia del control de armas en la seguridad de los estados (Godnik, Muggah, Waszink, 2002). El trabajo realizado por Godnik, Muggah y Waszink (2012) llama la atención sobre el

impacto que tiene entre el uso y proliferación de armas en la sociedad con el aumento de los niveles de violencia. En otras palabras, es necesario que el Estado garantice el monopolio de las armas como mecanismo de prevención y garantía de seguridad y convivencia.

Por otra parte, es necesario pensar programas de desmovilización desarme y reinserción (DDR)⁶ que contemplen estrategias de formación profesional (William Zartman, 2010), superando de esta manera el clásico tratamiento que se da a la población desmovilizada con subsidios, especialmente si se tiene en cuenta que los mercados políticos criminales que surgen en las épocas de conflicto tienen influencia en el desarrollo del postconflicto y por consiguiente pueden determinar el éxito o el fracaso de las políticas de normalización de la violencia como lo señalan Archer y Gartner (1976), Newman y Kepler (2007), Hopmann y Zartman (2010) y Kaker (2013).

Retos de las políticas públicas de seguridad y convivencia en escenarios de postconflicto

Lakhdar Brahimi (2007) sostiene que la construcción de una paz duradera requiere del establecimiento de instituciones sostenibles, capaces de garantizar seguridad en el largo plazo. Los conflictos prolongados, como el Colombiano, pueden acarrear terribles pérdidas humanas y devastación física, y pueden llevar a la ruptura de los sistemas que permiten que una sociedad estable funcione (Brahimi, 2007). En su opinión, estos son precisamente los sistemas que deben ser resucitados (Ibid.). Junne y Verokren (2005) y en el mismo sentido que Brahimi, sostienen la hipótesis de que una manera adecuada en que las sociedades se recuperan de la guerra tiene que ver con la integración de la construcción de paz, la seguridad y los enfoques de desarrollo. En este sentido, la mayoría de los países en desarrollo enfrentan los legados de diferentes formas de conflicto, por lo cual formas regulares de desarrollo no son suficientes para solventar los retos que surgen en dichos contextos.

Dirk Salomons (2005), sostiene que la seguridad es un pre requisito absoluto, es el tema central para cualquier situación de postconflicto ya que afecta las posibilidades de la construcción de paz y de desarrollo sostenible. En este sentido la piedra angular tiene que ver con lograr resolver de manera efectiva y satisfactoria el proceso de DDR. Sin seguridad ningún proceso de paz es viable, ni sostenible. Este proceso que hace parte de la primera de las tres fases de la construcción de paz, implica el momento de la verdad para cualquier empresa de este tipo (Salomons, 2005). El autor encuentra que la persistencia de las economías de la guerra, es a través de los estudios de caso

⁶ Para una evaluación empírica de los Programas de DDR en el mundo ver Schulhofer-Wohl y Sambanis (2010).

comparados, la gran barrera para los procesos de DDR y del postconflicto como un todo. Si esto no se tiene en cuenta el proceso de DDR no podrá ser exitoso en un sentido genuino. La fórmula para Salomons es simple: donde convergen una voluntad política fuerte, una capacidad robusta por parte de las fuerzas armadas y de policía para hacer cumplir la ley, así como la presencia y disponibilidad de recursos económicos suficientes; el éxito de la transición de la economía de la guerra a una sociedad en paz se hace más probable.

Al parecer son tres los dilemas que asoman en procesos de postconflicto con las características del contexto colombiano: el dilema entre justicia y paz, el dilema de seguridad y paz, y el dilema entre paz y desarrollo. Como lo mencionan Cárdenas, Casas y Méndez (2013), la manera en que *el dilema de seguridad* se maneje resulta crucial para cualquier sociedad que aspire a un postconflicto exitoso. En este sentido, superar dicho dilema consiste en lograr estabilizar equilibrios que incentiven a los excombatientes a mantenerse en la vida civil y mantener proyectos de vida sostenibles por fuera de la guerra y la criminalidad a largo plazo.

Uno de los mayores retos en un eventual postconflicto es la incompreensión que tienen las instituciones estatales de la complejidad psicológica-cognitiva de las relaciones sociales (Cárdenas, Casas-Casas, Méndez, 2013), en esa misma línea de reconocer la limitación de los arreglos institucionales micro-sociales para la implementación de políticas públicas de DDR, en especial las limitaciones que los marcos cognitivos les imponen a los individuos para aceptar nuevas normas para la reinserción de excombatientes (Cárdenas, Casas-Casas, Méndez, 2014). Como lo muestran estos autores, factores afectivos, percepciones de discriminación o el nivel de aceptación social también resultan cruciales.

En este sentido, surge una discusión dentro de la literatura, ya que el supuesto de que la prosperidad era todo lo que se necesitaba, y hoy son más los autores que sostienen que por sí misma la prosperidad no logra asegurar la paz. Así, el desarrollo para países en postconflicto requiere de una combinación de iniciativas en sectores vitales como seguridad, justicia, política económica, educación, medios de comunicación, agricultura, salud, y medio ambiente (Junne y Verokren, 2005). Entre las medidas para reducir los factores de riesgo que las políticas públicas del postconflicto deben tener en cuenta, Collier y sus colegas (2006) recomiendan una combinación de medidas económicas centradas en los más vulnerables y en fortalecer las economías locales, así como en medidas de seguridad.

A partir de la revisión de literatura internacional, se pueden identificar dos líneas grandes en materia de políticas públicas; la primera tiene que ver con las *políticas de corte securitizante* que buscan controlar la violencia bajo un enfoque que se puede denominar como de mano dura o de control y fuerza, tal como se dio en los países centroamericanos después de los procesos de desmovilización de las guerrillas (Godnick, Muggah y Wasznik, 2002; Rodgers, 2009) y donde se reduce la naturaleza de los fenómenos de seguridad y convivencia a un asunto meramente criminal. Este tipo de políticas son consideradas como inefectivas, pues ignoraron la realidad social del actor violento, al marcarlo solo como criminal (Rodger, 2009) y dejan de lado otras dimensiones que propician el debilitamiento de la seguridad y la convivencia.

La segunda línea de políticas promueve una *reconstrucción social desde la comunidad*, para contribuir al mejoramiento de la seguridad y convivencia en escenarios de postconflicto, a partir de esquemas de construcción de Estado, que tomen como base la interacción de diferentes actores comunitarios, con el gobierno y entre sí, asegurando de esta manera un establecimiento sólido de paz, pues el cambio institucional estaría arraigado en las costumbres de la sociedad (Kyamusugulwa, Hilhoorst y Van der Haar, 2014). Este enfoque ha sido conocido como de reconstrucción desde la comunidad (*bottom-up*) y se ha desarrollado principalmente en países Africanos.

Además, es necesario destacar que en escenarios de postconflicto los autores internacionales recomiendan que *las políticas públicas deben superar las lógicas securitizantes y asistencialistas*, y por consiguiente es necesario diseñar políticas públicas que promuevan estrategias de formación profesional e involucren actores clave (Zartman, 2009; 2010; 2011) y que a diferencia de las visiones militaristas y asistencialistas busquen dar una solución integral que fomente el establecimiento de capacidades en los excombatientes.

De esta manera, autores como Branch (2013), Kaker (2014), Esser (2014), Ayuero, Burbano de Lara y Berti, (2014), Godfelow y Smith (2013) y McMichael (2014) señalan que *las políticas públicas no pueden quedarse solo en arreglos institucionales* que se satisfagan con mejoras en los indicadores, sino que la acción del gobierno debe estar dirigida a ofrecer cambios integrales para la sociedad (Godfelow y Smith, 2013).

Por último, las políticas públicas para la construcción de paz deben estar enfocadas en *el fortalecimiento del Estado* (Call y Cousens, 2008) y *contar con el acompañamiento de organismos multilaterales* que a partir de la comprensión de los contextos nacionales posibiliten alternativas viables de superación del conflicto y generen impactos positivos en la seguridad y convivencia, dado que, dentro del debate justicia transicional y construcción de paz, es necesario tener una mirada empírica y abierta que permita la comprensión e intervención de las dinámicas de la sociedad (Cárdenas, Casas y Méndez, 2014; Castel, 2009; Nussio, 2013; Escobar, 2013; Knight, 2008; Mamdani, 2009), en oposición a un marco jurídico que restituya la justicia como valor absoluto como se ve en el trabajo de Seils (2015), donde se dificulta el establecimiento de consensos que posibiliten la construcción de paz.

Ante un eventual escenario de postconflicto, la ciudad puede aprovechar las experiencias que existen a nivel internacional, evitando cometer errores sobre los cuales la literatura mundial ya ha establecido recomendaciones. Por esta razón, resulta útil tener en cuenta los aprendizajes en torno a los procesos de postconflicto a la hora de diseñar estrategias de intervención pública. De esta manera, los aprendizajes en torno al diseño de las políticas públicas en seguridad y convivencia en escenarios de postconflicto son principalmente cuatro.

El primero de ellos es la *ineficacia de las políticas de corte securitizante* debido a la reducción que hacen del problema de seguridad y convivencia al uso de la fuerza y mano dura que destacan autores como Godnick, Muggah y Wasznik (2002) y Rodger (2009) como se evidenció en el tratamiento del postconflicto en los países centroamericanos.

Un segundo aprendizaje como se ve en el trabajo realizado por Wiengik (2013) en su estudio sobre excombatientes en Mozambique, son las limitaciones que tienen los programas de corte asistencialista, basados sólo en el sostenimiento financiero para contener las acciones belicosas de los excombatientes, dado que, como lo señala el autor más que ayuda económica el deseo de los excombatientes es lograr el desarrollo de sus capacidades productivas, en la medida que “frecuentemente los excombatientes atribuyen su pobreza a la educación que ellos perdieron por causa de su participación en la guerra” (Wiengik, 2013, p. 15).

Un tercer aprendizaje, traído desde los países africanos y que señalan Kyamusugulwa, Hilhoorst y van der Haar (2014) y Thorsell (2013) es la necesidad de llevar a cabo procesos de diseño de política pública desde la comunidad (*bottom-up*) que permitan romper con las economías políticas

de la guerra y el legado que dejan para la reconstrucción de las relaciones sociales, como el camino de salida al conflicto como lo señalan Archer y Gartner (1976).

Finalmente, se debe tener en cuenta las lógicas en torno a los mercados criminales que se crean, trasladan o fortalecen en las zonas marginales en escenarios de postconflicto y por consiguiente trabajar por el mejoramiento de las condiciones sociales en estos territorios, dado que como lo señalan Archer y Gartner (1976), Newman y Kepler (2007), Hopmann y Zartman (2010) y Kaker (2013), los mercados políticos criminales que surgen en la época del conflicto influyen en el desarrollo del postconflicto y predeterminan el éxito de las políticas para la normalización de la violencia. Finalmente, Esser (2014) destaca la importancia que tiene la agenda mediática en la explicación que se da al problema de la violencia.

Es importante resaltar que aun cuando a nivel internacional existen experiencias que dan luces sobre cómo llevar a cabo procesos de postconflictos acertados, las particularidades locales plantean retos ante los cuales la literatura internacional parece quedarse corta y que por consiguiente representan un gran desafío como se verá a continuación.

El proceso de construcción de paz, luego de un escenario de conflicto tan prolongado como el colombiano, se enfrenta a una diversidad de retos que van desde el derecho a la justicia de las víctimas hasta la solución de las condiciones materiales que dieron origen al conflicto. De esta manera, uno de los mayores retos a los cuales se enfrenta una sociedad tras un acuerdo de paz es, como lo señalan Branch (2010), Castel (2009), Nussio (2013), Knigh (2008), Mandani (2009), el debate entre justicia transicional y construcción de paz, que demanda una mirada más empírica y acorde a la realidad social establecida, para facilitar la construcción de acuerdos o escenarios de reconciliación efectivos en la sociedad.

En esa misma línea, McMichael (2014) y Kaker (2014) señalan a partir del estudio de los estudios de caso de Juba y Karachi respectivamente, que los cambios en los arreglos institucionales que surgen de los procesos de paz, pueden generar incentivos que faciliten el recrudecimiento de la violencia por parte de los actores criminales que controlan las zonas de la periferia de la ciudad, razón por la cual, el tratamiento que se deba dar a estas zonas es un gran reto en materia de política pública para el gobierno.

Un tercer reto en el postconflicto, es el análisis de la estructura social de las poblaciones que se encuentran en procesos de estabilización democrática como lo señalan Fearon, Humphreys y

Weinstein (2009) y Habyariman, Humphreys, Posner, y Weinstein (2008) la clave para aplicar políticas que no dejen de lado las particularidades sociales y la coyuntura en la cual buscan incidir. Según Lederach (2007) para encontrar un camino medio entre lo ideal y lo posible que permita una estabilización democrática amarrada a una comprensión realista de la realidad es importante evitar un marco jurídico absoluto que dificulte la construcción de consensos para el establecimiento de la paz (Seils, 2015).

Finalmente, uno de los temas que más incide en el deterioro de la seguridad y la convivencia es la proliferación de armas (Godnik, Muggah y Waszink, 2002) que se encuentra relacionado con la existencia de economías criminales como lo señalan Archer y Gartner (1976), Newman y Kepler (2007), Hopmann y Zartman (2010) y Kaker (2013). Es así como otro de los retos del Estado en un eventual postconflicto es garantizar el monopolio de las armas y desarticular las economías criminales.

Como se observó, en la literatura internacional el tema fundamental para pensar la relación entre postconflicto, seguridad y convivencia tiene que ver con el problema fundamental de la construcción de estatalidad como mecanismo para producir, reproducir y sostener la provisión de seguridad como elemento esencial para la transición de la guerra a la paz. Así mismo, la resolución del dilema de seguridad es fundamental a través de procesos de DDR que combinen estrategias para desincentivar la reincidencia, favorecer la reintegración a través de proyectos de vida sostenibles e inclusivos, así como blindar a las poblaciones clave (víctimas y excombatientes) a las tentaciones de la reincidencia o la vinculación a actividades riesgosas dada la presencia de economías criminales. Por esta razón el segundo elemento clave además de la construcción efectiva de orden social, tiene que ver con la garantía del tránsito de los mercados de la guerra a formas de reproducción de la vida económica no perversas, razón por la cual el componente de inversión económica es fundamental para luchar contra los factores de retorno a la guerra o al menos a formas violentas de reproducción de la vida individual y colectiva.

Por otro lado, un tema que no es menor tiene que ver con el control de las armas disponibles y residuales, así como de buscar mecanismos de capacitación para afrontar los conflictos de manera pacífica. Este aunque parece un aspecto secundario, resulta clave pues introduce la necesidad de ofrecer una institucionalidad que resuelva las pequeñas disputas de la vida cotidiana y pueda canalizar las disputas institucionalizándolas hacia respuestas efectivas. Por esto, es importante tener en cuenta que las medidas meramente securitarias de mantenimiento de la paz presentan

limitaciones. Así, la combinación de enfoques para el diseño de intervenciones en el postconflicto, puede favorecer las sinergias de políticas poblacionales volcadas robustamente a impactar la inequidad, ofrecer una mejor infraestructura, y garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en los acuerdos.

El rol sobreestimado de los excombatientes⁷

Una inquietud que siempre surge en las discusiones sobre postconflicto y violencia se refiere a los excombatientes. Hay una convicción generalizada de que son ellos los principales perpetradores de violencia en el postconflicto. En realidad, esta convicción no tiene mucho sustento empírico, por tres razones. Primero, aunque son muchos los desmovilizados si se consideran cifras nacionales, su impacto es relativamente pequeño en los números de delitos ya que no son un grupo social suficientemente grande como para tener un impacto relevante. Por ejemplo en Villavicencio, una ciudad con un porcentaje considerable de excombatientes, no han contribuido más del 4% en ninguno de los delitos de alto impacto (Massé et al. 2011). Aunque los excombatientes tengan una más alta propensión a cometer un delito que los demás ciudadanos, de hecho más del 20% de los desmovilizados actuales en Colombia han cometido algún delito después de su desmovilización (FIP 2014; Kaplan y Nussio 2013), su contribución al delito en cuanto a cifras absolutas sigue siendo limitada.

Segundo, los excombatientes tienden a pertenecer a una cohorte de edad para la cual es cada vez menos interesante un estilo de vida violento, como lo habrá podido ser 5, 10 o 15 años atrás cuando se unieron al grupo armado. De hecho, tener una familia puede ser una prioridad más importante en sus vidas de desmovilizados y la familia es justamente un factor clave de anclaje (Kaplan y Nussio 2013; Nussio 2012). Es decir, como todos los humanos, los desmovilizados al envejecer tienden a perder su interés en actividades de alto riesgo y a privilegiar otras actividades, como por ejemplo tener una familia. Esto no significa que no haya casos de excombatientes que demuestran una atracción continua a un estilo de vida violento (Kaplan y Nussio 2013).

Tercero, todas las organizaciones, y más las criminales, sufren fluctuaciones en su personal. Si simplificando asumimos que las BACRIM son una continuación de las AUC, ya en 2009 solo un 12% de sus miembros eran miembros desmovilizados de las AUC (Semana 2009). Es decir, un 88% de los miembros de estas organizaciones ya eran gente nueva, probablemente perteneciente a una

⁷ Esta sub-sección se basa en los aportes preparados por Enzo Nussio para este estudio.

“nueva generación de violentos”. Y seguramente hoy en día, el porcentaje de excombatientes dentro de las BACRIM es aún menor debido a la renovación continua que padece cualquier organización. Sin embargo, la atención mediática se ha enfocado casi exclusivamente en los desmovilizados dejando de lado a la “nueva generación de violentos” que contribuye en mayor medida al funcionamiento de estas organizaciones criminales.

Pensando en el futuro, es probable que los desmovilizados de las FARC serán menos dados a delinquir por su mayor identificación con el grupo (a propósito, es importante aprovechar esta cohesión de grupo) y su generalmente menor nivel de codicia que el de los paramilitares (Gutiérrez Sanín 2008; Nussio y Ugarriza 2013) – recordemos que los combatientes de las FARC no reciben un salario, a diferencia de los paramilitares. Es decir, aunque existe una alta probabilidad de disidentes y reincidentes (McDermott 2013), el porcentaje será menor en el caso de la desmovilización de las FARC que en el caso pasado de los paramilitares.

A pesar de estos argumentos en contra de una sobreestimación del potencial violento de los excombatientes en general y los futuros excombatientes de las FARC, es evidentemente necesario que la política pública se dedique también a ellos, sobre todo a los que tienen un perfil de riesgo particularmente elevado y que tienen además una capacidad de daño más alta, como lo son los antiguos mandos medios de las organizaciones desmovilizadas. No faltan ejemplos de mandos medios y altos que han usado su capacidad de liderazgo y su *know how* criminal para formar nuevas organizaciones criminales, como por ejemplo alias Don Mario, alias Cuchillo, alias Mi Sangre, los hermanos Úsuga, alias Gavilán y otros. No se ha encontrado que los mandos medios sean más proclives a la reincidencia que los excombatientes rasos (FIP 2014), pero su mayor capacidad de daño merece atención especial.

Además, los excombatientes pueden frecuentemente ser involucrados en formas privadas de violencia, por ejemplo relacionadas con el espacio doméstico. Se ha visto en casos de desmovilización anteriores que los desmovilizados son inexpertos en el manejo de relaciones familiares y han recurrido repetidamente al uso de violencia para resolver problemas en su núcleo familiar (Barraza y Caicedo 2007; Caicedo 2005).

En suma, tanto por los argumentos introducidos anteriormente (los excombatientes no son suficientes y demasiado viejos para tener un impacto mayor en el paisaje de violencia, además de constituir una pequeña minoría en las BACRIM) y por la naturaleza de las FARC, los desmovilizados no serán el aspecto clave para los riesgos de seguridad que enfrenta Colombia en

una situación de postconflicto. Será más importante evitar la constitución de una “nueva generación de violentos”, que de hecho ya se está formando, y que se sustenta en una serie de factores sociales negativos como la desigualdad, la falta de oportunidades, una cultura de violencia, el machismo y la desconfianza generalizada.

Construcción de Paz y la Cuestión Urbana⁸

Buena parte de los retos de la construcción de paz en el ámbito urbano están relacionados con las dinámicas de transformación de la violencia y sus expresiones geográficas en los procesos de transición hacia la paz. Mientras las áreas rurales tienden a ser el escenario principal de la violencia política en el contexto de las guerras civiles, las externalidades que se derivan de la aglomeración urbana y la informalidad ofrecen mayores ventajas a los actores de la violencia societal. En consecuencia, la transición de la guerra a la paz puede conllevar un cambio en el centro de gravedad de la violencia hacia las áreas urbanas y en particular, hacia zonas de asentamientos ilegales o espacios y micro-espacios deprimidos de las ciudades que constituyen lo que se puede denominar – estirando un poco la categoría de Guillermo O’Donnell- *zonas marrones urbanas*.

Las situaciones de postconflicto altamente violento y las de alta violencia societal que corresponden al tipo de casos que se pueden caracterizar como casos de *paz violenta*, requieren un enfoque de seguridad ciudadana que vaya en sintonía con el giro local que se ha dado en las aproximaciones críticas de la construcción de paz (McGinty y Richmond, 2013). En otras palabras, la seguridad ciudadana como área clave de la construcción de paz en contextos de postconflicto con altos niveles de violencia societal, no puede reproducir los enfoques de arriba-hacia abajo que tantos problemas han traído a las operaciones y actividades de construcción de paz llevadas a cabo como intervenciones externas *sobre* las comunidades. Es importante reconocer los mecanismos locales de protección y abrir espacios a la deliberación entre fuerzas de policía y comunidades para desarrollar sistemas de seguridad *responsables*⁹ ante los ciudadanos (Hill, Temin y Pacholek, 2012).

Ciertamente, la provisión de seguridad como área clave de la construcción de paz en las *zonas marrones urbanas* no es independiente de la gestión y reducción de la segregación socioespacial que genera, no sólo desigualdades en la asignación misma de los recursos de seguridad, sino

⁸ Esta sección se basa en el documento preparado para este estudio por Mauricio Uribe López.

⁹ Responsables, tanto en el sentido de su capacidad de responder a las expectativas y demandas de seguridad de los ciudadanos (*responsiveness*), como en términos de la supervisión y control que los mismos ciudadanos pueden ejercer sobre tales sistemas (*accountability*).

también sentimientos de privación que fácilmente se traducen en rabia cuando los habitantes de aquellas zonas perciben las actuaciones del Estado como demasiado particularistas.

Las ciudades en el contexto de las guerras civiles

Las guerras civiles tienen por lo general un carácter predominantemente rural, con excepción de las revoluciones que desembocan en levantamientos populares urbanos incluso si éstos inician en el campo (Skocpol, 1979). De modo que las guerras civiles tienden a ser, en buena medida, fenómenos rurales. La dimensión rural de las guerras civiles es consistente con varios de sus mecanismos explicativos más recurrentes (Kalyvas, 2007, p. 423): la desigualdad en la distribución de la tierra, el empobrecimiento súbito de los habitantes del campo, las facilidades que tienen los competidores armados del Estado para esconderse y sorprender a las fuerzas gubernamentales, la dispersión de la población que dificulta la regulación estatal, etc.

Ese carácter rural de las guerras civiles es particularmente relevante en el caso de aquellas que son de larga duración. De hecho, uno de los tipos de guerras internas que más tienden a prolongarse en el tiempo son aquellas que James Fearon (2004) identifica como “rebeliones de los hijos del suelo” (*sons-of-the-soil rebellions*). Se trata de guerras en las que lo rural es tanto escenario de la disputa como recurso en disputa. En ellas, los grupos guerrilleros operan como “insurgencias periféricas”.

En los períodos posteriores a la firma de acuerdos de paz, lo rural no pierde relevancia. De hecho, se convierte también en escenario privilegiado de la construcción de paz. Esto es así en la medida en que la superación de aquellos factores que subyacen al origen de las guerras o a las condiciones que las prolongan en el tiempo, resulta crucial para evitar su reanudación. De nuevo, con frecuencia tales factores tienen un carácter rural. Además, la inevitable sinonimia entre construcción de paz y construcción de Estado obliga a los actores involucrados en la implementación de los acuerdos a diseñar y poner en marcha estrategias orientadas a extender la capacidad regulatoria del Estado en aquellas zonas de baja densidad poblacional y alta incidencia de la pobreza, características típicamente rurales.

Durante las guerras civiles, las ciudades suelen atraer a la población atrapada en medio del despliegue -en las áreas rurales- de las estrategias de terror aplicadas por los actores armados y orientadas racionalmente hacia la minimización de costos militares y la maximización de ganancias territoriales. El control territorial se logra a través del control de la población amedrentada que permanece en el territorio o mediante su desplazamiento hacia otras áreas. Por supuesto hay algunas

excepciones, especialmente cuando la intensidad de la guerra civil es tal que las ciudades se convierten en escenarios principales de la confrontación.

Es lo que ocurre en la actualidad en la ciudad de Aleppo. Allí –como en otras ciudades sirias- la población está en medio del fuego cruzado entre facciones de la coalición insurgente y fuerzas del gobierno de Bashar al Assad.¹⁰ En 1989, San Salvador se convirtió en un campo de batalla cuando el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN desató una dura ofensiva luego de que miembros de las Fuerzas Armadas asesinaran al Rector de la Universidad Centroamericana y otro grupo de jesuitas (Arnson, 1999, p. 15). Kigali se convirtió entre abril y junio de 1994 -luego del fracaso del acuerdo de paz de Arusha (Tanzania) en 1993- en el epicentro del genocidio ruandés que costó la vida a más de ochocientos mil personas en un país de once millones de habitantes (Uribe- López, 2014). Algo similar aplica a los casos de Monrovia, Freetown, Mogadiscio y otras.

No obstante esas excepciones, las ciudades tienden durante las guerras civiles a convertirse en áreas de refugio. La aglomeración genera, entre otras múltiples externalidades positivas, ventajas para la provisión de la seguridad. Incluso si los indicadores y las percepciones de seguridad en las ciudades llegan a ser disuasivos, la anonimidad propia de los ambientes urbanos y el carácter disperso de las diversas manifestaciones de violencia social producen cierta aleatoriedad que arropa mejor que la visibilidad que hace, a quienes habitan áreas de baja densidad poblacional, más vulnerables. Lo anterior es válido incluso para ambientes urbanos tenues como en el caso de Gulu, capital del distrito del mismo nombre en el norte de Uganda, región duramente afectada por la guerra entre el gobierno de Yoweri Museveni y el Ejército de Resistencia del Señor.

Zonas marrones urbanas

La experiencia muestra que tras la firma de acuerdos de paz no sólo hay un riesgo significativo de reanudación de las guerras sino también de continuidad o intensificación de la violencia societal que transcurre simultáneamente con éstas (en unos casos con mayores articulaciones entre violencia política y violencia societal que en otros). La violencia societal puede ser definida como el conjunto de manifestaciones de violencia personal y directa¹¹ diferente de la violencia política, que sin

¹⁰ “Aleppo Fighting Flares as Syrian Insurgents Attack”, *The New York Times*, 6 de julio de 2015.

http://www.nytimes.com/2015/07/04/world/middleeast/aleppo-fighting-flares-up-as-syria-rebels-renew-attacks.html?_r=0

¹¹ Según Galtung (1969) hay violencia personal cuando un actor causa un daño directo a una víctima. Es estructural cuando no hay un actor particular que causa un daño directo. La violencia estructural es indirecta de modo que, “cuando un marido golpea a su esposa hay un claro caso de violencia personal, pero cuando un millón de esposos mantienen un millón de esposas en la ignorancia, hay violencia estructural (Galtung, 1969, p. 171).

embargo refleja fracturas profundas en la sociedad. Esas fracturas están relacionadas con la violencia estructural.

Aunque la violencia estructural puede ser legítimamente criticada como un estiramiento conceptual que hace borrosa y ambigua la idea misma de violencia, fundiendo y confundiendo los conceptos de injusticia social y de violencia, tiene al menos dos ventajas. Primero, llama la atención sobre el hecho de que los actores en un conflicto concreto están inmersos en ciertas estructuras sociales. En consecuencia, la transformación de dicho conflicto implica lidiar, al menos, con los factores de riesgo de violencia personal más apremiantes que se derivan de dichas estructuras. Segundo, permite relacionar tales factores de riesgo no sólo con las expresiones políticas de la violencia directa (que tras la firma de un acuerdo de paz se traducirían en mayores probabilidades de reanudación de la guerra civil) sino también con las perspectivas de continuidad o exacerbación de la violencia societal.

Así como la expectativa de vida resume bastante bien las condiciones generales de salud de una población, así mismo la tasa de homicidios brinda una aproximación general al grado de violencia societal. Por supuesto, es recomendable contar con índices compuestos que incluyan diversas dimensiones de victimización. De todos modos, algunos expertos toman como referencia un umbral que corresponde a ocho homicidios por cada cien mil habitantes para definir lo siguiente: cifras iguales o superiores a dicho umbral representan un nivel epidemiológico. Es decir, un nivel que refleja fallas severas en términos de cohesión social (Kliksberg, 2008).

En Uribe-López (2013) se usa dicho umbral para identificar cuatro tipos de casos de *paz violenta*: 1) **violencia societal** (casos en los que no hay antecedente reciente¹² de guerra civil y sin embargo la tasa de homicidios es epidemiológica pero inferior a 16 homicidios por cada cien mil habitantes – menos del doble del umbral-); 2) **alta violencia societal** (casos en los que no hay antecedente reciente de guerra civil y sin embargo la tasa de homicidios es igual o superior al doble del umbral); 3) **postconflicto violento** (casos en los que sí hay antecedente reciente de guerra civil y la tasa de homicidios es epidemiológica pero inferior al doble del umbral) y 4) **postconflicto altamente violento** (casos en los que sí hay antecedente reciente de guerra civil y la tasa de homicidios es igual o superior al doble del umbral). La violencia societal es común a los cuatro casos, sólo que en

¹² Se consideran aquí guerras “recientes” aquellos conflictos armados que estaban activos al término de la Guerra Fría en 1989.

los dos primeros no hay transición porque no hay conflicto armado previo y los dos últimos si corresponden a situaciones de “postconflicto”¹³.

La observación de casos permite identificar tres tipos de paz violenta: alta violencia societal (Venezuela y Honduras)¹⁴, postconflicto violento (Nicaragua) y postconflicto altamente violento (Guatemala y El Salvador). De acuerdo con los criterios señalados, el caso peruano también correspondería en general al postconflicto violento (la mediana de la tasa de homicidios en Perú entre 2000 y 2013 es 9,4), pero de todas maneras es muy cercano a lo que sería un postconflicto pacífico (la tasa de homicidios de 2013 es inferior al umbral).¹⁵ Colombia corresponde a un caso de guerra con alta violencia societal. El Salvador y Guatemala representan bastante bien situaciones en las que de las estructuras sociales ya no se derivan riesgos de reanudación de la guerra (al menos no de la misma guerra) pero si de continuidad o intensificación de la violencia societal, con lo cual, la transición que tiene lugar no va de la guerra hacia la paz sino de la guerra hacia la paz violenta. No obstante, los promedios nacionales resultan engañosos en la medida en que al interior de cada país la geografía de la violencia se distribuye de manera muy heterogénea.

Los casos de alta violencia societal en medio de una guerra civil dan lugar a una gran diversidad de situaciones dependiendo de las coincidencias, articulaciones o divergencias en la distribución geográfica de la violencia societal y de la violencia política. Las transiciones de la guerra a la paz pueden afectar de manera diferenciada a las ciudades y a las zonas rurales. En todos los casos de postconflicto altamente violento en América Latina la tasa de homicidios en la respectiva ciudad capital es mayor que en el resto del país: Nicaragua: 11,3 (2012), Managua 18,3 (2006); Guatemala: 34,6 (2012), Ciudad de Guatemala: 116,6 (2010); El Salvador: 39,8 (2013), San Salvador: 52,5 (2012).¹⁶

Mientras los actores armados en tanto competidores armados del Estado en el contexto de guerra civil encontrarían en las áreas de baja densidad poblacional y en la geografía rural, las ventajas

¹³ El término postconflicto es problemático porque las etapas posteriores al fin de una guerra civil suelen ser muy conflictivas. Sería más preciso el término post-acuerdo pero éste dejaría por fuera aquellos casos en los que hay una victoria estratégica sin acuerdo de paz (por ejemplo Perú).

¹⁴ Tanto en Venezuela como en Honduras la violencia societal se concentra dramáticamente en las ciudades. Mientras la tasa nacional de homicidios en Honduras es de 84,3 (2013) en Tegucigalpa es de 102,2 (2011). En Venezuela la tasa nacional es de 53,6 (2012) mientras que en Caracas es de 122 (2009). Datos tomados de UNODC *Crime and Criminal Justice Statistics*

<https://data.unodc.org/#state:2>. Consultado el 10 de agosto de 2015.

¹⁵ El caso peruano, un postconflicto cercano a la categoría postconflicto pacífico y sin acuerdo de paz merece una reflexión aparte que desborda los límites de las consideraciones que aquí se presentan.

¹⁶ UNODC *Crime and Criminal Justice Statistics*

<https://data.unodc.org/#state:2>. Consultado el 10 de agosto de 2015.

arriba señaladas, los grupos ilegales que operan en escenarios de postconflicto hallarían en las ciudades dos tipos de oportunidades para la venta lucrativa de servicios de protección: i) tamaños de mercado superiores a los rurales con alta incidencia de la pobreza y baja densidad poblacional (lo que excluye a las zonas rurales con economías de enclave en torno a bonanzas legales e ilegales) y ii) la elevada incidencia de la economía informal.

La informalidad amplía *ceteris paribus* las opciones para la venta ilegal de servicios de protección. Esto ocurre en la medida en que los derechos de propiedad son difusos y las garantías para el cumplimiento de los contratos son más inciertas que en los mercados formales: “En cada transacción en la que al menos una parte no confía en que la otra cumpla con las reglas, la protección se vuelve deseable, aun cuando sea un sustituto pobre y costoso de la confianza” (Gambetta, 2007, p. 27). En esas circunstancias y en un contexto de “postconflicto”, los remanentes de los competidores armados del Estado o nuevos tipos de agrupaciones¹⁷ moldearían el tránsito hacia una situación de paz violenta en la que el centro de gravedad de la violencia directa estaría en la ciudad más que en el campo.

Es necesario tener en cuenta que las ciudades –incluso las pequeñas- son espacios geográficos complejos en sí mismos. Al interior de las ciudades también hay “zonas marrones”¹⁸ y el Estado no es el único en condiciones de sacar partido de las ventajas de la aglomeración debido a la segregación socio-espacial. Zonas periurbanas o céntricas deprimidas¹⁹ con alta densidad de población y elevada incidencia de la pobreza así como las áreas de asentamientos ilegales, se convierten en *zonas marrones urbanas* en las que tienden a concentrarse las manifestaciones directas de la violencia societal.

La segregación socioespacial urbana intensifica la desigual distribución de los servicios estatales de protección. Los vecindarios de mayores ingresos y los distritos de negocios no sólo disponen de los medios para financiar su propia seguridad sino que también tienen una mayor capacidad para incidir sobre la asignación específica de los recursos públicos destinados al sector (Bourguignon, 1999).

¹⁷ Tales agrupaciones estarían motivadas por el persistente bajo costo de oportunidad y el bajo riesgo de castigo por llevar a cabo actividades económicas ilegales (Becker, 1968). Esos factores son acentuados por la guerra misma y forman parte de su legado.

¹⁸ Zonas en las que la legalidad es menos efectiva y los gobiernos locales están fundamentados sobre bases fuertemente personalistas y clientelistas, en un ambiente regido por reglas no escritas pero minuciosas (O'Donnell, 1993).

¹⁹ Las cuales constituyen los espacios en los que tienen lugar procesos de “gentrificación”.

Mano dura y postconflicto: Receta para el desastre

El propio Estado puede convertirse en una fuente adicional de inseguridad para los habitantes de las *zonas marrones urbanas* cuando, con el incentivo de traducir las políticas de seguridad en réditos electorales en el corto plazo, son puestas en marcha políticas de mano dura que conducen a la criminalización de los habitantes de dichas zonas. Un ejemplo elocuente es el plan *Libertad Azul* llevado a cabo por el gobierno de Alonso Portillo (2000-2004) en Guatemala. Esas operaciones de mano dura –aplicadas también en Honduras y en El Salvador– consistían en redadas masivas y detenciones arbitrarias llevadas a cabo conjuntamente por la policía y el ejército. Esto, no sólo iría en contravía del fortalecimiento de la legitimidad de la fuerza pública en aquellos vecindarios sino que además, incentivaría la reorganización de las pandillas (*maras*) como estructuras más verticales y con mayores lazos formales con el crimen organizado (Cruz, Fernández de Castro & Santamaría, 2012).

En Guatemala el plan fracasó. Al inicio del gobierno de Portillo la tasa de homicidios en el país era de 25,8 homicidios por cada cien mil habitantes. Al final del mismo ésta había llegado a 36,3. En 2005 en la Ciudad de Guatemala la tasa era de 111,4 y continuaría subiendo.²⁰ Las fallas en el control estatal sobre las instituciones de seguridad pública incrementaron los efectos indeseados de las políticas de tolerancia cero. Las políticas de tolerancia cero están inspiradas en la teoría de la ventana rota (*broken window theory*) según la cual, independientemente de cuán pequeño sea un delito, éste debe ser castigado severamente con el fin de desincentivar la comisión de crímenes más graves. Esta perspectiva alcanzó reconocimiento por la reducción de la criminalidad en Nueva York cuando la administración del alcalde Rudolph Giuliani y su comisionado de policía William Bratton pusieron en marcha en 1993 “*the quality-of-life initiative*” más conocida como el Plan de Tolerancia Cero.

No obstante, no es claro que la reducción de la criminalidad en esa ciudad haya sido el resultado directo de la iniciativa de Giuliani y Bratton. De hecho, como señalaba Bernard Harcourt a fines de los noventa, “hay un sinnúmero de factores significativos en la reducción de la criminalidad en la

²⁰ UNODC Crime and Criminal Justice Statistics
<https://data.unodc.org/#state:2>. Consultado el 10 de agosto de 2015.

ciudad de Nueva York. Criminalistas, diseñadores de políticas y juristas están envueltos en un candente debate acerca de las causas de dicho declive (Harcourt, 1998, p. 332).²¹

En los casos de postconflicto altamente violento de América Central (Guatemala y El Salvador) y de alta violencia societal (Honduras) se pusieron en marcha políticas de tolerancia cero en un ambiente de debilidad institucional y un estilo contrainsurgente de las fuerzas estatales de seguridad moldeado durante las guerras civiles. Esto aplica incluso en el caso de Honduras, país que a pesar de no haber experimentado una guerra civil fue usado durante la Guerra Fría como punta de lanza de operaciones contrainsurgentes contra el FMLN en El Salvador.²²

A pesar de que la transición de la guerra a la paz en el caso de Nicaragua condujo a una suerte de paz represiva, es decir a un escenario de postconflicto autoritario (McConnell, 2012), el nivel de violencia societal posterior a la guerra civil ha sido significativamente menor que en otros casos centroamericanos. Esto tendría que ver –entre otros factores- con la adopción de un modelo de seguridad basado en la cooperación entre policía y comunidades, hasta cierto punto similar al que había sido adoptado por las autoridades de Boston y San Diego, ciudad que sin políticas de tolerancia cero redujo la tasa de homicidios en 62% entre 1993 y 2001 (Kliksberg, 2008, p. 14).

De la misma forma en la que en el debate sobre construcción de paz ha tenido lugar un giro hacia lo local que considera que las intervenciones externas sobre las comunidades suelen generar una plétora de efectos perversos, así mismo en el debate sobre seguridad ciudadana (la contracara de la violencia societal que tiende a persistir o exacerbarse en situaciones de postconflicto) hay también cierto reconocimiento de la importancia que tiene el involucramiento de las comunidades en la implementación de las estrategias de seguridad.

A las *zonas marrones urbanas* los organismos de seguridad del Estado no pueden llegar como fuerzas de ocupación. En medio de la ineffectividad, la ausencia o la arbitrariedad de las fuerzas estatales en cuanto a la provisión de seguridad, los grupos ilegales buscan consolidarse como sustitutos capaces de dar algunas respuestas oportunas a varios de los requerimientos más apremiantes de las comunidades, buscando así capitalizar a su favor la legitimidad que cede el Estado en esos espacios.

²¹ Cambios demográficos, nuevos patrones de consumo de drogas ilegales (del *crack* a la heroína), el auge económico de la segunda mitad de los noventa, mayor pie de fuerza y sistemas computarizados de vigilancia, entre otros factores mencionados por Harcourt pudieron haber sido ingredientes de la “causación química” que condujo a la disminución de la criminalidad.

²² El ejército hondureño llegó a participar, en mayo de 1980, en una de las masacres de la guerra salvadoreña: la masacre del Río Sumpul (Sosa, 2013, p. 93).

Pero esa “oferta” de seguridad es parcializada, impermeable a los ejercicios de rendición de cuentas, y funcional a los intereses económicos ilegales de tales grupos. Es en ese contexto que las comunidades desarrollan algunos mecanismos informales de protección y arbitraje de disputas que son sin embargo vulnerables y no logran niveles de protección adecuados (Hill, Temin & Pacholek, 2012, p. 40). Por esa razón, las fuerzas estatales de seguridad pueden apoyar -y a su vez apoyarse en- esos mecanismos²³ para ingresar gradualmente a las comunidades y ser reconocidas por ellas. “Comportamientos menos abusivos de la policía se atribuyen a veces en algunas comunidades a las relaciones de trabajo que la misma policía construye con esos equipos comunitarios” (Ibidem, p. 42). Aunque hay riesgos, los modelos de cooperación entre policía y comunidades parecen tener más ventajas para la construcción de paz que los enfoques de mano dura y tolerancia cero relacionados con una estrategia más centralizada y vertical de promoción de la seguridad.

En todo caso, y sin perder de vista lo inadecuado que resulta el enfoque prescriptivo de construcción de paz, es decir de arriba hacia abajo con intervenciones externas sobre las comunidades no sólo en el área de seguridad sino también en las otras áreas de construcción de paz relacionadas con el desarrollo, es necesario tomar en cuenta que la segregación socioespacial es en sí un factor de riesgo de inseguridad. Aunque es cierto que sin una mínima provisión de seguridad personal cualquier iniciativa de promoción de los modos y medios de vida de las comunidades resulta demasiado incierta, no lo es menos que sin la promoción de los medios de vida de las comunidades de las *zonas marrones urbanas* y la reducción de la segregación socioespacial, cualquier iniciativa de seguridad también es incierta. En efecto, los sentimientos de *privación relativa* (Gurr, 1970) pueden moldear actitudes favorables a la violencia personal y directa y la segregación socioespacial puede generar incentivos para la actuación parcializada del Estado en la provisión de bienes públicos y meritorios –incluyendo la propia seguridad- en contra de quienes ya están en desventaja.

Postconflicto, seguridad y convivencia: una mirada subregional

Según datos del SISC de la Gobernación de Antioquia (2015), en el departamento la presencia de las FARC se expresa en 8 frentes, con aproximadamente 1000 hombres con armas, distribuidos de la siguiente forma: Urabá: frentes 5, 34, 57 y 58; Norte: frentes 18 y 36; Magdalena Medio: frente

²³ Algunos de esos mecanismos consisten en comités de seguridad locales que llevan a cabo tareas diversas como reciclaje, mantenimiento de parques y otros espacios públicos, a la vez que brindan limitados servicios de vigilancia. Hill, Temin & Pacholek (2012) citan algunos ejemplos en Colombia (Cali, Cartagena) y en el condado de Lofa en Liberia.

Raúl Eduardo Mahecha; Nordeste: frentes 36, 4 y Mario Vélez; Bajo Cauca: frentes 18 y 36; Occidente: 5, 18 y 34; Suroeste (frontera con Chocó): frente 34.

La implementación de los acuerdos de paz en Antioquia tendrá que caracterizarse por la identificación de las potencialidades de cada subregión en términos de oportunidades para la población desmovilizada y las víctimas: educación, vinculación al mundo laboral y proyectos productivos. Si bien se proyecta la disminución²⁴ de acciones subversivas y terroristas (quema de buses, hostigamientos, explosión de artefactos explosivos improvisados, ataques contra infraestructura eléctrica y vial, confrontaciones con las fuerzas armadas), en términos de riesgos asociados al conflicto armado, se mantendrá la necesidad urgente de desminar territorios en donde históricamente hicieron presencia las FARC.

A su vez, el postconflicto se desarrollará en un contexto de seguridad en el que el Estado colombiano enfrenta cada vez con mayor contundencia las actividades de las bandas criminales (en Antioquia, el Clan Úsuga) y otras estructuras delincuenciales, dedicadas a la captación de rentas ilegales como narcotráfico, microtráfico, minería criminal, extorsión y tráfico ilegal de migrantes, entre otras. Uno de los retos que tiene el Estado en esta realidad, es ser altamente efectivo en contener el paso de hombres desmovilizados a estas estructuras criminales.

Más que certezas sobre los efectos que puede tener el postconflicto en la seguridad y convivencia luego del proceso de paz con las FARC, lo que realmente existen son aproximaciones a partir de la experiencia de otros procesos de desmovilización que se han dado en el país, principalmente el de las AUC, no obstante, “la transición de la guerra a la paz puede conllevar un cambio en el centro de gravedad de la violencia hacia las áreas urbanas y en particular, hacia zonas de asentamientos ilegales o espacios y micro-espacios deprimidos” (Uribe, 2015, p.1) que representen un desafío para la seguridad y convivencia.

Como lo señalan Beltrán y Garzón (2014), vale la pena destacar la adaptabilidad del actor ilegal para responder y acomodar el funcionamiento de su negocio ante los esfuerzos del Estado por acabar con las rentas criminales, de ahí que se considere que el postconflicto traerá unas repercusiones en la seguridad y convivencia tanto en el país como en las ciudades, “los principales riesgos en materia de seguridad que se derivan de una desmovilización de las FARC tienen que ver con la forma en que nuevas organizaciones criminales copen los antiguos espacios de control de la

²⁴ Casi desaparición como se constata con el seguimiento a los periodos de tregua unilateral desarrollados por las FARC.

guerrilla. En particular en aquellas zonas rurales, alejadas de los centros urbanos, en que las economías criminales son una actividad importante en el orden social” (Duncan, 2015, p. 2). En este sentido y como lo sugiere Giraldo (2015) en su informe para la *Comisión histórica del conflicto y sus víctimas* (CHCV) la causa principal de los conflictos es el grado de desatención del Estado a las necesidades de la ciudadanía, lo cual genera intereses e incentivos en los diferentes actores grupales o individuales para emprender el curso de las acciones criminales (Giraldo, 2015) que como es de esperarse afectan la seguridad y la convivencia.

Así mismo, vale la pena considerar que las condiciones de desatención del Estado se convierten en incentivos para que las comunidades marginales participen en los mercados políticos criminales y/o económicos locales (Duncan, 2015b) como se vio durante la época del cartel de Medellín, donde dicha organización capitalizó las necesidades de la población en las zonas marginales mediante y por la defensa del superávit monetario generado por el tráfico de cocaína. Este proceso, debe ser entendido como los cambios de los incentivos en el orden social, allí es necesario entender como la aparición de un nuevo mercado: el de las drogas, produce nuevas interacciones entre los diferentes actores son fin a controlarlo (Duncan, 2005).

Finalmente, de acuerdo a los académicos locales, la relación postconflicto, seguridad y convivencia se establece mediante el proceso de ingreso e integración de actores ilegales armados de carácter primeramente rural a las zonas urbanas. Transcurso en el cual se muestra, desde la consolidación de poderes alternos al legalmente constituido en las periferias del Estado, los vínculos que desde allí, estos poderes construyeron con las zonas urbanas donde yace el corazón del gobierno (Duncan, 2005).

Existe un consenso entre los académicos del país sobre el papel que desempeñan las FARC en las zonas rurales y su vinculación al negocio del narcotráfico que las han llevado incluso a realizar alianzas con otros actores criminales como las BACRIM, como lo señala McDermott (2015), “los principales riesgos en materia de seguridad que se derivan de una desmovilización de las FARC tienen que ver con la forma en que nuevas organizaciones criminales copen los antiguos espacios de control de la guerrilla. En particular en aquellas zonas rurales, alejadas de los centros urbanos, en que las economías criminales son una actividad importante en el orden social” (Duncan, 2015, p. 2).

Es esa misma línea, la Fundación Ideas para la Paz ha analizado la forma como se dan las alianzas entre las FARC y las BACRIM “los acuerdos entre grupos comprender diferentes características que hacen difícil su análisis bajo un solo lente: son inestables, usualmente coyunturales, dependen de personas específicas y no de unidades armadas, varían de región en región y se establecen con base en distintos tipos de intereses que oscilan desde la cohabitación pacífica, la división territorial o de tareas frente a economías ilegales como el narcotráfico o la minería ilegal” (FIP, 2015, p. 2), características que representan un reto para la seguridad nacional en el postconflicto, pero que también son un desafío para las FARC si su aspiración es transformarse en movimiento político y ganar legitimidad y reconocimiento social.

Como se vio en el caso de la desmovilización de las AUC “las deficiencias del proceso de desmovilización paramilitar, que inicialmente llevó a una disminución de la violencia. Sin embargo, la desmovilización solo fue parcial, ya que algunos paramilitares quedaron fuera del proceso o se rearmaron, contribuyendo en gran medida al surgimiento de grupos sucesores conocidos como Nuevos Grupos Armados Ilegales” (International Crisis Group, 2014, p. 13), mucho más si se tiene en cuenta que para las FARC aún está latente el escenario de violencia política del cual fue víctima la Unión Patriótica como lo expone USAID, “Las guerrillas todavía están marcadas por lo que sucedió con la Unión Patriótica (UP), un partido político creado por las FARC en el marco de las negociaciones de paz con el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986)” (2014, p. 14).

En esta misma línea McDermott (2015) agrega que aparte del riesgo de las Farccrim también existen otros riesgos como: i) que algunos elementos de las FARC permanezcan en el campo, dado que “Un estudio de 2013 realizado por Insight Crime, “FARC, peace and Potential Criminalization”, concluyo que un porcentaje de integrantes de las FARC se negará a rendirse” (McDermott, 2015, p.5); ii) la incorporación de grupos de desmovilizados al ELN, dando lugar a lo que él denomina un ELN recargado (McDermott, 2015, p.12); y iii) los carteles extranjeros financien elementos rebeldes por su amplio conocimiento del negocio del narcotráfico y su dependencia de los cultivos de coca (McDermott, 2015, p.14).

Sin embargo, como ya se ha mencionado, para algunos autores locales los desmovilizados urbanos no serán el aspecto clave para los riesgos de seguridad que enfrenta Medellín en una situación de postconflicto. Será más importante evitar la constitución de una “nueva generación de violentos” (Nussio, 2015, p. 5). Al respecto algunos autores como Duncan (2015) y McDermott (2015) hablan sobre el posible riesgo que existe de la creación de las Farccrim, haciendo alusión al proceso que ya

conoce el país con el proceso de desmovilización de las AUC y la posterior creación de las llamadas bandas criminales (Bacrim).

De esta manera, de la capacidad de la dirigencia del grupo guerrillero y sus comandantes para convencer a sus mandos medios y combatientes para que sean parte de un movimiento político depende en buena parte el éxito del proceso, razón por la cual, el Estado colombiano debe garantizar las reformas necesarias para promover la inclusión de los guerrilleros a los espacios de participación para “contener, durante los primeros doce meses después de firmado el acuerdo, las economías criminales” (Mcdermott 2015, p.1).

Esta última característica es fundamental si se tiene en cuenta que “los grupos ilegales que operan en escenarios de postconflicto hallarían en las ciudades dos tipos de oportunidades para la venta lucrativa de servicios de protección: i) tamaños de mercado superiores a los rurales con alta incidencia de la pobreza y baja densidad poblacional (lo que excluye a las zonas rurales con economías de enclave en torno a bonanzas legales e ilegales) y ii) la elevada incidencia de la economía informal” (Uribe, 2015, p. 5). Es decir, como se ha mencionado frecuentemente que las condiciones de abandono por parte del Estado que se dan en las zonas marginales son oportunidades que tienen las organizaciones criminales para operar en dichos territorios.

Finalmente, vale la pena resaltar que “la fuerza más capaz de vigilar a las FARC y sus diferentes elementos en cualquier escenario postconflicto son ellas mismas. Se debe ayudar a los rebeldes en su transición de un ejército guerrillero a una fuerza política y se debe hallar empleo pleno para sus miembros, para evitar que vuelvan a las actividades criminales que tan bien conocen” (Mcdermott 2015, p.15); y por consiguiente, el reto más grande para esta organización será controlar a sus subalternos y demostrar a la sociedad su interés de reincorporarse a la vida social.

En ese sentido, las FARC tendrán que desmovilizarse y rechazar la violencia como mecanismo para promover sus intereses políticos y para ello es necesario como lo expone USAID (2014) promover el fortalecimiento institucional, estrategias de reconciliación nacional, programas de desarrollo económico e iniciativas de resiliencia ambiental que permitan alcanzar una paz inclusiva y duradera. De esta manera queda claro, la necesidad de desplegar políticas de corte integral que aborden las diferentes problemáticas sociales que han propiciado o propician el conflicto.

Medellín ante un eventual postconflicto y desmovilización de las FARC²⁵

Los recientes avances en el proceso de paz con las FARC advierten que la probabilidad de una situación de postconflicto y de desmovilización masiva de guerrilleros es bastante alta. Lo que plantea nuevos desafíos de política pública de carácter nacional y local para, por un lado, evitar que el postconflicto conduzca a nuevas explosiones de violencia y criminalidad como ha sucedido en Centroamérica y, por el otro lado, atender a los antiguos combatientes de modo que no reincidan y se reintegren a la sociedad.

La paz con las FARC y los riesgos en seguridad del postconflicto

La paz con las FARC es en esencia el final de una organización armada irregular que tiene el propósito de tomarse el estado central y transformar la sociedad en su conjunto. Las FARC es también la guerrilla que de lejos significa una mayor amenaza para la seguridad en el país. Y a diferencia de los antiguos grupos paramilitares la acumulación de recursos desde la criminalidad está subordinada a unos intereses políticos y a la disciplina y a la centralización de las decisiones de la jefatura de la organización. No es de esperar que ocurran vendettas entre sus líderes como ocurrió con las AUC en pleno proceso de Ralito.

Su eventual salida del conflicto significa entonces el fin del gran proyecto insurgente en Colombia. En adelante quedarán otra serie de grupos que ejercerán control sobre la población y sobre ciertos territorios, sobre todo en áreas periféricas y marginales, pero que no tendrán como aspiración acumular recursos desde ese control para desafiar al estado central. Aun así, estos grupos encarnan una fuerte amenaza a la seguridad toda vez que el grado de control territorial que ejercen abarca cuantiosos espacios geográficos y comunidades en el país. Eso sin mencionar toda la infraestructura de protección que ofrecen a economías criminales como el narcotráfico, la corrupción con los recursos del estado y la minería ilegal, entre otros.

De hecho, los principales riesgos en materia de seguridad que se derivan de una desmovilización de las FARC tienen que ver con la forma en que nuevas organizaciones criminales copen los antiguos espacios de control de la guerrilla. En particular en aquellas zonas rurales, alejadas de los centros urbanos, en que las economías criminales son una actividad importante en el orden social. Por un lado, está el riesgo de aquellas Bacrines que buscarán aprovechar la salida de un formidable competidor armado como las FARC para imponerse como nueva forma hegemónica. Las razones

²⁵ Esta sección reproduce el documento preparado para este estudio por Gustavo Duncan.

para incursionar en los antiguos territorios de las Farc no solo serán producto de la oportunidad que se presenta sino también de la necesidad estratégica de controlar los enclaves de cultivos de coca que abastecen a las Bacrines.

Por otro lado, está el riesgo de las 'Farcines' que se deriven de mandos medios y guerrilleros rasos que sean reacios a desmovilizarse cuando la jefatura no disponga de una organización con los medios represivos para disciplinarlos. La mayoría de los mandos medios y de la tropa raso provienen de comunidades campesinas y colonas que poca formación y predisponibilidad para adoptar las habilidades discursivas y políticas suficientes para ocupar posiciones importantes en caso que la guerrilla se transforme en un partido o movimiento civil. Al mismo tiempo, disponen de todas las habilidades y conocimientos para hacer la guerra y explotar economías criminales. El desarme de los jefes de la guerrilla será la oportunidad de pasar a controlar directamente ellos el negocio y el poder local.

Por algo, la experiencia de Centroamérica muestra que después de firmada la paz el riesgo de erupciones de la violencia y criminalidad es demasiado alto por la disponibilidad de armas, destrucción de lazos sociales, experiencia en organizaciones criminales, el legado de corrupción, etc. Desde entonces las tasas de homicidios han subido a niveles superiores a los de los tiempos del conflicto. Los Maras se han convertido en una amenaza a la seguridad de tales proporciones que obliga a los estados a realizar treguas para reducir la violencia. Sin duda la salida de las FARC dejará en muchas zonas rurales del país una masa de jóvenes campesinos y colonos sin mayores expectativas de trabajo y de realización personal. Si en su momento la insurgencia era una opción, allí hacían parte de un colectivo poderoso que proyectaba su estatus en las comunidades, en las nuevas circunstancias la criminalidad puede suplir esa oferta. La ventaja de la criminalidad es que no solo resuelve el problema del logro de un estatus y de un poder frente a las comunidades sino que ofrece la oportunidad de acumular enormes cantidades de riqueza.

Sin embargo, no pareciera que en el caso de Colombia fuera a ocurrir un fenómeno de expansión de la criminalidad. Durante casi tres décadas a raíz del auge del narcotráfico el estado desarrolló una amplia experiencia, pie de fuerza y capacidad de choque para neutralizar organizaciones criminales de todo tipo, principalmente aquellas dedicadas al narcotráfico. Resultó que el conflicto y el narcotráfico obligaron al Estado a desplegar su capacidad coercitiva y sus instituciones a lo largo del territorio, de modo que el postconflicto no ocurrirá en un vacío institucional.

Medellín: experiencias de postconflicto y desmovilización

Los problemas de seguridad del postconflicto se situarán de manera muy distinta de acuerdo a los efectos que tenga la desmovilización de las FARC en cada lugar. En el caso de Medellín el postconflicto debe comprenderse desde sus particularidades en cuanto a la historia y la situación actual de seguridad, de la criminalidad y de las expresiones del conflicto en la ciudad. En ese orden de ideas es necesario remitirse a varios fenómenos que datan de las últimas cuatro décadas.

En primer lugar, la aparición de subculturas criminales a partir de los años setenta en las barriadas y comunas de la ciudad. Allí muchos adolescentes y jóvenes ante las escasas perspectivas de futuro decidieron organizar pandillas o bandas criminales como alternativa de realización social. El fenómeno fue tan extenso que se volvió parte de una subcultura generalizada. Cada barrio tenía su combo o su banda.

En segundo lugar, con Pablo Escobar se dio una articulación de estos combos y bandas alrededor de un gran capo del narcotráfico. Escobar entendió que si redistribuía los recursos del narcotráfico hacia la criminalidad de la ciudad obtendría su respaldo para someter al resto de capos del Cartel de Medellín. Fue así que invirtió en obras sociales en los barrios y estableció un pago periódico para los jefes de las bandas que a su vez distribuían parte de ese pago a sus subalternos y a la comunidad. El resultado final fue que Escobar se convirtió en el capo absoluto de la ciudad y pudo incluso plantear una guerra al estado en contra de la extradición. Disponía de alrededor de 5000 jóvenes dispuesto a matar a cualquier policía con que se tropezaran.

En tercer lugar, hay que considerar el papel de las guerrillas en la organización de grupos milicianos entre comunidades donde existían subculturas criminales. Ya en los noventa el M-19 tuvo campamentos de paz donde formó a jóvenes milicianos. Igual lo hicieron otras guerrillas como el ELN con sus Comandos Armados del Pueblo (CAP) y las FARC. Durante los noventa ocurrieron procesos de paz que llevaron a la desmovilización de estas milicias, en condiciones bastante particulares porque les permitían seguir patrullando las calles de sus vecindarios y portando armas. Por eso, y como lo ha señalado Jorge Giraldo, por otras razones ligadas a la dinámica de la criminalidad organizada en la ciudad, en vez de ser un proceso definitivo ocurrió una transformación de milicias guerrilleras en grupos paramilitares. Simplemente cambiaron de bando y continuaron ejerciendo las mismas actividades criminales y el mismo control social sobre sus comunidades.

En cuarto lugar es importante señalar que a principios de la década del 2000 el paramilitarismo se impuso como el gran regulador de la criminalidad de la ciudad. Se trataba en realidad de un movimiento en dos sentidos. En una instancia inicial unos miembros del Cartel de Medellín, los hermanos Castaño, que habían también incursionado en áreas rurales organizaron unos súper ejércitos paramilitares. Bajo el mando de Doble Cero enviaron comandos especiales para expulsar a las milicias guerrilleras de la ciudad. En una instancia subsiguiente Don Berna, un capo en ascenso quien dirigió la persecución contra Pablo Escobar desde el ala disidente del Cartel de Medellín en asocio con los hermanos Castaño, se encargó de someter a las bandas criminales de la ciudad. En esta tarea recibió el respaldo de los paramilitares afincados en zonas rurales. Se convirtió en el nuevo gran capo de la ciudad bajo el manto de un luchador contrainsurgente de la causa paramilitar. Tanto así que Don Berna se refugiaba en la zona del municipio de Valencia, Córdoba, como jefe del Bloque Héroes de Granada.

Finalmente a mediados del 2000 ocurrió el gran proceso de desmovilización de los grupos paramilitares que habían expulsado lo que quedaba de milicias guerrilleras en Medellín. Se trató en realidad de la desmovilización de numerosos criminales que fueron reclutados por Don Berna como parte de los combos y las bandas de la ciudad y que ciertamente cumplieron un papel contrainsurgente. Es este proceso el que aparentemente tiene mucho que decir acerca de cómo podrían ser los efectos de un postconflicto con las FARC en Medellín en lo que concierne a la atención a los desmovilizados y a las probabilidades reciclaje criminal.

Luego de este proceso continuó el control del crimen organizado desde la cárcel por Don Berna. Las disidencias desde el interior de la organización fueron neutralizadas. Daniel Mejía sería desaparecido, pues quería desbancarlo del control de la Oficina de Envigado. Sin embargo, con la extradición de Don Berna este control desapareció y se sucedieron las guerras internas para definir el mando en la organización y el dominio de las rentas criminales en la ciudad.

La última gran guerra fue la que sostuvieron Valenciano y Sebastián. A partir de entonces, sin embargo, era claro que el esquema de un gran capo del narcotráfico que controlaba a los combos y bandas de la ciudad y que exigía una parte de sus ganancias a los demás narcotraficantes que vivían en Medellín a cambio de seguridad había llegado a su fin. Las bandas y los combos ahora están articulados a organizaciones menos poderosas que no están en condiciones de someter al grueso de los narcotraficantes que operan desde Medellín. Simplemente reciben un pago por realizar cobros cuando ocurren desencuentros entre narcotraficantes. No establecen un cobro sistemático de un

porcentaje de las ganancias como en su momento lo hicieron Escobar y Don Berna. Al día de hoy las principales fuentes de riqueza de la criminalidad son la extorsión, el microtráfico y el control de algunos mercados criminales, todas estas actividades volcadas a lo local, no el gran crimen transnacional.

La seguridad de Medellín en el postconflicto

Lo primero que hay que considerar para analizar el impacto en la seguridad de Medellín que tendría la desmovilización de las FARC es que ésta va a ocurrir principalmente en zonas rurales y de frontera donde la guerrilla tiene presencia y control territorial. Allí es donde está la base de su reclutamiento y de su incidencia sobre la sociedad. Por el contrario, Medellín es una ciudad donde desde hace al menos una década la presencia de las FARC es bastante reducida. Su control sobre barrios marginales a través de milicias ha sido diezmado al punto que podría considerarse inexistente. Es seguro que puedan existir redes de logística, células políticas clandestinas y eventualmente lleguen a la ciudad miembros para operaciones especiales. Sin embargo, este tipo de organizaciones luego de una desmovilización no tienen capacidad de mutar en algún tipo de agrupación criminal que aproveche sus conocimientos en el uso de la violencia para lucrarse. Mucho menos hay señales de la formación de organizaciones guerrilleras disidentes que no acepten la orden de desmovilizarse y pretendan crear algún tipo de guerrilla urbana.

Por consiguiente, el escenario más probable en el postconflicto es que la desmovilización de las FARC no va a tener un efecto profundo sobre la situación de seguridad de Medellín. La razón principal para una perspectiva de riesgo tan baja es la propia conformación social de la guerrilla. La mayoría de los miembros de la guerrilla, sobre todo aquellos que hacen parte de la tropa rasa y mandos medios que más riesgo tienen de reincidir en la violencia, no se ubicarán en la ciudad luego de desmovilizarse. Sus miembros, como se sostuvo anteriormente, son originarios de sociedades campesinas y colonas y poseen muy poca formación y experiencia para manejar la retórica, el discurso y las habilidades que requiere el ejercicio de la política en la legalidad. Por lo que no serán muy dados a establecerse en una ciudad como Medellín si deciden dedicarse a una vida sin militancia política activa luego de la desmovilización, ni tendrán grandes oportunidades de asimilarse en el movimiento político si deciden continuar activamente con las FARC. Muy probablemente un sector de estos combatientes formen alguna Farcrim o sean reclutados por una Bacrim. Pero el reciclaje en organizaciones criminales ocurrirá en zonas rurales, no en Medellín donde los espacios de la criminalidad organizada están ampliamente copados.

Otra forma de riesgo podría, de otro lado, provenir de la acumulación de recursos y de poder que pueda ocurrir en las áreas rurales por parte de organizaciones criminales como los Urabeños o cualquier otra que surja a partir del copiamiento de los espacios de control de las FARC. Con nuevos recursos y capacidades podrían pretender ingresar a las ciudades para controlar economías y mercados criminales como en su momento lo hicieron las AUC con Don Berna en el caso relatado en la sección previa. Es un fenómeno acerca del cual existe además evidencia que está ocurriendo. Al día de hoy hay bastantes informes y referencias periodísticas del ingreso de los Urabeños en la ciudad. Sin embargo, aun suponiendo que sea cierta la incursión de los Urabeños, su capacidad de control de la criminalidad local es bastante limitada. No parecieran establecer un monopolio sobre los narcotraficantes que viven en Medellín ni sobre las bandas y combos. Al margen del control de algunas plazas y del uso de negocios legales para lavar ganancias del narcotráfico internacional su poder es más bien reducido. La fuerte presión que la Policía ejerce sobre sus líderes en Urabá y el avance del estado sobre la criminalidad en Medellín impiden que los Urabeños puedan alcanzar un poder sobre las bandas y combos locales a un nivel similar de lo que en su época tuvieron Pablo Escobar o Don Berna.

Ahora bien, la situación de los Urabeños es particular porque concentra el grueso del esfuerzo estatal contra la criminalidad por ser la Bacrím que mayor amenaza representa hoy a la seguridad. Lo que daría lugar a pensar que una nueva Bacrím que emerja sin sentir tanta represión por el estado podría aprovechar las circunstancias para tratar de imponer algún tipo de control sobre la criminalidad de la ciudad. Sin embargo, este escenario no pareciera factible por los avances del estado en las zonas rurales y en la misma ciudad. Por más poder que tengan hoy los Urabeños es un poder que está muy lejos de aquel que tuvieron a finales de los noventa las facciones de las AUC que eran capaces de controlar la política y la criminalidad en las ciudades. Además, si una nueva Bacrím concentra el poder que tienen hoy los Urabeños en ese preciso momento el estado la convertirá en su principal objetivo de seguridad.

Otro problema de seguridad que podría traer la desmovilización de las FARC es el de la atención masiva de antiguos guerrilleros en la ciudad. Al respecto hay que reiterar que Medellín como tal no debería ser un centro de atención muy importante de excombatientes porque no muchos de ellos, sobre todo rangos medios y bajos, son originarios de la ciudad. Quienes se desmovilicen y escojan Medellín como futuro lugar de residencia muy seguramente serán cuadros formados políticamente que continuaran con su tarea en el movimiento social o el partido que siga al final de la guerrilla

como ejército revolucionario. Estos cuadros no se reciclarán en un futuro como criminales o como parte de las mafias que constituyen el principal problema de seguridad en Medellín por su alta ideologización y porque disponen de suficiente formación para hacer parte de las redes de trabajo político en la legalidad. Muy seguramente muchos de ellos se desmovilizarán no como parte de un grupo combatiente sino como parte de redes logísticas, propagandísticas y de células clandestinas en las ciudades. No sería raro que muchos miembros del PC3 y de la Marcha Patriótica, que nunca combatieron, hagan parte del proceso de desmovilización como guerrilleros de las FARC.

En suma, la gran diferencia de Colombia con países que salieron de graves conflictos civiles como los centroamericanos es que el Estado a lo largo de la guerra se vio obligado a desarrollar una capacidad de respuesta a la criminalidad. Gran parte del esfuerzo de guerra estuvo dirigido a neutralizar las organizaciones criminales que proveían las rentas que financiaban a los actores irregulares del conflicto. Del mismo modo, la respuesta contrainsurgente y contra las mafias y los paramilitares exigía la expansión y el despliegue de las instituciones del estado en áreas periféricas y marginales. Medellín es un excelente ejemplo de cómo el Estado logró recuperar el control de comunidades donde previamente la autoridad a duras penas podía ingresar. Así al día de hoy sean evidentes los problemas de mercados criminales, corrupción y de práctica masivo de la extorsión, los márgenes de control por organizaciones criminales se han reducido en las últimas décadas.

Medellín ¿Laboratorio de paz?

Como lo ha venido señalando el equipo del CAP-EAFIT (Casas, 2015) y en particular los importantes trabajos adelantados por Giraldo *et. Al* (2013, 2014, 2015), Medellín está mucho más cerca de ser un laboratorio de paz que un teatro de guerra dadas las drásticas transformaciones en la tasa de homicidios, las transformaciones generadas por el urbanismo social, así como por la evolución de sus políticas de seguridad entre 2004 y 2015. Como lo señala Pearce (2015) en la ciudad desde el gobierno de Sergio Fajardo y posteriormente con Alonso Salazar y Aníbal Gaviria, se ha comprendido la importancia de desplegar políticas públicas en materia de seguridad de corte integrales que han permitido responder a los retos propios de la violencia urbana pero también al proceso de desmovilización de las AUC, y que han dado a la ciudad el reconocimiento por su modelo basado en la integración social (Pearce, 2015, p, 204).

En esa misma línea, es necesario reconocer que la rica historia que tiene la ciudad en procesos de desmovilización y reintegración producto de las diversas confrontaciones armadas (Giraldo y Preciado 2015) han tenido en la ciudad una respuesta acertada, principalmente a partir del Gobierno

de Sergio Fajardo, a través del fortalecimiento gradual del estado local y el incremento de la inversión social como resultado de una situación financiera positiva, se avanzó en el diseño de políticas públicas y de gestión local de actividades relacionadas con un novedoso modelo de seguridad (Giraldo y Preciado, 2015, p. 6); distanciándose de los enfoques securitizantes, mostrando resultados positivos que confirmaban la efectividad del nuevo enfoque y convirtieron a la ciudad en un laboratorio de seguridad (Giraldo, 2015).

Sin duda la Medellín del 2015, como afirman Giraldo y Preciado, está más cerca de ser un laboratorio de seguridad y de paz que un teatro de guerra, su crecimiento económico, oferta y capacidad institucional, así como por la desconexión directa con las dinámicas de la guerra abren una ventana de oportunidad para aprovechar sus condiciones actuales en pro de los beneficios del dividendo de la paz. Sin embargo el “Elefante en la sala” sigue ahí (Casas, 2015). El equilibrio criminal existente en la ciudad es sin duda uno de los factores que la blinda a los efectos perversos del postconflicto, pero al mismo tiempo la ata negativamente al sendero no resuelto de los nexos entre economía criminal y sector legal que ha permitido la persistencia del fenómeno criminal, uno que como se ha expuesto en esta sección puede poner a Medellín en una posición resistente al tránsito requerido para un postconflicto exitoso; eso es, la transición desde las economías de la guerra a modelos virtuosos e inclusivos de desarrollo social.

III METODOLOGÍA

Como se mencionó en la sección introductoria, el diseño metodológico está compuesto por entrevistas y análisis del estado del arte como instrumentos principales, y por una sesión de socialización de hallazgos y retroalimentación y análisis de prensa como instrumentos secundarios. Como categorías generales para la recolección y análisis de información se encuentran la identificación de: escenarios, retos, recomendaciones y actores clave tras un eventual fin del conflicto con la guerrilla de las FARC.

Además del tipo de diseño metodológico general, la definición de la metodología y sus instrumentos correspondientes se fundamenta en una estrategia metodológica fundamental como lo es el denominado método de “panel de expertos”, “entrevista de expertos” o “criterio de expertos”.

El antecedente de este método es el método *Delphi*, que se consolidó hacia mediados de la década de los 60 por Olaf Helmer y sus colegas de Rand Corporation buscando obtener un número de opiniones, que de manera sistemática se vaya decantando y contribuya a la comprobación de hipótesis cualitativas y permita analizar y validar de manera conjunta un fenómeno aprovechando el conocimiento que estos expertos tienen del tema (Hurtado, 2002).

El método *Delphi* se desarrolla a partir de la aplicación de consultas sucesivas buscando la simplificación de valoraciones y frecuencias desde un punto de vista cualitativo. El objetivo final es que esta secuencialidad “disminuya el espacio intercuartil, esto es cuánto se desvía la opinión del experto de la opinión del conjunto, precisando la mediana de las respuestas obtenidas” (Linstone y Turrof, 1975). De igual forma, el alcance final es acercarse a predicciones basadas en la “utilización sistemática de un juicio intuitivo emitido por un grupo de expertos” (Ibid.). Entre las ventajas de esta metodología se encuentran la gran credibilidad de las conclusiones y la capacidad de adaptación de estas conclusiones a escenarios complejos. También es importante tener en cuenta ciertas limitaciones como la posible imposición de las opiniones de ciertos expertos sobre otros, por lo cual el diseño de instrumentos contempla este aspecto dando el mismo valor a las distintas percepciones y promoviendo que el diálogo sea horizontal y constructivo.

En el marco de este proyecto, se hizo una adaptación del método *Delphi* a partir de dos rondas secuenciales, basadas en la realización de pasos sucesivos como se observa en la gráfica 4. Cabe decir que la estrategia primaria de la metodología *Delphi* aquí aplicada es la “entrevista de expertos”, en donde se busca construir opiniones y juicios colectivos a partir de un grupo de

especialistas independientes y reputados. Una de las razones centrales para la selección de esta estrategia es que ante la presencia de fenómenos complejos y de difícil análisis, se ha recurrido a este método para formalizar los posibles efectos de un programa de manera *ex ante* pudiendo prever contingencias y resultados inesperados (Unión Europea, 2005).

Gráfica 4. Pasos del Método *Delphi* adaptado



Fuente: Elaboración propia

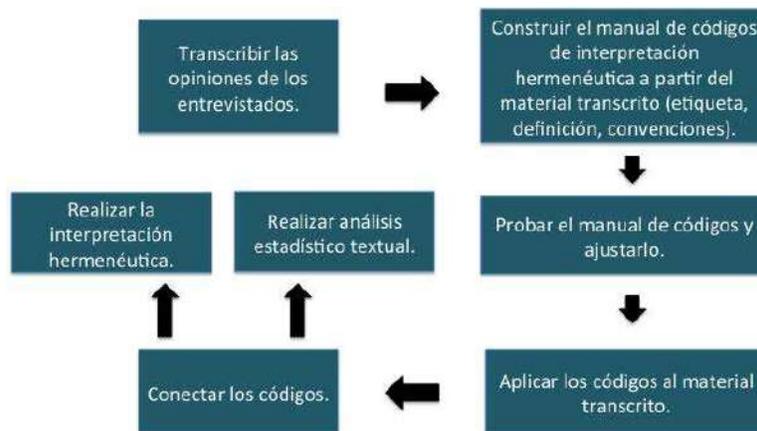
En concreto, durante la primera ronda se inició con la definición de criterios para la selección de los expertos a ser entrevistados, partiendo de las orientaciones de la Unión Europea que consisten en la experiencia profesional en el campo que se vaya a analizar y “ser reconocido y respetado por sus pares” y la independencia en términos de que el experto no sienta presión por su posición, principalmente (Ibíd, p. 2). Con estas consideraciones se definieron como criterios para el proyecto el “conocimiento del tema” y la “experiencia y posible injerencia en eventuales escenarios de postconflicto en Medellín en materia de seguridad y convivencia” asignándoles a cada criterio una escala valorativa de 1 a 5.

Este ejercicio permitió identificar dos grupos de expertos: i) un grupo de expertos académicos y de centros de pensamiento y ii) un grupo de actores que se relacionan con presentes y eventuales escenarios del postconflicto urbano en la ciudad de Medellín. Esta selección se fundamenta en que la definición de “experto” no solo corresponde a personas que tienen un conocimiento teórico sobre un fenómeno sino también porque tienen un conocimiento práctico del tema en cuestión; tienen un rol directo en el desarrollo de un programa y/o son capaces de influir en la toma de decisiones de los procesos involucrados con el tema.

Luego de esta selección rigurosa de los expertos, se contactó a los mismos y se realizaron las entrevistas, de acuerdo al diseño metodológico desarrollado en la primera etapa del presente proyecto. En las entrevistas se logró que los expertos expusieran su conocimiento y experiencia en perspectiva de entender y comprender el fenómeno estudiado (Littig, 2011), que en este caso es la definición de escenarios de post-acuerdo en la ciudad de Medellín en materia de Seguridad y Convivencia.

Posteriormente, se realizó el análisis cualitativo de las entrevistas a partir del desarrollo de los siguientes pasos como se puede observar en la gráfica 5:

Gráfica 5. Metodología para el análisis de entrevistas



Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, en primer lugar se transcribieron las opiniones de los entrevistados con base en los procedimientos establecidos en la metodología, dando cuenta de cada una de las 14 preguntas realizadas a los expertos. Posteriormente, se construyó un manual de códigos para identificar las opciones de respuesta recurrentes por cada uno de los bloques temáticos y preguntas. Luego se aplicó el manual de códigos para validarlo y finalmente se procesaron las transcripciones, para establecer cuáles son los comentarios recurrentes, similitudes y diferencias e interpretarlos a la luz de las categorías. Este análisis de categorías se hizo manualmente, estableciendo esquemas lógicos de asociación de categorías de preguntas abiertas y tabulación de opciones de preguntas cerradas.

El proceso culminó en la interpretación de los hallazgos, que se podrá detallar en el presente documento, además de la identificación de citas textuales de las propias voces de los expertos.

Adicional a la interpretación de códigos, para las preguntas principales se realizó un análisis estadístico textual, para establecer cuáles son las frecuencias asociadas a cada opción a partir de un conteo de menciones.

Posterior al desarrollo de estas actividades de la primera ronda, el 9 de octubre se llevó a cabo el evento de socialización de resultados parciales con la participación de algunos de los expertos entrevistados y con integrantes del Comité de postconflicto convocada por la Unidad de Víctimas Municipal de la Alcaldía de Medellín. Para propiciar la discusión en este escenario se partió de los resultados de las entrevistas, teniendo en cuenta los cuatro bloques temáticos de la metodología; de igual forma, el evento tuvo un enfoque participativo en el que se usaron dos tipos de herramientas:

- Presentación magistral: A través de tres paneles se expusieron los resultados del análisis de entrevistas de acuerdo a los cuatro bloques temáticos.
- *Metaplan*: Seguido a los paneles de presentación de resultados se abrió el espacio de discusión a través de la metodología *Metaplan* que busca visualizar los aportes de los participantes y simultáneamente irlos categorizando.

Cada uno de los espacios de discusión del evento estuvo guiado por unas preguntas específicas, buscando lograr el objetivo de la metodología Delphi en aras de una evaluación conjunta de los resultados de las entrevistas y buscar una o varias posturas grupales, en la medida en que esto fuera posible.

Dado el uso de información sensible para los entrevistados, el desarrollo de esta consultoría contempló de manera transversal un componente ético que busca garantizar la protección de los participantes. Para esto se recurrió a la aplicación de un formato de consentimiento informado que reconociera la voluntariedad de la participación de los expertos y buscara en últimas las garantías de la confidencialidad y anonimato de la información que ellos suministrarán al proyecto.

Como fase final de la metodología *Delphi* aplicada se encuentra el diálogo entre los resultados de la primera y segunda ronda, y la elaboración del informe que contiene los hallazgos resultantes del análisis de las treinta y dos (32) entrevistas, dos grupos focales específicos y un evento de socialización. Estos se expondrán de acuerdo a los bloques temáticos establecidos por el diseño metodológico de escenarios, retos, recomendaciones y actores involucrados.

En términos de caracterización de los entrevistados cabe decir que 18 expertos son denominados como “académicos” pues tienen una filiación institucional con un centro de pensamiento o universidad; 7 expertos son de la categoría de “gestión, construcción y opinión” y son aquellos que trabajan en organizaciones sociales o de cooperación internacional y 7 expertos son funcionarios públicos de las instituciones locales. Ahora bien, para fines de referenciar las opiniones los expertos también se definen por si trabajan en Medellín, en el nivel nacional o desde otros países del mundo. En el primer caso, serán denominados como “experto local”, los segundos como “experto nacional” y los terceros como “experto internacional”. En total se entrevistaron 18 expertos locales, 10 internacionales y 4 nacionales. Así mismo, se desarrollaron dos grupos focales con personas en proceso de reintegración de las AUC y las FARC contando con 17 participantes. Finalmente, la metodología incluyó un evento de socialización realizado el 9 de octubre de 2015, y que contó con la participación de 22 expertos en el diseño, implementación y monitoreo de las políticas de seguridad y convivencia en los territorios de la ciudad.

En esta medida, esta sección presentará el análisis de los resultados a partir de la identificación de esas categorías, seguido inmediatamente por un cuadro con los *verbatim*s principales, que reflejan las opiniones de los expertos valorando de manera especial sus propias voces. Para las preguntas principales también se encontrarán las gráficas que resumen el análisis estadístico textual. Como se mencionó, además de los resultados de las entrevistas y grupos focales, se encontrará el diálogo de estos con lo reflexionado en el evento de socialización.

En el anexo 1 se encuentran los manuales de códigos, en el anexo 2 se encontrará un listado de los expertos entrevistados y en el anexo 3 se mostrarán las categorías de análisis de la revisión de prensa, que será presentada más adelante. Teniendo en cuenta el protocolo de consentimiento informado y para proteger la identidad de los entrevistados al momento de expresar sus opiniones, ninguna de las respuestas abajo mencionadas contendrá los datos de identificación de los participantes.

IV. RETOS DEL POST ACUERDO PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN

ESCENARIOS

Para este primer bloque temático las entrevistas contemplaron 3 preguntas que indagaron por los posibles escenarios derivados de un posible acuerdo con las FARC, de la no existencia de dicho acuerdo y de una negociación con el ELN. En concreto las preguntas realizadas fueron:

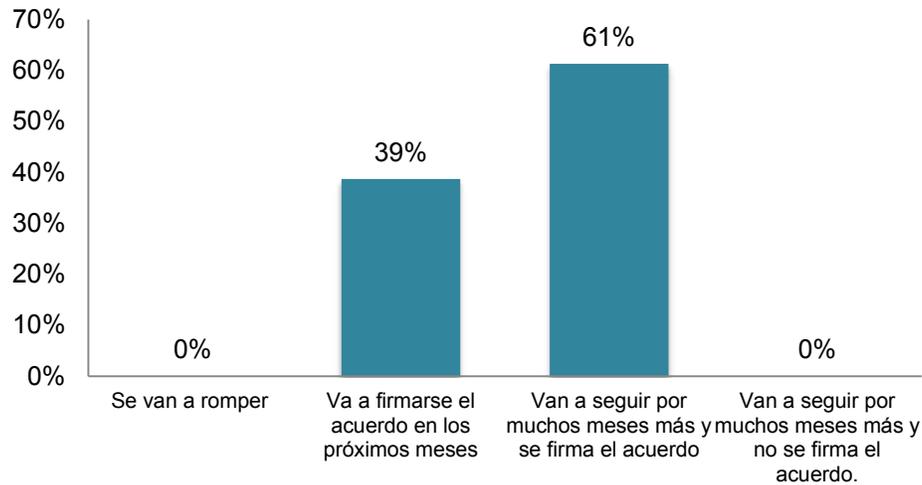
- Entendiendo que un escenario es un conjunto de circunstancias que se derivan de un hecho, ¿qué posibles escenarios resultarán en materia de seguridad y convivencia en la ciudad de Medellín tras la firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC?
- ¿Qué posibles escenarios resultarán en materia de seguridad y convivencia en la ciudad de Medellín si no se firma un acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC?
- ¿Qué posibles escenarios resultarán en materia de seguridad y convivencia en la ciudad de Medellín tras la firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno y el ELN?

A manera de contexto general antes de presentar los resultados de este bloque temático, cabe mencionar que a los entrevistados se les hicieron dos preguntas cerradas relacionadas con la percepción de las conversaciones (“¿Qué cree que va a suceder con las conversaciones de paz en La Habana, Cuba?”) y sobre la percepción de lo que ocurrirá en la ciudad tras este acuerdo (Tras la firma de un acuerdo con las FARC la situación en general de la ciudad va a: mejorar, empeorar, seguir igual).

Teniendo en cuenta que las entrevistas fueron realizadas entre el 10 de agosto y el 10 de septiembre, ninguna de las respuestas estuvo influenciada por el acuerdo del 23 de septiembre en materia de justicia en el marco de las conversaciones de paz de La Habana.

Lo que señalan los hallazgos de estas dos preguntas es, en primer lugar, que los expertos son optimistas en términos del desenlace final de las negociaciones con las FARC, puesto que el 61% dice que “van a seguir por muchos meses más y se firma el acuerdo”, y el 39% dice que “va a firmarse el acuerdo en los próximos meses”. Ninguno de los expertos señaló que se van a romper las negociaciones.

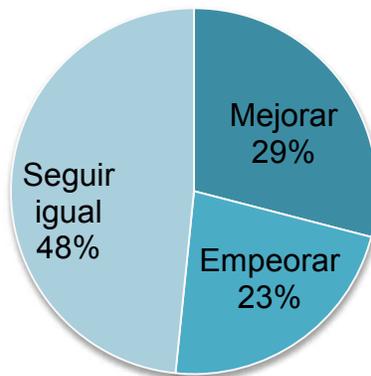
Gráfica 6. Percepciones sobre futuro de negociaciones con FARC



Fuente: Elaboración propia

En relación a las perspectivas de lo que podría pasar con la situación de Medellín tras la firma del acuerdo, el optimismo se reduce puesto que el 48% dice que todo va a “seguir igual”. Con porcentajes cercanos se encuentran las opciones de “mejorar” (29%) y “empeorar” (23%).

Gráfica 7. Percepción sobre la situación de Medellín tras la firma del acuerdo



Fuente: Elaboración propia

Escenarios de acuerdo con las FARC

En relación a los posibles escenarios derivados de un acuerdo con la guerrilla de las FARC, los entrevistados en general consideraron que no existe un único escenario posible. Por el contrario, hay una mezcla de factores que hace que esta respuesta sea compleja y que estén involucradas diversas circunstancias. Las opiniones también parten de señalar que este es un tema de interés nacional y que impone retos a diferentes actores y al Estado, a partir de lo cual la ciudad debe capitalizar sus experiencias frente a situaciones anteriores de desmovilización y reinserción. Como bien se señaló por parte de un entrevistado: “Yo espero que la experiencia acumulada en la ciudad con la desmovilización de las autodefensas nos sirva para no cometer los mismos errores” (Experto local).

Como se ve en la siguiente gráfica, los principales hallazgos giran en torno a dos grandes situaciones de las cuales se derivan una serie de actores, ámbitos y temas que darán forma a los escenarios:

Gráfica 8. Escenarios posibles tras un acuerdo con las FARC

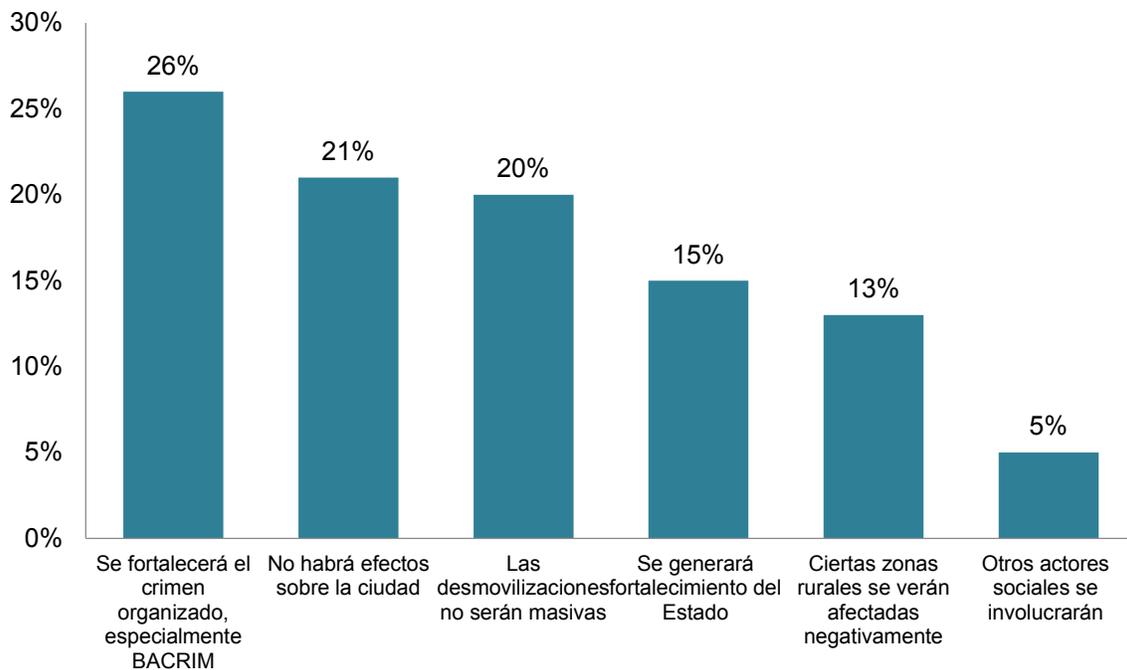


Fuente: Elaboración propia

A partir de dinámicas particulares asociadas a los anteriores actores, ámbitos y temas, el análisis arrojó seis posibles escenarios que podrían ocurrir tras la firma de un acuerdo con las FARC, los cuales serán explicados más adelante.

De igual forma, como se mencionó en la introducción y metodología, para las preguntas principales se realizó un análisis estadístico textual a partir del conteo de menciones de las transcripciones, teniendo en cuenta los escenarios identificados. Los resultados de este análisis arrojaron que sobre todo los expertos mencionaron el escenario relacionado con el fortalecimiento del crimen organizado, especialmente de las BACRIM con un 26%. A esta opción le sigue el escenario relativo a que no habrá efectos significativos sobre la ciudad (21%) y que las desmovilizaciones hacia la ciudad no serán masivas (20%).

Gráfica 9. Frecuencias de la pregunta sobre escenarios tras un acuerdo con las FARC



Fuente: Elaboración propia

Antes de explicar cada uno de los anteriores escenarios, los expertos fueron contundentes al señalar una serie de supuestos para la comprensión de los escenarios y en general para abordar el debate sobre los resultados del acuerdo de paz con las FARC. Lo primero es que, con o sin acuerdo, los

gobernantes deben prestar atención al tema de las conflictividades urbanas. Como bien lo señala un experto: “La seguridad y la convivencia en las ciudades debe ser tema prioritario del postconflicto”.

En segundo lugar, se reconoce que los desafíos que conlleven las negociaciones son de carácter nacional y local, y por tanto hay interrelaciones entre estos niveles que no permitirán encasillar los escenarios como únicos a la ciudad de Medellín y al departamento de Antioquia. Esto supone además asumir que para manejar el escenario postconflicto “no hay recetas”, por lo cual se debe cultivar una actitud ciudadana crítica que reconozca la conflictividad en la vida cotidiana y en la vida política.

Precisamente, esto conduce a un tercer elemento y es que se debe discernir entre lo que es conflicto, violencia, violencia armada y paz. En este sentido, la violencia es lo opuesto a la paz pero el conflicto no es negativo *per se*. Es así como después del acuerdo seguirá existiendo violencia en la ciudad, dado que no todo se circunscribe a las formas de violencia de la guerrilla y a la violencia armada. Esto implica además entender como menciona un experto “los espacios de socialización donde se reproducen las violencias, desde lo íntimo hasta la comunidad”. Lo anterior afecta el tema de seguridad pues los mecanismos de reproducción de la violencia siguen estando presentes mediados también por rasgos culturales y económicos. Por otra parte, se deben hacer reflexiones sobre el papel del conflicto en la sociedad y verlo como algo que puede potenciar las relaciones ciudadanas si es apropiadamente manejado.

Aunque como se verá más adelante no existieron muchas menciones explícitas al tema de convivencia, si se reconoce que esta puede potenciarse aprovechando la coyuntura del tema de la construcción de paz buscando garantizar la no repetición.

Escenario 1: No habrá efectos significativos sobre la ciudad de Medellín

En primer lugar, fue posible identificar dentro de las posiciones de los expertos ciertas opiniones relacionadas con que el acuerdo con la guerrilla de las FARC no tendría efectos significativos en la ciudad. Esto significa que no habrían cambios sustanciales puesto que Medellín tiene sus propias dinámicas y nadie tiene incentivos para que la situación cambie. En términos de seguridad, esto se traduce en que los problemas y retos que enfrenta Medellín son singulares a la ciudad y no están vinculados a lo que sucederá en el post-acuerdo. Un factor explicativo de esto según los expertos es que la mayoría de homicidios ocurren por fuera del conflicto armado y por tanto no habrá un efecto de reducción en la violencia que se genera por variables como el narcotráfico o las mafias.

“La Habana no va a tener impacto en Medellín” (Experto internacional).

“Medellín tiene elementos, factores, problemas, retos y dificultades de seguridad propios. Y esos retos de seguridad van a seguir estando antes y después del escenario de conflicto” (Experto internacional).

“Las dinámicas de aquí, son dinámicas muy propias. Esto podría hacer que el impacto de La Habana sea mínimo” (Experto local).

Por el contrario, otro grupo de opiniones considera que si van a existir efectos sobre la ciudad. Para categorizarlos, el análisis cualitativo aquí realizado partió de clasificarlos según los actores involucrados en los escenarios, y a partir de allí definir qué escenarios se podrían producir. Los actores cuyas menciones fueron más recurrentes son las FARC y el crimen organizado principalmente refiriéndose a las BACRIM. También se menciona al Estado y otros actores de la sociedad civil.

En relación a las FARC se contemplan dos escenarios relacionados con eventuales desmovilizaciones que lleguen a la ciudad y desmovilizaciones que lleguen al ámbito rural.

Escenario 2: Las desmovilizaciones hacia la ciudad de Medellín no serán masivas

En relación con el ámbito urbano y la ciudad de manera concreta, los expertos consideran que las desmovilizaciones hacia la ciudad no serán masivas, como sucedió con las AUC. Esto a raíz de que, por ejemplo las AUC sí tenían una infraestructura urbana muy grande y adicionalmente, muchos de ellos eran de Medellín y lo que hicieron con la desmovilización fue retornar. Es por esto, que es probable que solamente venga a la ciudad un cierto número de personas que pueda llegar a tener algún vínculo con Medellín.

Los expertos afirman que las FARC no tienen una presencia significativa en la ciudad por lo cual su desmovilización no va a tener un efecto profundo sobre la situación de seguridad de Medellín y en general esta no se verá deteriorada por esta razón. La última experiencia miliciana de las FARC es en la comuna 13, luego unos remanentes en las comunas 1 y 3 pero, según algunos expertos, nada significativo además de dicha presencia. De manera específica se argumenta que “de unas 230 o 240 estructuras criminales activas de Medellín, articuladas a negocios con las FARC no hay ninguna”. Adicionalmente, si bien hay cierto tipo de presencia en algunos movimientos estudiantiles y sindicatos, “uno no encuentra un grafiti de las FARC en la ciudad hoy” puesto que hay un control criminal contrainsurgente en Medellín. Esto se deriva del hecho de que las bandas

cuyos integrantes estuvieron en los bloques Metro y Cacique por ejemplo, heredaron un “chip contrainsurgente”.

Esto dependerá también del número de personas que se desmovilicen. Según los expertos los cálculos del Gobierno de manera reservada son de alrededor de 14.000 desmovilizados, pero los indicadores internacionales señalan entre 18.000 y 35.000. De eso habría que estimar cuantos desmovilizados van a llegar a Medellín, aunque no deberían ser muchos teniendo en cuenta que “las FARC en Antioquia cuentan con 880 miembros”.

Otro eventual factor explicativo es la conformación social de la guerrilla, considerando que la mayoría hacen parte de la tropa rasa y mandos medios y verían muy riesgoso para ellos ubicarse en la ciudad luego de desmovilizarse, puesto que además hay presencia de bandas como los Urabeños y combos, que pueden llegar a percibir a estos nuevos desmovilizados como “competidores” en el “asunto de la venta de seguridad”.

No obstante, algunos hacen la salvedad de que si bien al comienzo puede que no se generen esas grandes migraciones hacia Medellín, posteriormente puede que los desmovilizados de otras regiones tengan intención de buscar oportunidades laborales en la ciudad. Por ejemplo en el caso de las AUC en el Bajo Cauca se desmovilizaron aproximadamente 1.300 personas, pero luego la mayoría se fueron para Montería y Medellín. También se señala que pueden quedar algunos reductos de milicianos o estructuras organizativas que quieran reproducirse a pequeña escala en la ciudad.

Otra posibilidad es que se produzcan desplazamientos a la ciudad desde la zona rural pero no necesariamente de desmovilizados. Un ejemplo podría ser ciertas zonas que tuvieron una fuerte presencia paramilitar y en donde se atemorice a la gente que provenga de las guerrillas o de las regiones donde estas operaban.

En todo caso, algunos expertos consideran que frente a esto, la seguridad no empeorará a causa de la desmovilización, es decir, no se va a dar lo que algunos denominan “la centroamericanización de Colombia”, en el sentido de que la situación después del conflicto sea peor que el mismo conflicto. Además se reivindica el hecho que la ciudad ha vivido escenarios de postconflicto con la experiencia de desmovilizaciones previas y la desmovilización paramilitar, por lo cual existen muchas lecciones aprendidas que deberían ser revisadas y aplicadas para afrontar el reto de atender a los desmovilizados de las FARC que lleguen a la ciudad.

Un asunto que fue mencionado por los entrevistados, es que se debe prestar atención a los desmovilizados de las FARC que ya están en la ciudad y que son aproximadamente 900. Estos no solo son de Antioquia sino también de otros lugares de Colombia especialmente del sur del país. Frente a estos desmovilizados y los nuevos que ingresen al entorno urbano, la ciudad debe estar preparada para “ofrecerles a los muchachos oportunidades e incentivos para optar por la legalidad, dado que seguramente van a llegar a comunidades marginadas”.

“El territorio de las FARC no es la ciudad, así que su desmovilización no afectaría el control de la ciudad” (Experto local).

“El asunto es que los miembros de las AUC que vinieron acá lo hicieron porque tenían lazos y familia en Medellín. Con las FARC había una diferencia y es que los sitios donde actualmente operan ellos y realizan actividades como el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata, son sitios en donde la mayoría de ellos tienen arraigo” (Experto local).

“Puede que no provenga una movilización masiva sino que provenga una movilización “Gota a Gota”, lo que será difícil de cuantificar y de medir” (Experto local).

“Un indicador de la poca presencia política que tienen ellos, es que hay un control criminal contrainsurgente en Medellín” (Experto local).

“La guerrilla en la ciudad fue derrotada por la delincuencia común” (Experto local).

Escenario 3: Ciertas zonas rurales del departamento serán afectadas negativamente tras el acuerdo

En relación a las áreas rurales de Antioquia, los expertos coinciden en que hay sectores del departamento con un dominio más explícito de las FARC como Ituango, Nudo del Paramillo y el corredor que conecta a Urabá con el Bajo Cauca. De hecho este último corredor traza un canal entre el Urabá, Nudo del Paramillo, Bajo Cauca, Sur de Bolívar, Catatumbo y Venezuela, en donde el dominio ha sido completo y ni siquiera pudo ser permeado por las AUC.

Partiendo de esta realidad, las opiniones son generalizadas en cuanto a que el conflicto del cual es objeto la negociación de La Habana, es ante todo rural y va a tener efectos sobre este ámbito, pensando en que tal vez las desmovilizaciones sean hacia esos sectores. La presencia de los frentes de las FARC en ciertas partes del departamento (como las mencionadas anteriormente), son además un rasgo de que ellos son de esos lugares, por lo cual no solo se ve involucrado un asunto de control territorial y económico sino de enclave social y arraigo. Esto puede llegar a suponer que estas

personas desmovilizadas pueden llegar a seguir delinquir dado que “las economías criminales son una actividad importante en el orden social”.

El origen además de estos miembros de las FARC es muchas veces campesino, que pueden no tener la experiencia para llegar al ejercicio de la política en la legalidad y no necesariamente tendrán las oportunidades para llegar a hacerlo.

En este sentido, es probable que ciertos frentes rurales desaparezcan y dejen de ejercer actividades ilícitas pero preocupa a los entrevistados que se pueda presentar un fenómeno de reclutamiento de las BACRIM o a nuevas “FARCRIM” y esto seguramente se presentará en zonas rurales y no en la ciudad que, como se mencionó anteriormente ya tiene presencia de delincuencia organizada.

Por eso los expertos recomiendan prestar atención al asunto de los mandos medios pues según una opinión “casi todas las organizaciones criminales son dominadas hoy por ex mandos medios de las AUC”. A esto se suma que los desmovilizados en algún porcentaje no sabrían trabajar la tierra y hay un riesgo de que lo que los mantenga en sus tierras de origen sea la actividad ilegal.

Otro aspecto a tener en cuenta es la participación política por la vía electoral y social puesto que se tienen antecedentes de “exterminio de la oposición política como lo que ocurrió con la UP, la JUCO, la Luchar y el Frente Popular”, por lo cual es necesario considerar un posible incremento de la violencia política.

“Se está negociando un conflicto que es rural y no tanto urbano” (Experto local).

“Frentes que operan en la región de Antioquia y su vecindad han estado ligados a actividades económicas delincuenciales. En esos territorios algunos se van a quedar delinquir, porque es allí donde está el recurso, el ingreso”. (Experto local).

“Muy probablemente un sector de estos combatientes formen alguna Farcrin o sean reclutados por una Bacrim. Pero el reciclaje en organizaciones criminales ocurrirá en zonas rurales, no en Medellín donde los espacios de la criminalidad organizada están ampliamente copados” (Experto local).

“Los grandes retos de la implementación de los acuerdos están sobre todo en el campo rural. Las FARC tienen más el enfoque rural, tienen otra formación, esto también incluye la actitud política, entre otras cosas” (Experto local).

Escenario 4: Se fortalecerá el crimen organizado, especialmente las BACRIM que ocuparán espacios que dejarán las FARC

La gran mayoría de los entrevistados se refirió al crimen organizado como el principal reto del postconflicto. Las bandas y organizaciones criminales que ya hacen presencia en la ciudad, según los expertos, pueden fortalecerse aprovechando los espacios que van a dejar las FARC, de la misma forma en que tomaron ventaja de los vacíos de poder que dejaron las AUC. Concretamente, algunos señalaron que las BACRIM pueden ser las más fortalecidas en un escenario de post-acuerdo; esto a raíz de que van a querer controlar también el negocio del cultivo y procesamiento de drogas que antes realizaban las FARC. Según los entrevistados, el negocio del narcotráfico continuará así como el de la minería, contrabando y otros, y por tanto las estructuras criminales, van a seguir teniendo todo el interés por explotar y controlar esas rentas.

A nivel territorial, las BACRIM van a tener una oportunidad y una necesidad estratégica de controlar los enclaves de cultivos de coca en donde antes hacían presencia las FARC. Esta acumulación de recursos y poder, sobre todo en las áreas rurales, por parte de organizaciones criminales como los Urabeños u otras, puede repercutir en que estos grupos busquen ingresar a las ciudades para fortalecer sus actividades criminales, lo cual ya sucedió con las AUC. No obstante, algunos expertos advierten que a pesar del poder que hoy tienen los Urabeños, este no es comparable al detentado por las AUC hace algunas décadas.

Otra inquietud que se planteó en las entrevistas es sobre si las FARC se pueden “Facrimizar” ante lo cual hay opiniones diversas. Algunas señalan que desde el punto de vista político algunos desmovilizados de las FARC no incurrirían en las mismas prácticas ilícitas de las BACRIM, pero otros señalan que en Antioquia hay por ejemplo, “un frente como el 18 que dicen que son traquetos puros”, en donde no existe cohesión en la organización.

Otro asunto relacionado con este tema, es la eventual reincidencia criminal de algunos miembros de las FARC, en el entendido además de que las organizaciones criminales pueden reclutar a esos “mercenarios” a pesar de no ser similares en lo ideológico. Es así como puede que ciertos grupos o frentes guerrilleros sigan delinquiendo de la misma forma en que lo hacen las bandas criminales. El riesgo de la constitución de estas denominadas ‘Farcrines’ yace en los mandos medios y guerrilleros rasos que sean reacios a desmovilizarse, que, como se ha mencionado, no cuenten con la formación para ingresar a un partido o movimiento civil y que al mismo tiempo, tengan habilidades y

conocimientos para seguir haciendo la guerra y lucrarse de economías criminales, sin el control de sus antiguos jefes guerrilleros.

Al margen de la relación entre futuros desmovilizados de las FARC y BACRIM, y otros grupos, un tema que se trató a menudo fue el comportamiento de los grupos ilegales armados que ya existen en la ciudad. Según un experto “son 2.000 personas agrupadas en BACRIM que quieren diálogos con el Gobierno”. Sin embargo, hasta ahora no se ha prestado atención a este asunto porque en La Habana no se están discutiendo aspectos relacionados con el conflicto urbano con los grupos ilegales.

En este sentido, puede que tras el acuerdo haya un efecto de rebote en donde las BACRIM quieran hacerse relevantes y además realicen acciones para hacerse notar frente al Estado; históricamente esto ocurrió durante el proceso del Caguán donde las AUC buscaron visibilizarse. Para algunos es claro que “habrá una guerra muy fuerte entre el crimen organizado, de un lado, y el Estado de otro”.

Aunque las opiniones se concentraron en las grandes bandas criminales, también existe la posibilidad de que grupos como los Triana, la Terraza, los Gomelos, entre otros, se refuercen puesto que se reproducen muy rápido. Dado que Medellín es una fuente logística para los grupos armados y las bandas ilegales en Colombia. Hay coincidencias entre algunos expertos en que atender el problema de los cultivos ilícitos (entre otros) pueden incidir en la reducción de la criminalidad y la delincuencia alrededor del narcotráfico.

“Los espacios que van a dejar las FARC van a ser ocupados naturalmente por otros actores. Ojalá que sea el Estado pero puede que no sea él” (Experto local).

“Si las FARC desaparecen puede que las BACRIM quieran dominar sobre todo el negocio” (Experto local).

“Las organizaciones criminales pueden reclutar a estos mercenarios que puedan resultar a la par del proceso de desmovilización. Las alianzas entre grupos con distinta ideología no son extrañas al conflicto” (Experto local).

“Puede que las BACRIM hagan lo mismo, que digan “usted debe tratarnos a nosotros con el mismo rasero de la guerrilla”. Van a querer mostrar fuerza para negociar con el Estado” (Experto local).

“Mientras haya posibilidades de negocios del narcotráfico, oro, la madera, van a existir estructuras criminales interesadas en los negocios. Las estructuras criminales, como las empresas, surgen donde hay ventajas competitivas” (Experto local).

Escenario 5: Se generará el fortalecimiento de las instituciones del Estado

Aunque los expertos en general fueron poco optimistas con los escenarios presentados anteriormente, se coincide en que el Estado debe jugar un papel clave y aprovechar esta oportunidad histórica. Esto se debería realizar no solo porque las FARC lo hayan exigido sino porque es menester del Estado propiciar transformaciones en diferentes ámbitos políticos, económicos y sociales. Adicionalmente, según un experto “la gran diferencia de Colombia con países que salieron de graves conflictos civiles como los centroamericanos es que el Estado a lo largo de la guerra se vio obligado a desarrollar una capacidad de respuesta a la criminalidad”, lo cual supone que ya existe un avance frente a este tema.

Adicional a las reformas institucionales derivadas del acuerdo de paz, el Gobierno, según los expertos “debe tener la virtud de escuchar y de poner a participar todas las corrientes”. Esto supone además incrementar la capacidad de presencia del Estado en zonas de alta incidencia del conflicto y la pobreza, que por lo general son zonas rurales marginadas. Frente a esto, los expertos ven que además hay que fortalecer de manera decisiva el tema de seguridad y justicia.

Aunque el tema de desafíos institucionales se abordará más adelante en este documento, las reformas de las que hablan los expertos no deberían ser solo a nivel macro a través de la transformación de la policía, la fiscalía, y otras organizaciones, sino también debe ocuparse de la recuperación de zonas en los territorios, buscando restablecer los “pilares del orden social a nivel local”. Esto supondría por ejemplo que el Gobierno Nacional considere que en los territorios también hay capacidades y que no se impartan instrucciones solo desde el nivel central; por ejemplo, un experto comentó al respecto que “Medellín es capaz, innovadora, con buenos instrumentos de planificación”.

Esta noción de descentralización aplica también dentro de la misma ciudad de Medellín. Se considera que sería importante conocer a qué entidades está acudiendo la ciudadanía en todos los barrios de Medellín y tener una agenda de trabajo con las comunas, en perspectiva primero de hacer un diagnóstico de problemas de la oferta institucional y posibles soluciones.

A lo largo de las entrevistas fue evidente el llamado de atención a las historias previas de la ciudad y la firma de la paz con las AUC, que no solo debieron limitarse a la entrega de armas sino que dejan la enseñanza de que debe existir una transformación institucional desde lo nacional, local y departamental.

Se hizo énfasis en que para el tema de seguridad, el Alcalde debe ponerse en frente de esto y fortalecer la Secretaría de Seguridad. Según un experto “en cierta medida, aspectos del modelo israelí se van a necesitar, donde todo el Estado trabaja por la seguridad”. Es así como debe haber voluntad política de los alcaldes, concejales y miembros de las JAL.

Aunque todos estos elementos se mencionaron en clave de un “deber ser”, en general los expertos son escépticos de que este escenario se materialice puesto que persisten rasgos que demuestran la incapacidad del Estado colombiano y que eso no necesariamente depende de que haya o no haya paz.

“Lo ideal sería que se hagan estas reconstrucciones estatales, esas deudas históricas que se tienen con la sociedad colombiana” (Experto local).

“Se debe extender la capacidad regulatoria del Estado en aquellas zonas de baja densidad poblacional y alta incidencia de la pobreza, características típicamente rurales” (Experto local).

“Hay que entender el sector de seguridad y justicia como un sector prioritario para afrontar los retos del postconflicto” (Experto local).

“Va a existir un vacío institucional y uno de los retos del Estado colombiano es ganarle esa carrera a los armados y a los violentos” (Experto internacional).

“No sirven solamente las reformas macro, sino que se debe hacer un buen diagnóstico y hacer intervenciones que apoyen lo que existe y que reformen donde hay que reformar para resolver las necesidades básicas a nivel más sublocal” (Experto internacional).

Escenario 6: Otros actores sociales se involucrarán activamente con acciones derivadas de los acuerdos

Aunque no tan recurrente como los temas relacionados con la desmovilización de las FARC y el fortalecimiento del crimen organizado, los entrevistados se refirieron al rol que desempeñarán los actores sociales en un escenario de post-acuerdo.

Entre los mencionados se encuentra el empresariado, que deberá contribuir al desarrollo de la paz y generar reformas, aunque se afirma que esto puede que sea una “utopía”. Se identificó por parte de algunos expertos que hay una división interna en el mismo empresariado denotando visos progresistas (por ejemplo del corte de Nicanor Restrepo) y otros en cambio son más conservadores

(en la línea del uribismo); esta división puede ser problemática a la hora de abordar el postconflicto y generar acciones concretas.

Desde la visión de considerar otros actores sociales como ONG y las organizaciones comunitarias se afirma que en el postconflicto los reclamos de estos grupos pueden hacerse más visibles y esto es benéfico para el fortalecimiento de la democracia.

Sin embargo, todas estas tareas tienen que acompañarse de la generación de confianza de la población hacia el Estado, y eso involucra programas sociales y estrategias en los mismos barrios. En esta medida, se argumenta que el proceso de paz no es un asunto solo entre las FARC y el Gobierno, pero aún no se han incorporado a otros actores.

Ante esto, las escuelas y las familias son escenarios relevantes en la construcción continua de la paz y el reconocimiento de que todos tienen algún tipo de rol en esos procesos venideros.

“El proceso de paz tiene una gran falencia. Creer que el problema está entre las FARC y el Gobierno” (Experto local).

“Hasta qué punto el empresariado y no solo el gobierno local se siente aludido y se hagan reformas que también los toquen a ellos” (Experto local).

“Puede ser que se hagan más visibles las demandas de ciertos sectores sociales como ONG y las organizaciones comunitarias en un escenario de postacuerdo y esto estaría bien para el fortalecimiento de la democracia” (Experto local).

“El postconflicto, si se maneja bien, puede generar ventajas estratégicas con planes de educación, planes laborales, fortalecimiento de la justicia, fortalecimiento de las organizaciones sociales, etc” (Experto local).

“Las escuelas y las familias son escenarios muy importantes para el proceso de paz. Esa cotidianidad es la que potencialmente construye la paz” (Experto local).

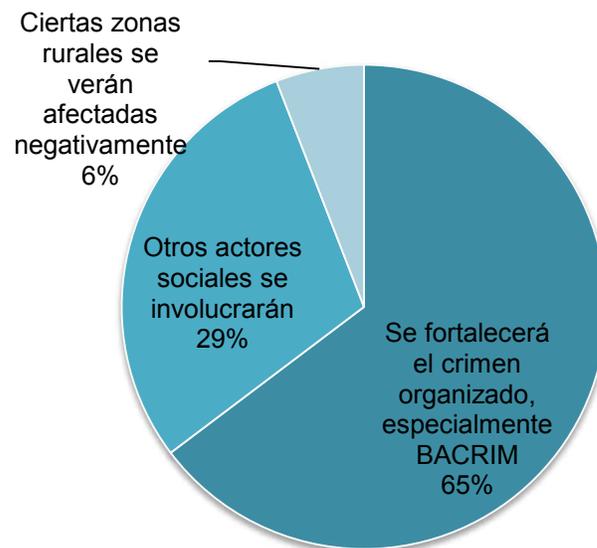
Reflexiones del evento de socialización frente a los escenarios

Teniendo en cuenta estos seis escenarios definidos en las entrevistas, en el evento de socialización se pidió a los participantes establecer el escenario que sería más probable y posteriormente señalar las razones de su decisión. Las conclusiones de esta reflexión conjunta son las siguientes:

- La mayoría del grupo considera que el escenario más probable es el fortalecimiento del crimen organizado, especialmente las BACRIM que ocuparán espacios que dejarán las FARC.
- El escenario de que otros actores sociales se involucrarán activamente con acciones derivadas de los acuerdos tiene relevancia en el grupo, distanciándose de la opinión generalizada de las entrevistas en donde esta posibilidad fue poco mencionada.
- Se percibe que ciertas zonas rurales del departamento serán impactadas negativamente tras el acuerdo.

En términos estadísticos, y consistente con las conclusiones arriba mencionadas, el análisis de probabilidad indica que el escenario más probable es el fortalecimiento del crimen organizado, especialmente de las BACRIM con un 65%. Seguido a este se encuentra la participación de otros actores sociales con el 29% y la afectación negativa de ciertas zonas rurales con un 6%.

Gráfica 10. Análisis de probabilidad de escenarios en evento de socialización



Fuente: Elaboración propia

Sobre ese primer escenario de fortalecimiento de la criminalidad, este también fue el más mencionado en las entrevistas a expertos, y frente a él los participantes coinciden en que la alta probabilidad de ocurrencia de este se debe a la existencia de rentas criminales en los territorios, la

debilidad estatal y las “promesas incumplidas” en relación a los procesos de desarme, desmovilización y reintegración (DDR).

En este sentido, los territorios serán objeto de disputas entre organizaciones como las BACRIM, y son claros los vacíos institucionalidad para hacer frente a esta situación y copar los espacios de control de las FARC. Además se afirmó que los grupos que compitan por el territorio serán también “combos delincuenciales y organizaciones vinculadas al narcotráfico”, e incluso otros actores armados. Adicionalmente, puede que hayan desmovilizados que reincidan en la violencia, por ejemplo, por falta de oportunidades, por carencias en el acompañamiento institucional o por el interés de continuar en negocios ilegales a causa de su rentabilidad.

Estos elementos invitan a la reflexión sobre el necesario fortalecimiento del Estado, según los participantes, por lo cual deberá pensarse en estrategias de seguridad y convivencia que incluyan una aproximación “multidisciplinaria” a este asunto.

En relación al escenario de la participación de otros actores sociales, los expertos consideraron en el evento que es posible que tras la firma del acuerdo se propicien condiciones para la injerencia de organizaciones privadas y de la sociedad civil en procesos de construcción de paz en Medellín. La siguiente es una opinión de un participante que ilustra de manera clara este hecho: “no solo el Estado será protagonista en el postconflicto, hay otros actores que buscan sobresalir”.

Escenarios sin un acuerdo con las FARC

En general los entrevistados consideran muy probable que se llegue a un acuerdo con las FARC por lo cual al indagar por qué podría pasar si no se pacta el mismo, las opiniones no fueron muy numerosas ni explícitas. En general se observan tres posibles escenarios como se ilustra en la siguiente gráfica:

Gráfica 11. Escenarios de que no se llegue a un acuerdo con las FARC

Fuente: Elaboración propia

Escenario 1: Continuarían los mismos problemas y la misma situación en la ciudad

Unas pocas opiniones afirman que un escenario de no acuerdo con las FARC no impactaría en la ciudad ni cambiaría lo que actualmente está sucediendo. Estas opiniones dan cuenta de que la ciudad tiene problemáticas en el día a día como “las bandas criminales, los combos, los fleteos, micro tráfico, micro extorsión, etc.”. Adicionalmente, habría que seguir con la política de atención a víctimas y desmovilizados de la misma forma en que se realiza.

Escenario 2: Se recrudecerá la violencia de las FARC en la ciudad de Medellín

En cuanto a quienes consideran que la no firma sí puede llegar a tener efectos, existen dos posiciones: los que consideran que esas afectaciones serán sobre lo urbano y los que creen que estarán sobre lo rural. En el ámbito de la ciudad, se considera que dado que las FARC no están muy posicionadas en la ciudad pueden llegar a tener acciones variadas. En primer lugar, puede que no quieran entrar a rivalizar con el poder ilegal de las bandas que ejercen un dominio en la ciudad, pero también existe el riesgo de que busquen aliarse con algunas de esas formas de delincuencia para seguir sosteniendo su argumento de continuar en la guerra.

Según algunos entrevistados “la parte más débil de las FARC es el asunto urbano” por lo cual pueden llegar a querer tener una presencia más activa a través de atentados en grandes ciudades, incluida Medellín. A esto se suma el hecho que se puede percibir que la ciudad es un enclave de la centro derecha y por tanto puede ser considerada como un potencial objetivo militar.

Otra opción es que la ciudad pueda verse avocada a recibir desplazamientos campesinos masivos producto de un eventual recrudecimiento de la violencia en las zonas rurales. Esas posibles alianzas entre las FARC y otras organizaciones pueden terminar derivando en el aumento del crimen organizado que impactaría a la ciudad. También puede que se vuelvan a proliferar los mecanismos de violencia tradicionales de las FARC como “cilindros bomba, minas anti-personas o acciones clásicas como secuestros, extorsiones, etc.”.

Es posible identificar en las opiniones de los entrevistados que un rompimiento de las negociaciones no afectaría positivamente a Medellín, precisamente porque pueden verse comprometidas dinámicas de seguridad y convivencia claves. A esto se podría sumar que los mandos medios quieran ser más independientes y buscar relaciones con la ilegalidad tras un fallido intento de paz.

Escenario 3: Se recrudecerá la violencia de las FARC en las áreas rurales

Los expertos consideran que a corto plazo el rompimiento de los acuerdos se sentiría sobre todo en el campo, precisamente porque el conflicto ha tenido una presencia acentuada en lo rural. También porque se evidencia que el cese al fuego por parte de las FARC y el Gobierno ha generado una disminución de la violencia precisamente en esas zonas rurales.

En concreto pueden llegar a darse desplazamientos masivos en territorios como el Bajo Cauca y el Urabá, a lo cual se suma un posible recrudecimiento de las acciones terroristas en la infraestructura vial, energética y en general las condiciones físicas para la economía. Una visión muy específica de los expertos que ilustra un escenario pesimista señala lo siguiente: “se irían a muerte contra la sociedad y el Estado”.

“Seguiríamos enfrentándonos con las problemáticas del día a día: las bandas criminales, los combos, los fleteos, micro tráfico, micro extorsión, etc. Son esas cosas que continuarán, con o sin la firma del proceso de paz” (Experto local).

“La parte más débil de las FARC es el asunto urbano. Ellos en las ciudades no tienen presencia militar. Si no se firma el acuerdo entraríamos en una fase al estilo de los días de Pablo Escobar con grandes atentados terroristas para hacerse sentir” (Experto local).

“Habrá un escenario de frustración, reaparición de la violencia y conductas terroristas de las FARC, porque estratégicamente no pueden ser en campo de batalla muy adversarias. Van a utilizar cilindros bomba, minas anti-personas o acciones clásicas como secuestros, extorsiones, etc” (Experto internacional).

“En el campo si se tendrían mayores impactos. Ya hemos visto que el cese al fuego unilateral por parte de las FARC y el Gobierno han llevado a una disminución de la violencia en las zonas rurales que es donde más crudamente se vive la guerra en la actualidad” (Experto nacional).

Escenarios de acuerdo con el ELN

Habiendo indagado los posibles escenarios que se configurarían a partir de un acuerdo o la inexistencia de este con las FARC, a los entrevistados también se les preguntó por las situaciones que posiblemente se derivarían de un acuerdo con el ELN. En términos globales, los expertos no fueron tan específicos a la hora de proyectar esta situación y en general se enfocaron menos en los escenarios y más en los supuestos que deberían tenerse en cuenta a la hora de una negociación con este grupo guerrillero. El siguiente esquema ilustra los resultados de esta pregunta:

Gráfica 12. Escenarios de acuerdo con el ELN



Fuente: Elaboración propia

En primer lugar, y en relación al tema de los supuestos que se tendrían que considerar a la hora de una negociación, los expertos en su mayoría coinciden en que una agenda de conversaciones con el ELN sería distinta a las FARC, tanto por el estilo de organización como por los intereses que tienen en algunos temas.

Sobre los aspectos organizacionales, los expertos afirman que el ELN es una estructura más radical y menos flexible a hacer ciertas concesiones. Incluso un entrevistado sugiere que dado que son “muy sectarios probablemente son capaces de irse de la negociación”.

A nivel interno, los expertos señalan que en el ELN son más horizontales que las FARC y por tanto hacen más énfasis en la deliberación, lo cual podría repercutir en un proceso de negociación prolongado. Dado este mismo carácter, algunos expertos dicen que los líderes no pesan tanto y afirman que a nivel colectivo hay muchos que no están convencidos. Como bien lo ilustra un experto: “Hay gente del ELN que está haciendo cuentas de que a las FARC no les van a cumplir y ellos van a estar después para acoger a los ex militantes de las FARC y se convertirían en la organización de vanguardia del proceso revolucionario de Colombia”.

En relación con los temas, también existen diferencias sustanciales con las FARC pues están centrados en el tema energético en férrea crítica a las multinacionales. Otros opinan que la negociación va a ser difícil porque el ELN critica el modelo de desarrollo, la estructura del Estado y van a demandar un mayor nivel de participación ciudadana en concordancia con su estilo organizativo.

Esto implicaría que se tenga que hacer una agenda distinta a la planteada en la negociación con las FARC teniendo el riesgo de que por las radicalidades no se cumpla.

A pesar de estos aspectos, la mayoría de expertos coincide en que si se va a dar un acuerdo con el ELN, y se atribuyen como posibles causas de esta situación el que “tienen claro que la salida militar es un suicidio”, “no tienen fuerza ni apoyo internacional”, “militarmente no tienen las mejores condiciones” y “tienen un discurso político menguado”.

“Debe ser una agenda distinta con el ELN si se quiere negociar con ellos. El ELN es muy bueno para hacer agendas pero muy malo para ejecutarlas. Con todos los gobiernos ha tenido agendas de paz” (Experto local).

“La posición del ELN es demasiado radical. Muy especulativamente no sé qué tanto estén dispuestos a ser flexibles” (Experto local).

“Ellos tienen un modelo distinto al de las FARC. Ellos están muy centrados en el tema energético y han trabajado mucho el tema del petróleo y han criticado mucho a las transnacionales que saquean el país” (Experto local).

“Lo del ELN va a arrancar. Esta guerrilla tiene dos características que son muy complicadas (...) una organización muy federativa y muy deliberativa. Lo otro es que es muy horizontal y los líderes no pesan tanto como el secretariado en las FARC” (Experto local).

Escenario 1: No habrán cambios significativos en la ciudad

Teniendo en consideración los anteriores supuestos, las opiniones estuvieron divididas entre los expertos que creen que la situación no va a cambiar mucho tras un acuerdo con el ELN y quienes estiman que si se producirán ciertos efectos en la ciudad.

En relación al primer grupo de opiniones, los entrevistados afirman que puede que haya algún efecto en el departamento de Antioquia pero debe ser mínimo en cuanto la presencia del ELN es muy poca. Como dice un experto: “En Antioquia sólo cuentan con 180 miembros, una cifra que demuestra su debilidad”. Los reductos de este grupo se encuentran, según un experto, en El Bagre y Zaragoza así como en la frontera con Chocó y Risaralda.

Concretamente sobre el caso de Medellín, se considera que el acuerdo con este grupo armado no incidiría mucho en las dinámicas conflictivas de la ciudad y dada la debilidad precisada en el departamento no habría indicios para pensar que su desmovilización vaya a tener un impacto en Medellín. Adicionalmente se cree que vendrían mandos medios (que son más urbanos) y no milicianos de base. Al respecto se hace la referencia a que los frentes que más incidencia tenían en la ciudad eran el “Carlos Alirio Buitrago y el Barrientos”, pero fueron derrotados.

“No creo que cambie mucho la situación de la ciudad. El ELN quiere pegarse a las negociaciones de las FARC, recibir las mismas prebendas y concesiones y aprovechar para agregar un tema nuevo a la negociación, hablar de la cuestión minero-energética y demás” (Experto local).

“Puede que lo que pase con el ELN produzca algún efecto en Antioquia y en Medellín, pero no incidiría mucho en las dinámicas conflictivas de ésta última” (Experto local).

“No afectaría. En Antioquia el ELN tiene una presencia muy exigua. Yo no creo que haya un cambio significativo” (Experto local).

Escenario 2: Si habrían efectos sobre la ciudad aunque no es claro de qué tipo

Frente al segundo escenario, que consiste en que si habrían efectos para la ciudad (dada la naturaleza urbana del ELN según ellos) las opiniones fueron muy diversas y poco específicas. Algunos piensan que se podrían presentar “tensiones entre desmovilizados de diferentes grupos” y eso afectaría el control del tema del micro tráfico y otras actividades ilegales.

Otros expertos consideran que si la desmovilización es efectiva, los ex miembros de esta guerrilla no tendrían que rivalizar con otros grupos, en tanto ya no estarían involucrados en la ilegalidad. Esta noción más “optimista” del escenario resultante de la negociación con el ELN se refuerza también por ciertas percepciones de que esto puede ser una oportunidad para que se dé “más claridad a las políticas públicas de seguridad” y se integren elementos para hacer frente a temas como la lucha contra las drogas.

“Algún impacto va a tener en la ciudad si se llegase a firmar. Si se afectaría en temas de las rentas, el micro tráfico, el reclutamiento forzado, etc.” (Experto local).

“El ELN es mucho más urbano. Podría alterar más las ciudades” (Experto local).

“En las ciudades, que es donde existe más presencia institucional pueden empezar a existir tensiones entre desmovilizados de diferentes grupos. Por lo tanto, se deben tener estrategias para mitigar los eventuales conflictos que puedan darse. Para ello la sociedad se debe preparar” (Experto nacional).

RETOS

En relación al segundo bloque temático de la metodología general, las entrevistas incluyeron 4 preguntas que abordaron los retos que tendrá la institucionalidad, las dinámicas regionales que deberán tenerse en cuenta y los retos concretos de dos políticas relacionadas con la construcción de paz como lo son atención a víctimas y desmovilizados de grupos armados. Las preguntas realizadas fueron:

- En particular, ¿Qué desafíos tendría la institucionalidad de la ciudad, en términos de capacidad y oferta, para enfrentar los futuros escenarios de un post-acuerdo en materia de seguridad y convivencia?
- ¿De qué manera las dinámicas subregionales y departamentales en el escenario post-acuerdo, pueden afectar la seguridad y convivencia de la ciudad?
- ¿Qué retos tendrá la política de desmovilización y reinserción de población desmovilizada en la ciudad tras la firma de un acuerdo de paz con las FARC, en perspectiva de evitar su reincidencia, garantizar la seguridad de la población desmovilizada y promover su reintegración?
- ¿Qué retos tendrá la política de reparación a víctimas del conflicto armado en la ciudad tras la firma de un acuerdo de paz con las FARC, en perspectiva de evitar su revictimización y promover el goce efectivo de sus derechos?

Desafíos de la institucionalidad frente a los escenarios del post-acuerdo

A partir de las opiniones de los expertos, se obtuvieron diferentes categorías de desafíos que tendrá la institucionalidad luego de los acuerdos. En primer lugar hay que tener en cuenta que las opiniones concuerdan en que la implementación será un asunto crucial pero que debe garantizarse que se cumplan los acuerdos.

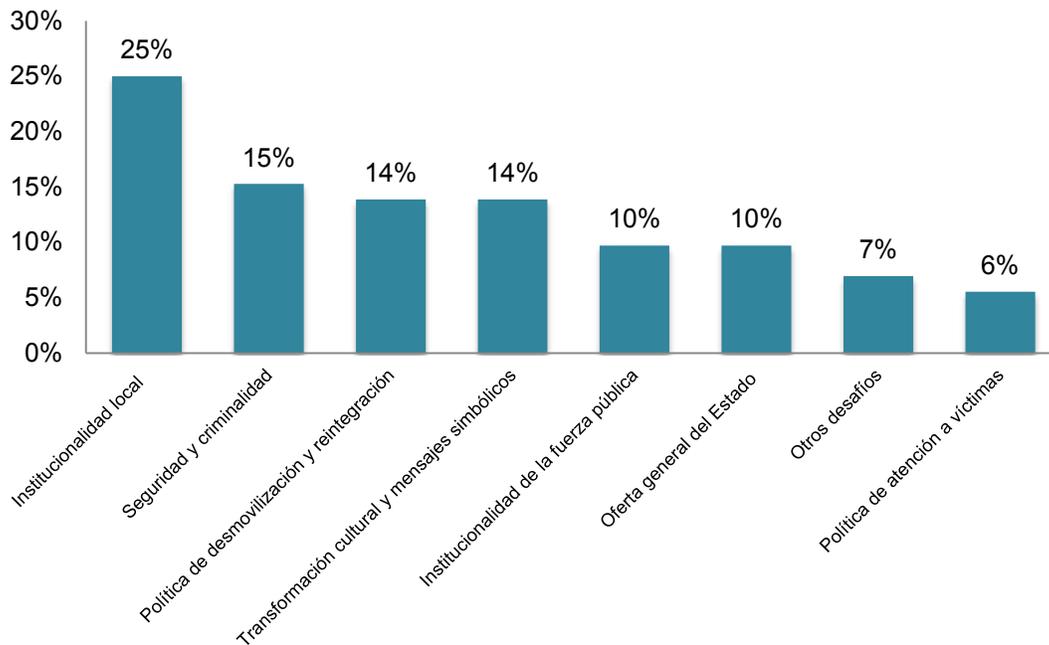
De manera puntual, se señalaron distintos retos que involucran diferentes políticas y distintas organizaciones del Estado. Las percepciones fueron agrupadas en las siguientes ocho categorías generales:

- Institucionalidad local
- Institucionalidad de la fuerza pública

- Seguridad y criminalidad
- Política de desmovilización y reintegración
- Política de atención a víctimas
- Transformación cultural y mensajes simbólicos
- Oferta general del Estado
- Otros desafíos

A partir de estas categorías el análisis estadístico de frecuencias, que también se realizó para el primer bloque, señala que el tema de institucionalidad local es el principal desafío identificado por los expertos con un 25% de menciones. A este le siguen seguridad y criminalidad con un 15%, y política de desmovilización y reinserción y transformación cultural y mensajes simbólicos, cada una de estas con un 14% de menciones.

Gráfica 13. Frecuencias de la pregunta sobre desafíos de la institucionalidad



Fuente: Elaboración propia

En este sentido, al analizar a fondo las variables de “institucionalidad local”, “institucionalidad de la fuerza pública” y “seguridad y criminalidad” se observan rasgos similares dado que las tres abordan asuntos relacionados con el orden público y la capacidad institucional frente a esto. Si se agregan

estas opciones se obtiene que el 50% de los desafíos serán sobre temas de seguridad y la institucionalidad relacionada.

Institucionalidad local, seguridad y criminalidad

A continuación se presentarán los hallazgos relacionados con el análisis de las categorías de institucionalidad local, seguridad y criminalidad:

Institucionalidad local

Uno de los principales desafíos identificados por los expertos se relaciona con la institucionalidad local, y cómo esta deberá alistarse para el escenario de postconflicto. Según distintas opiniones, la implementación de los acuerdos pasará por el fortalecimiento del Estado en los territorios. Se reconoce por ejemplo que el tema del rol de los mandatarios locales no ha sido discutido en las conversaciones de La Habana, por lo cual es clave trabajar en esto pues es a las regiones donde llegarán los desmovilizados y donde se tendrán que ejecutar las políticas.

Se reconoce que Medellín tiene una institucionalidad fuerte y experiencias de manejo de escenarios de desmovilización y atención a víctimas, producción de datos, entre otros factores. Por ejemplo, “ha habido el trabajo del Comité de Postconflicto en la Alcaldía de Medellín”. No obstante, todavía persisten vacíos y retos, y se deben generar cambios para que esta sea más efectiva por ejemplo en el tema de lucha contra la criminalidad, justicia y en la generación de confianza en el ciudadano. Muestra de esto es que según un experto “hay un déficit de articulación entre la parte más institucional y la parte más cívica y ciudadana”. Estos retos locales en general van a requerir recursos humanos y financieros que necesitarán el respaldo desde nivel nacional e internacional, y además también una articulación inter-institucional y de mecanismos para garantizar la sostenibilidad.

Es claro para los expertos que esta tarea no será de un año pero si se puede pensar en planes de corto, mediano y largo plazo para la construcción de la institucionalidad. Como menciona un experto: “Obviamente hay que apostarle a un Estado que funcione, que sea igualitario y eficaz, que llegue a la gente y que sea legítimo, pero nos vamos a demorar mucho tiempo para hacer esto y puede que los grupos criminales le ganen la carrera al Estado. Hay que tener un plan de corto plazo (...) para ver cómo podemos ayudar a blindar a estas comunidades del Gobierno de los actores armados”. Para esto la ciudad debe hacer un plan centralizado pero descentralizado en sus

estrategias, herramientas y alcances, y adicionalmente debe conectarse con lo que pase con el departamento.

Un asunto que mencionaron algunos expertos es que se debe considerar que el orden social en los territorios no ha sido regulado en el pasado exclusivamente por el Estado, sino que por el contrario ha sido híbrido pues han habido agencias de protección que han jugado el rol de regulación y protección. Este asunto es fundamental para la ciudad, pues los expertos piensan que esa heterogeneidad de actores es la que sienta los principales retos para la seguridad y convivencia, con especial énfasis en lo que puede llegar a ser la “privatización de la seguridad”.

“En los diálogos de la Habana uno no ve por ningún lado a los alcaldes y a los gobernadores. Finalmente donde van a llegar los desmovilizados y a los niños y niñas que se desvinculen van a ser a los municipios. Entonces creo que desde ya las ciudades y los municipios deben demandar del Gobierno Nacional cuál va a ser su papel y cómo se va a financiar ese papel” (Experto local).

“Medellín cuenta con la infraestructura institucional más evolucionada del país para enfrentar un pos-acuerdo. Pero esto no es suficiente” (Experto internacional).

“Es importante pensar en el énfasis local que se debe tener, comprendiendo que el orden social es híbrido en los territorios, si ha habido un orden pero no es el del Estado” (Experto internacional.)

“La institucionalidad actual no sirve para el postconflicto pues no es flexible ni se confía en ella” (Experto local).

Institucionalidad de la fuerza pública

Conectado intrínsecamente con el anterior reto, se encuentra el tema de la reforma de las Fuerzas Armadas y la Policía, especialmente de esta última. Se señala entre los expertos que se debe prestar atención a la corrupción y los nexos con la ilegalidad que se presentan en ciertos casos, lo cual ha debilitado la confianza ciudadana, sobre todo en la Policía. Para esto es clave desarrollar una “pedagogía para la paz” dentro de estas organizaciones, pues un reto es “cómo pasar de las instituciones y la cultura de la guerra y de la ilegalidad a la de la paz y la legalidad”.

En este sentido, para la ciudad la política de seguridad y convivencia ciudadana va a tener que hacer frente al control territorial que ejercen los combos, bandas y a los posibles casos de reclutamiento de desmovilizados. Según un experto, esto tiene que ser abordado con enfoque de gradualidad en donde “lentamente el Estado recupere algunos lugares, ya sin el tema de la guerrilla y los posibles

actores políticos en el horizonte de orden público. Que logre estabilidad, previsibilidad y no arbitrariedad en las comunas y los territorios de la ciudad”.

“Se deben considerar la corrupción de la policía y los nexos de ella con la ilegalidad” (Experto local).

“Lo ilegal y lo legal se traslapan. El poder está totalmente fragmentado en el plano de la ilegalidad” (Experto local).

“Es urgente la reforma de la policía, para construir una organización de naturaleza civil, orientada por la comunidad” (Experto internacional).

“Es importante evitar las políticas de borrón y cuenta nueva” (Experto internacional).

Seguridad y criminalidad

Derivado del desafío establecido anteriormente, se identifica uno en el que gran parte de los expertos coincide y es en el reto que planteará la seguridad y la lucha contra la criminalidad. Esto implica una amplia gama de aspectos como los señalados en los retos de las reformas de la Policía por ejemplo, pero también en la implementación de programas donde participe la comunidad y se busque la reconstrucción de la confianza, pues como lo señala un experto “la seguridad no se debe basar solamente en un índice de detenidos o en un índice de incautación de armas”.

En torno a retos concretos sobre esta categoría se encuentran los sistemas de vigilancia, los “hotspots” (zonas con mayores niveles de violencia) y las formas de accionar de la criminalidad dado que “han aprendido a manejar la ciudad y el área metropolitana por cuadrantes”. También está el tema de la extorsión pues “la renta ilegal del postconflicto va a ser la extorsión”. Esto supone que la política deba hacer grandes esfuerzos y no reducir el asunto de la seguridad al refuerzo de la fuerza pública.

“El mejor instrumento que yo conozco para manejar los asuntos de seguridad es la seguridad pública con una policía que se relacione bien con la comunidad y se construya confianza” (Experto internacional).

“La criminalidad en Medellín ha aprendido tanto que ellos manejan la ciudad y el área metropolitana por cuadrantes. Cuando a uno le roban ellos le preguntan a uno dónde fue, para que ellos identifiquen quien manda la zona y decirle que tiene que encontrar lo que le robaron. Frente a eso la institucionalidad policial no ha podido hacer nada” (Experto local).

“El asunto de seguridad es muy complejo. No es tener 1000 policías más. Hay un riesgo alto de que se dé la Facrimización, y esto tendría un efecto dominó en la ciudad” (Experto local).

Desafíos relacionados con políticas públicas de Justicia Transicional

Otro grupo de desafíos significativos son los concernientes a las políticas directamente asociadas a la Justicia Transicional como las políticas de desarme, desmovilización y reintegración, y de atención, asistencia y reparación a víctimas. A continuación se mostrarán los hallazgos frente a estos temas, provenientes de un bloque específico de preguntas explícitas sobre este tema y las preguntas generales.

Política de desarme, desmovilización y reintegración

En general, los expertos retomaron lo planteado en los escenarios, a propósito de que no parece que Medellín vaya a ser un gran receptor de población desmovilizada. Frente a esto se deben aprovechar los aprendizajes del programa de reinserción y reintegración sobre todo en términos de mecanismos de garantía de la reinserción. Precisamente en este programa se han “atendido casi 5.000 desmovilizados desde el 2004 hasta acá”, y esta capacidad se podría por ejemplo poner al servicio de las capacidades institucionales a los municipios. Como lo señala una opinión: “Una especie de Plan Reconstrucción de Antioquia con base en los territorios”, dado que es probable que los desmovilizados lleguen a las zonas rurales del departamento y a la ruralidad de la misma ciudad.

Un tema mencionado en las entrevistas se relaciona con que se debe solucionar el tema de la *participación política* de las FARC, pues este es un punto del acuerdo y si no se asume con preparación puede repercutir en la seguridad de los desmovilizados que quieran participar en política así como de la ciudad en general. También se habla de que esta participación debe ser también del lado de las comunidades y en todos los mecanismos para buscar la resolución pacífica de conflictos.

En términos de desafíos concretos, uno de ellos es el asociado a la reintegración social y económica, la posible reincidencia y nexos de los desmovilizados con organizaciones criminales, la estigmatización frente a esta población, la seguridad de los desmovilizados, la participación política de los mismos y la desvinculación de menores de edad.

Antes de explicarlos, los expertos coincidieron en que el gran desafío general es hacer que la desmovilización sea efectiva. Para esto y aunque se tengan muy significativas experiencias con los desmovilizados de las AUC, es necesario generar un nuevo modelo con rutas y acciones particulares para el perfil de desmovilizados provenientes de las FARC. Esto implica una

articulación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, basados en las necesidades del territorio.

Teniendo en cuenta lo anterior, el primero de los retos está relacionado con el tema de que persistan conductas delictivas en los desmovilizados. Según un experto “la reincidencia probable es del 25%”, y él estima que la reincidencia de las FARC sería así porque ellos cuidarían sus trabajos, a menos que estos no se generen efectivamente.

Otro punto es que las redes criminales han tenido vínculos con la guerrilla de las FARC, y es posible que estos lazos con la ilegalidad continúen en ciertas zonas y a partir de individuos que reincidan en estas actividades. Esto también implica que la violencia que ocurra no solo será política sino social, y esto afectaría a la ciudad por ejemplo en lugares que tengan características propicias para esto. Como lo dice un experto sería en “zonas urbanas deprimidas con alta incidencia de la pobreza y altos niveles de informalidad” y/o en zonas con “poca confianza de los ciudadanos que viven allí hacia la fuerza pública, a quien consideran una fuerza de ocupación”.

Un segundo reto, se relaciona con el desafío de desarrollar a cabalidad una reintegración económica con los nuevos y actuales desmovilizados. Frente a esto, se opina que si bien existen programas estos no son suficientes y debería pensarse el rediseño de los mismos en clave de las regiones que serán receptoras buscando generar oferta de trabajo como mecanismo de prevención. Incluso un experto expresa que debe promoverse la interacción con otros actores, inclusive víctimas: “Es posible que hagan proyectos colectivos empresariales entre las víctimas y los victimarios. No se debe pensar solamente en los desmovilizados”.

Frente a esto el reto también está en el acompañamiento y en los programas que se constituyan sobre todo en términos laborales. A partir de los grupos focales realizados con dos grupos de desmovilizados de las AUC precisamente se concluyó que los programas de formación y generación de ingresos son fundamentales para que la reinserción sea efectiva. En uno de los grupos focales se mencionó que “hay que humillarse por un trabajo”.

Los desafíos que los desmovilizados presentaron en estos grupos focales se orientan a distintos temas que van desde la sensibilización a los empresarios como a la mejora de las rutas de seguridad, y de atención psicosocial y apoyo económico. Adicionalmente, piden más rigurosidad en la entrega de beneficios pues, como dicen ellos mismos, “los que hacen fraude se les está comiendo el granito de arroz más sabroso a los que si son desmovilizados y víctimas”.

En términos de seguridad, los participantes creen que a pesar de una negociación exitosa, las FARC seguirán delinquiendo y adicionalmente no se ha negociado con otros grupos armados. Según una opinión de un participante “Uno ve que no van a cambiar, por lo que uno ve en las noticias”. En general, hay diferencias entre los desmovilizados que participaron en el grupo focal de las AUC frente a los desmovilizados de las FARC, pues mientras los desmovilizados de las FARC creen que las negociaciones se pueden llevar a una firma final del acuerdo los de las AUC creen que las conversaciones se romperán.

De igual forma, los participantes se mostraron divididos en relación a los desafíos que ellos mismos enfrentarán. Los desmovilizados de las FARC ven un escenario más optimista como se ve en la siguiente opinión: “Mis amigos que son bandidos, porque yo una vez lo fui, dicen que la paz que hay ahorita en Medellín es la paz que se está negociando en Cuba, y no es producto del pacto del fusil de Boquerón”. Por el contrario los de las AUC creen que van a tener riesgos dados los combos, bandas y el tema de la corrupción policial.

Un tercer reto percibido en las entrevistas, se asocia a todo lo que implicará la reintegración social y comunitaria. Si bien hay aprendizajes en el trabajo de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) y metodologías de apoyo en diferentes temas, los expertos dicen que esto implica un trabajo de acompañamiento permanente a los mismos desmovilizados pero también a las víctimas y las comunidades. Por ejemplo, “las víctimas suelen decir que por qué los desmovilizados tienen trabajo y ellos no. Estos imaginarios crean nuevos conflictos”. Por el lado de la comunidad también está el desafío de sensibilizarlos para que reciban a los desmovilizados. Como bien señala un experto “una cosa es desmovilizar, una cosa es dar apoyo psico-social, una cosa es formar y otra cosa es reinsertar en la sociedad, que la gente acepte que la gente fue de las AUC o de las FARC”. Otro actor que requiere de esta pedagogía es el empresariado que debe dejar de pensar que “es un enredo darle trabajos a ellos, porque no saben si van a trabajar o hacer algún tipo de inteligencia para una extorsión o un secuestro”.

Muy relacionado con este tema se encuentra el de la posible estigmatización de esta población. Es en este punto en donde yace el desafío más importancia en términos de convivencia, pues se debe transformar el imaginario que se tiene de ellos y promover acciones pedagógicas con las comunidades, que incluso muchas veces no se percatan de que las personas que están conviviendo con ellas pueden ser desmovilizadas. Es importante tener en cuenta los posibles riesgos que

representa en control criminal de marcada tradición contrainsurgente para la seguridad de las personas en proceso de reintegración y para los desmovilizados.

Además de los retos para la convivencia en la eventualidad que lleguen desmovilizados a la ciudad, se percibe otro desafío relacionado con su seguridad y la de los entornos a los que llegarán. Según un experto, “hay que revisar el tema de la reintegración y la reacción de la población en la ciudad pues ha habido asesinatos sobre casi 400 excombatientes de las FARC”.

Esto puede relacionarse también en el futuro con la participación en política de ciertos desmovilizados o estructuras, y eso implica también tener una institucionalidad preparada para que no ocurra lo mismo que le pasó a la Unión Patriótica. La opinión de un entrevistado sugiere que “en Medellín puede que no vuelva a pasar. Pero en el Urabá, Bajo Cauca es riesgoso”.

Finalmente, se mencionó como reto el asunto de los menores de edad desvinculados, pues la capacidad de atención a esta población está sobre todo en las ciudades a través del ICBF. Adicionalmente, muchos jóvenes pueden ver en la ciudad incentivos para trasladarse aquí por el sistema de educación, salud e incluso de recreación y de cultura. Como se mencionó en una entrevista “así los niños sean hijos de campesinos, no se adaptarán ya al campo. Debe abrirseles otra posibilidad y esa posibilidad está en las ciudades”. Para varios expertos en esta población yace el reto de la no reincidencia de gran parte de los desmovilizados de las FARC.

“Identificar los mecanismos para garantizar la reintegración de excombatientes. Sirve comprender los aprendizajes que dejó el proceso con las AUC, para pensar cuáles mecanismos funcionarán con las FARC” (Experto internacional).

“Medellín tiene dinero y no tiene problemas con la proveeduría de bienes y servicios para desmovilizados” (Experto local).

“De otro lado, es necesario en los territorios donde lleguen los desmovilizados tener una clara intervención. La paz va a ser territorial. No es lo mismo las zonas rurales y las zonas urbanas” (Experto local).

“Hoy en día las ofertas para desmovilizados son insuficientes. Hay que crear unos polos de postconflicto distintos a Medellín, como la subregión de Urabá” (Experto local).

“Para aumentar la capacidad de absorción se debe aumentar la capacidad social de las comunidades, invirtiendo en las estructuras existentes que existen en ellas. Otro factor muy importante para tener la presencia del Estado es atender las familias de los excombatientes: las esposas y los hijos” (Experto internacional).

Política de atención, asistencia y reparación a víctimas

Adicional al reto de los programas para la atención a los desmovilizados, otro elemento fundamental del postconflicto serán las estrategias orientadas a las víctimas del conflicto armado. El elemento común entre las opiniones de expertos es que se requiere una institucionalidad fuerte con énfasis en lo territorial que recoja los aprendizajes del tema de víctimas del conflicto armado en Colombia, pero a la vez rediseñe políticas en clave de ofertas eficaces.

Algunos señalan en algunos casos la necesidad de algo así como “una gerencia de postconflicto” pero otros hacen énfasis en la coordinación del SNARIV (Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas) a nivel nacional y territorial, puesto que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ha impuesto muchas acciones que aún están en proceso de implementación y que han tenido dificultades en el diseño institucional.

En cuanto a los retos puntuales que tendrá la política de reparación a víctimas, los expertos señalaron el logro de la reparación precisamente como el desafío más apremiante de este tema. También se mencionaron la verdad y reparación simbólica, el reconocimiento de las víctimas, asuntos de la política social, la institucionalidad y recursos, y la relación entre las víctimas y los desmovilizados.

Respecto a la categoría de reparación, esta se percibe como un desafío muy importante en reconocimiento a los daños que han sufrido las víctimas e involucra el tema de la reparación económica y proyectos productivos, como el acompañamiento psicosocial puesto que “hay que hacer un proceso psicosocial de elaboración de duelos; pero esos duelos deben nacer desde la actitud de las personas”. También en esta categoría se encuentra la necesidad de la reinserción comunitaria y la garantía de los mecanismos de participación. Dentro de esta categoría se deben reconocer que “las víctimas son un grupo muy heterogéneo” buscando que los programas involucren el “entorno familiar, territorial y social”. En este sentido, el reto es el fortalecimiento de una política sectorial, poblacional y territorial.

Un asunto puntual que emergió en el tema de reparación integral y como parte también de la garantía del derecho a la verdad es la preocupación porque se sepa la verdad de los hechos. Esto porque puede que luego de un acuerdo se demanden respuestas por parte de las víctimas y se empiecen a promover ejercicios como el de “La Escombrera”. Al respecto un experto opina: “Yo esperaré que en el informe de memoria histórica de Medellín se le hiciera más justicia a estas

víctimas de las FARC”, porque la mayoría de las víctimas de las FARC son las víctimas de secuestro. Hasta ahora esa modalidad de victimización no ha sido muy visibilizada aquí”.

Adicional a la reparación integral y acciones que contribuyan a la verdad, algunos expertos mencionaron al conjunto de la política social del Estado como un desafío para la atención a víctimas. Esto porque no solo se tienen que construir y fortalecer los bienes públicos de la ciudad sino porque una apuesta social mejorará también mucho “el tema de la equidad social” de víctimas y pobres históricos de la ciudad, que aunque no son víctimas también deben tener un acceso a derechos.

Unido a este tema de la oferta, un reto también mencionado en las entrevistas corresponde al fortalecimiento de la institucionalidad y la necesaria destinación de recursos para este tema. Aunque Medellín tiene amplia experiencia en el tema de atención a víctimas y cuenta con una unidad propia para este tema, en opiniones de los entrevistados, “no siempre alcanza el dinero, pero es que tenemos 600.000 víctimas en la ciudad”. Por esto resulta fundamental la articulación interinstitucional y el trabajo mancomunado de programas para que además no solo sea responsabilidad de la ciudad sino de los territorios del departamento y del nivel nacional.

Finalmente, el reto que fue mencionado por muchos de los entrevistados corresponde a la forma en que se tramitarán espacios y mecanismos para el encuentro entre víctimas y desmovilizados. Se mencionó por ejemplo el proyecto CEPAR de formación en el que estudian víctimas, desmovilizados, y otras poblaciones.

“La política de víctimas es una política sectorial y muy poco poblacional. Hay incapacidad para asumir el enfoque poblacional. Políticas sectoriales como vivienda no alcanza a asumir tal enfoque” (Experto local).

“La administración necesita una gerencia de postconflicto que recoja lo de víctimas, lo de Paz y Reconciliación. Pero una gerencia muy metida en el territorio, no una gerencia tipo Alpujarra. Hay que preparar procesos de reparación y de reintegración” (Experto local).

“La reparación la termina haciendo el Estado. Los procesos de reparación no se pueden convertir en procesos de re-victimización. Si el Estado da garantías las cosas funcionarían” (Experto local).

“El problema no le vería tanto por el lado de la reparación económica y política. El tema complicado es la verdad. Que empiece a haber una demanda muy clara de saber qué fue lo que pasó. Hay que ver lo que está ocurriendo ahora con La Escombrera” (Experto nacional).

“Un tema clave es la articulación interinstitucional y programas políticos que trabajen mano a mano, porque las desarticulaciones en muchos casos ha causado acciones con daños considerables, porque muchas víctimas ven como injusto lo que sucede con los desmovilizados” (Experto local).

No obstante, este es un componente difícil puesto que hay todavía resistencias para estos escenarios de encuentro dado además el nivel de destrucción del tejido social que dejó la guerra y la percepción negativa algunos desmovilizados frente a la llegada de nuevas personas al programa, pues se percibe que generarán rivalidad frente a los limitados recursos humanos y materiales existentes.

Transformación cultural y mensajes simbólicos

Uno de los hallazgos más innovadores de la sección de desafíos de las entrevistas, fue encontrar una categoría relacionada con aspectos simbólicos que trascienden la dimensión de provisión de ofertas y servicios materiales para encargarse del cómo deben ser entregados y apropiados por la ciudadanía.

En esta medida, ciertas opiniones aseguran que los retos fuertes y apremiantes serán de tipo político y simbólico, puesto que luego de una eventual firma del proceso de paz se pueden generar conflictos sociales que van a requerir esfuerzos que busquen promover mecanismos de transformación cultural, teniendo en cuenta que existe, según los expertos, “una naturalización de la violencia y la persistencia de la cultura de la ilegalidad”.

Este cambio deberá contener la pedagogía para la construcción de paz, la transformación de las subjetividades (por ejemplo las relacionadas con las masculinidades), la generación de capital social y el respeto de la diferencia. También se mencionaron aspectos que están en relación no solo con el individuo sino con la comunidad. Frente a esto, “la cohesión social debe buscar no sólo llevar servicios sociales u obras de infraestructura social a las zonas urbanas deprimidas sino involucrar a la comunidad en la gestión de esas obras para que desarrolle sentido de pertenencia por esas obras”.

Es por esto que la noción de participación cívica debe ser un pilar, puesto que existe un desafío en el involucramiento con lo público y en promover la democratización en diferentes ámbitos, puesto que “la violencia produce y se reproduce en el marco de interacciones propias de formas autoritarias de relación y de organización de la vida”.

“La cohesión social es el desafío principal. No se trata sólo de llevar servicios sociales u obras de infraestructura social a las zonas urbanas deprimidas sino involucrar a la comunidad en la gestión de esas obras para que desarrolle sentido de pertenencia” (Experto local).

“Yo diría que más que la pobreza objetiva, lo que alienta la rabia y la violencia son más bien los sentimientos de privación. Esos no se resuelven con las obras sociales sino creando un sentido de inclusión simbólico alrededor de cada obra o cada oferta de servicio” (Experto local).

“El reto no está en el nivel de la proveeduría de servicios sociales y de educación. Los retos principales son retos de tipo político, simbólico, porque este postconflicto va a ser una situación muy conflictiva en términos sociales y políticos. Habría que pensar en políticas de convivencia, de trámite de conflictos sociales” (Experto local).

“Debe haber una pedagogía democrática pues en la ciudad no hay una cultura política para la crítica y que tolere la diferencia. Por esto es clave la construcción de un sujeto para la paz” (Experto local).

Otros desafíos

Adicional a los retos identificados anteriormente, el análisis permitió observar, en menor medida, otros desafíos asociados a la participación de otro tipo de oferta sectorial del Estado y aspectos diversos.

De esta forma, se identificaron algunas líneas en torno a desafíos relacionados con acciones estructurales del Estado. Entre los aspectos a tener en cuenta están los retos para garantizar el Estado Social de Derecho y el acceso a derechos básicos como la salud, educación, justicia, etc. Frente a este último elemento, un experto señala que el “asunto de la impunidad es vital en términos institucionales para darle el mensaje a la sociedad de la reducción de las violencias. Si la gente confía en que ese Estado de Derecho es accesible a todos y es equitativo, el marco mejora para el pos-acuerdo”.

El desafío que se precisa en torno a este tema es que también los vacíos que tiene que copar el Estado no son solo en cuanto a seguridad sino a la provisión de los anteriores servicios y en tratar de reducir la desigualdad. Una opinión al respecto señala que “si la brecha entre ricos y pobres continúa es muy tenaz para la ciudad. Es la ciudad más inequitativa de América Latina”. Por otro lado, solo se produjo una mención sobre el tema de los desafíos del aparato judicial.

Los expertos también señalaron otros desafíos asociados a temas como la necesidad de tener *datos confiables* para el postconflicto. Realizar estimaciones sobre los escenarios del postconflicto parte

precisamente de saber cuántas personas van a desmovilizarse y cuántos en efecto lo harán, en suma a los esfuerzos que ya se han venido dando para el tema de víctimas y otras políticas.

“El Estado debe hacer presencia no solo desde la actividad policial, debe llevar además la fiscalía, las escuelas, la intervención en servicios de salud, servicios de justicia” (Experto nacional).

“Hay mucha desigualdad, por la falta de posibilidades y esto ha contribuido en parte a la criminalidad de la ciudad. En esta medida, el tema de la prevención va a ser muy clave” (Experto local).

“Estos servicios y programas, paradójicamente, pueden ser un boomerang para la ciudad, porque precisamente se vuelve un atractivo para que poblaciones de Antioquia, Córdoba y vecinos, pueden ver la posibilidad de que sus expectativas se satisfagan en la ciudad y puede que haya un recalentamiento económico” (Experto local).

“El asunto de seguridad es que realmente se cumpla con unas obligaciones que tiene el Estado a nivel constitucional con los pobladores de un país. Que garanticen los mínimos vitales, la salud, el empleo, la educación. Eso genera convivencia” (Experto local).

“Si las cosas se hacen de manera organizada y se tiene un censo claro de adultos, niñas, niños y adolescentes desvinculados y desmovilizados del conflicto puede desenvolverse bien el postconflicto. El censo permite hacer control sobre las personas que van a dejar las armas” (Experto local).

“Hay un problema estructural con la capacidad del aparato judicial” (Experto local).

Desafíos de Medellín frente a las subregiones del departamento

En este mismo bloque de retos se realizó la pregunta de la forma en qué las dinámicas subregionales y departamentales podían afectar la seguridad y convivencia. A lo largo de este documento ya se han expuesto elementos que relacionan a los ámbitos rural y urbano, y de Medellín frente al resto del departamento.

La mayoría de opiniones coincide en que la expansión de las economías criminales desde las áreas rurales y otras regiones de Antioquia a Medellín puede ser un gran riesgo para la seguridad. Como ya se ha mencionado anteriormente esto puede traducirse en una presencia de organizaciones como el Clan Úsuga y otros grupos, y puntualmente pueden presentarse fenómenos como el reclutamiento de desmovilizados de las FARC o incluso confrontaciones abiertas para “controlar barrios, rutas o negocios, además de las rentas lícitas”. Estas rentas no solo corresponden a cultivos ilícitos sino también a minería, como lo menciona un experto: “Oriente está lleno de BACRIM. Cerca de

Sonsón en límites con Puerto Triunfo hay lugares en los que las BACRIM están asentadas y están haciendo minería ilegal”. Esto puede agravarse por la presencia de sectores de las FARC que no quieran desmovilizarse y que se sumen a las estructuras criminales también presentes en zonas como Urabá, Nudo de Paramillo y Bajo Cauca.

Una paradoja es que si eventualmente se llegará a controlar el tema de cultivos ilícitos esto podría generar una migración masiva a la ciudad en búsqueda de oportunidades laborales. Aún si no se diera una intervención exitosa del Estado, ciertas opiniones coinciden en que de todas formas los campesinos vendrán a las ciudades. En este sentido, “el campo no los puede absorber porque los campesinos se están muriendo de hambre. Lo natural es que la gente se venga para las ciudades porque están las oportunidades, pero al mismo tiempo es donde se tienen las desigualdades más grandes”.

El flujo migratorio hacia la ciudad no solo se presentaría por temas económicos, sino por eventuales oleadas de desplazamiento forzado a raíz de las confrontaciones por los espacios de poder en las zonas rurales y según las opiniones esto debería trabajarse con las regiones y no solo asumiendo que Medellín es receptor y es quien tiene la responsabilidad de solucionar el problema. Otro problema es que esos desplazamientos luego podrían “reproducir los ciclos de narcotráfico que a su vez reproducen la violencia urbana”.

No obstante, la mayoría de expertos al hablar de dinámicas subregionales tienen la noción de que las desmovilizaciones se darán en las zonas rurales y allí se quedarán los antiguos miembros de las FARC. Frente a esto la ciudad, como se ha mencionado, no necesariamente va a ser impactada de manera directa sino por actividades criminales como redes de logística, acceso a rutas y presencias intermitentes. Por esto, resulta clave un diálogo permanente entre la Gobernación y la Alcaldía de Medellín.

“Si el proceso de paz en territorios como el Nordeste antioqueño, en el Urabá, en el Bajo Cauca y en el Norte no se acompaña de programas de erradicación de cultivos ilícitos o la terminación de la minería ilegal, el escenario va a ser demasiado difícil. Hay que cortar el circuito de la criminalidad” (Experto local).

“La desmovilización de las Farc va a ocurrir principalmente en zonas rurales y de frontera donde la guerrilla tiene presencia y control territorial. Allí es donde está la base de su reclutamiento y de su incidencia sobre la sociedad” (Experto local).

“Medellín es un lugar de aprovisionamiento logístico. Es un lugar donde los grupos tienen que tener un pie, un control, un acceso a rutas, etc. Ese impacto siempre va a ser inevitable” (Experto nacional).

“Las FARC están aliadas con algunas bandas criminales. Estas alianzas han producido desplazamientos y han afectado directamente a Medellín, porque es el lugar que acoge a los desplazados” (Experto local).

Reflexiones del evento de socialización frente a los retos

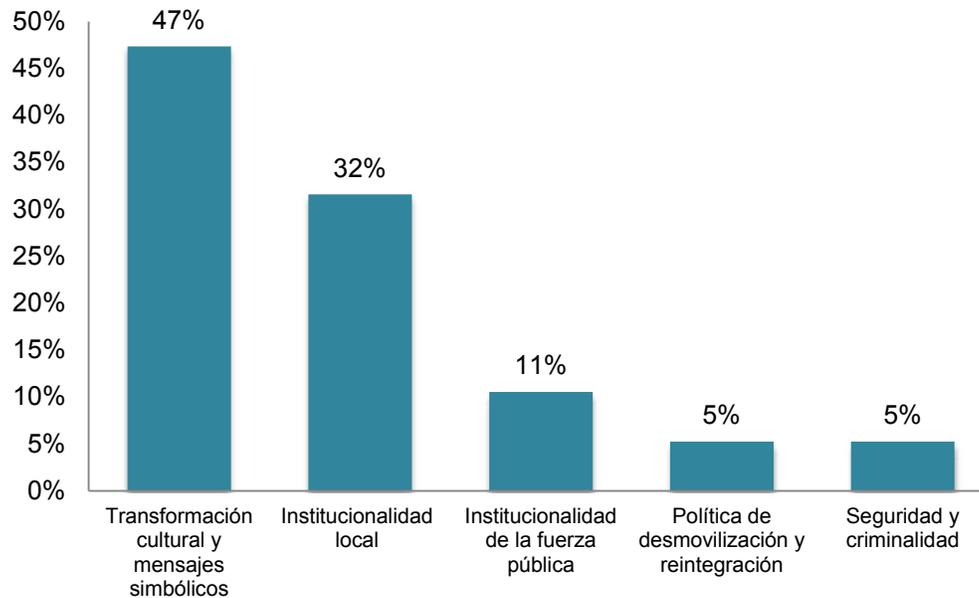
A partir de estos grandes retos identificados en las entrevistas a expertos, en el desarrollo del evento de socialización se llegaron a las siguientes conclusiones respecto a los principales desafíos que tendrá que enfrentar la ciudad luego de la firma de un acuerdo con las FARC:

- El reto de la seguridad y criminalidad, implicará la cualificación de la fuerza pública en un contexto de paz, para hacer frente a los desafíos que se darán en un eventual postconflicto.
- En contextos de postconflicto el mejor instrumento es el fortalecimiento de la seguridad pública.
- La “farcrimización” puede tener un efecto domino en la ciudad, poniendo a competir con otras estructuras criminales de la ciudad.
- El reto asociado a la política de atención a víctimas no es tan prioritario. Según los participantes, se viene haciendo una tarea adecuada en este sentido por lo cual no es tan urgente.
- Lo ilegal y lo legal se traslapan, aparece entonces el concepto de crimi-ilegalidad²⁶.
- En relación a las políticas para la atención a los desmovilizados, es necesario prestar atención a la reintegración social y económica de los desmovilizados como estrategia para reducir una posible reincidencia de esta población.
- En cuanto a la política de atención a víctimas los desafíos son en materia de articulación de los programas y temas presupuestales.

De igual forma, al preguntar por el reto que se debería priorizar dentro del plan de gobierno del próximo mandatario de la ciudad, el 47% de los asistentes señaló que la priorización debería ser sobre la transformación cultural y los mensajes simbólicos. Seguido a este se encuentra la institucionalidad local con un 32% e institucionalidad de la fuerza pública con 11%.

²⁶ El concepto hace referencia al reciente trabajo del profesor Mark Schultze-Kraft de la Universidad Icesi.

Gráfica 14. Reto a priorizar en evento de socialización



Fuente: Elaboración propia

Derivado de lo discutido en el evento y esta gráfica se puede observar que para los expertos es fundamental el reto de comunicar mensajes simbólicos y propiciar transformaciones culturales, así como asuntos relacionados con la seguridad. Si se agregan los retos relacionados con institucionalidad, y la seguridad y la criminalidad se obtiene que un 48% de respuestas están relacionadas con una categoría macro de institucionalidad y seguridad.

El análisis de las grandes conclusiones de este bloque respecto a la política de desmovilización permite ver una coincidencia con el agregado de las entrevistas en cuanto se percibe a la reintegración social y económica como un punto clave para la sostenibilidad de esta política. Frente al tema de víctimas, también es similar que no se mencionó mucho este punto como reto, y se atribuye este aspecto posiblemente a la buena gestión que la ciudad ha tenido en materia de atención, asistencia y reparación a víctimas.

Así mismo, en el evento se mencionaron los retos susceptibles de ser complementados. Entre las menciones más recurrentes se encuentra puntualizar que la oferta del Estado debe considerar los enfoques poblacionales y territoriales. Esto supone también la inclusión de la participación social y comunitaria, y al final se encuentra una relación con la dimensión de transformación cultural. Como

lo dice un experto durante el evento “la transformación cultural no es solo simbólica sino que implica que las personas entiendan que la construcción de paz empieza por nuestras acciones cotidianas”. Para los expertos, es clave entonces una articulación entre el Estado y la Sociedad.

Para los participantes este reto no solo concierne al Estado y a la comunidad, sino a los grandes poderes empresariales y económicos de la ciudad. Otro reto que se sugiere complementar se relaciona con que Medellín pueda ofrecer aprendizajes y capacidades a otros municipios del departamento.

Adicionalmente, durante el evento se indagó por los retos que faltarían ser mencionados en el listado proveniente de las entrevistas. Entre estos se encuentran cuatro desafíos generales relacionados con: “una justicia cercana al ciudadano”; “el fortalecimiento de las capacidades comunitarias y la participación ciudadana”; la “política educativa de solución de conflictos”; y “políticas de inclusión/equidad”.

RECOMENDACIONES

El tercer bloque temático incluye 4 preguntas en relación a las recomendaciones, temas de priorización y aprendizajes que se pueden identificar en experiencias internacionales y patrones locales, para hacer frente a los retos descritos en el bloque temático 2. Las preguntas aplicadas en el marco de las entrevistas fueron:

- ¿Cuáles serían sus recomendaciones para hacerle frente a esos retos?
- ¿Qué temas en materia de Seguridad y Convivencia cree que la Alcaldía de Medellín debería priorizar en los próximos cuatro años si se firma el acuerdo de Paz con las FARC?
- Opción para expertos: ¿Qué aprendizajes de otras experiencias de postconflicto en zonas urbanas debería tener en cuenta la ciudad para el desarrollo de sus políticas de seguridad y convivencia?
- Opción para actores institucionales y sociales: ¿Qué patrones derivados de procesos anteriores de transición de la violencia en Medellín debería tener en cuenta la ciudad para el desarrollo de sus políticas de seguridad y convivencia?

Cabe mencionar que a los expertos se les hicieron 3 de estas 4 preguntas puesto que la última dependía de si era experto académico o si era un representante de la institucionalidad u organizaciones sociales.

Recomendaciones para hacerle frente a los retos

Si bien los expertos hicieron recomendaciones a lo largo de todas las entrevistas, se indagó puntualmente sobre el tipo de sugerencias que podrían ser implementadas para hacer frente a los retos que impondrá la construcción de paz, en particular para el tema de seguridad y convivencia. A continuación se expondrán las ocho recomendaciones mencionadas:

a) Aprovechar las experiencias del pasado: Al analizar los textos transcritos a lo largo de las entrevistas es recurrente una sensación de optimismo frente a lo que ha sido la trayectoria de la ciudad en materia de programas y estrategias para escenarios de desmovilización y atención a víctimas. En este sentido, los expertos advierten que se parte de un cúmulo de experiencia que podría ser útil para enfrentar los efectos de un postconflicto con las Farc en Medellín.

b) Fortalecer las políticas de reintegración de desmovilizados y víctimas: Como ha sido reiterado en los anteriores acápite las políticas de reintegración de desmovilizados y víctimas deberían estar en el centro de la política. Sumado a las experiencias de la ciudad en esta materia, varios expertos propusieron que se den nuevos enfoques y se empleen nuevos instrumentos para estos temas, partiendo de un fortalecimiento también de las instituciones competentes. Lo anterior supone tener una visión más comprensiva del tipo de características de estas poblaciones (a partir de sus necesidades) y reflexionar sobre la focalización de los programas, buscando que sean más amplios en cobertura y tal vez repensados a modelos que incorporen de manera fuerte el elemento comunitario. También en el marco de esta categoría se recomienda “evitar la intermediación en los servicios que se ofrezcan a víctimas y desmovilizados”.

c) Realizar acciones a favor de la pedagogía para la paz: El escenario de post-acuerdo requerirá también estrategias para promover la humanización del oponente y generar un mensaje a favor de la Democracia. A raíz de esto también se requiere abordar la transformación cultural del lenguaje, la ética y los valores de la sociedad, en perspectiva de la no violencia y la paz, y ejercicios de comunicación con la ciudadanía amplios para que se sientan parte de estos procesos.

d) Consolidar la política de seguridad de la ciudad: Como eje central de las preguntas, el tema de la seguridad fue destacado entre las recomendaciones, pues se deben reflexionar sobre los pilares de

la actual política. En este sentido, la formulación conjunta de las estrategias de seguridad, según los expertos, no se debe dar a partir de un “esquema vertical y centralizado”, sino con las comunidades y todos aquellos actores sociales buscando además de la efectividad de las estrategias, la apropiación colectiva para que la paz sea un bien colectivo.

e) Fortalecer la justicia: Algunas pocas menciones hicieron referencia a la necesidad de mejorar el sistema de justicia y en la lucha contra la impunidad. También se proponen formas de justicia en otros niveles que ataquen el tema de los pequeños conflictos que se presentan en la cotidianidad de las comunidades.

f) Desarrollar programas de desarrollo local: Un grupo de recomendaciones se tejió en torno a lo importante de pensar en políticas no solo en clave de postconflicto sino en una visión más amplia de desarrollo, que ataquen también la falta de educación, la pobreza y la inequidad. Como se ha mencionado en apartados anteriores estas iniciativas deben estar ancladas al desarrollo regional.

g) Realizar acciones específicas a favor de los jóvenes: En distintos pasajes de las entrevistas se identificó la relación entre la violencia y la falta de oportunidades de los jóvenes. Es así como una recomendación se orienta precisamente a dar alternativas a los jóvenes buscando blindarlos del riesgo que corren en entornos urbanos vulnerables y que, de no ser acompañados adecuadamente, pueden convertirse eventualmente en parte de estructuras armadas.

h) Involucrar a las élites y el sector privado: Para los escenarios que se vengán, los expertos coinciden en que se requiere la concurrencia de distintos actores sociales. Dos de ellos muy importantes son las élites de la ciudad y el sector privado, concretamente el empresariado. Ambos son claves para desactivar mecanismos de violencia subyacentes (que ellos siguen profesando en ocasiones) y para construir formas de “generación de empleo” y “rehabilitación de las comunidades afectadas por la violencia a nivel urbano”.

“Aprovechar la gran experiencia existente en la ciudad y la infraestructura con mayor apoyo presupuestal nacional y local” (Experto local).

“Los ilegales han construido mejores instituciones que la legalidad. Tienen más capacidad operativa. Tenemos mucho formalismo institucional” (Experto local).

“Necesidad de que todos los actores comprendan la necesidad de un consenso acerca de la necesidad de postconflicto. Pedagogía de la humanización del oponente” (Experto local).

“Formas de justicia local para los pequeños conflictos y transgresiones” (Experto local).

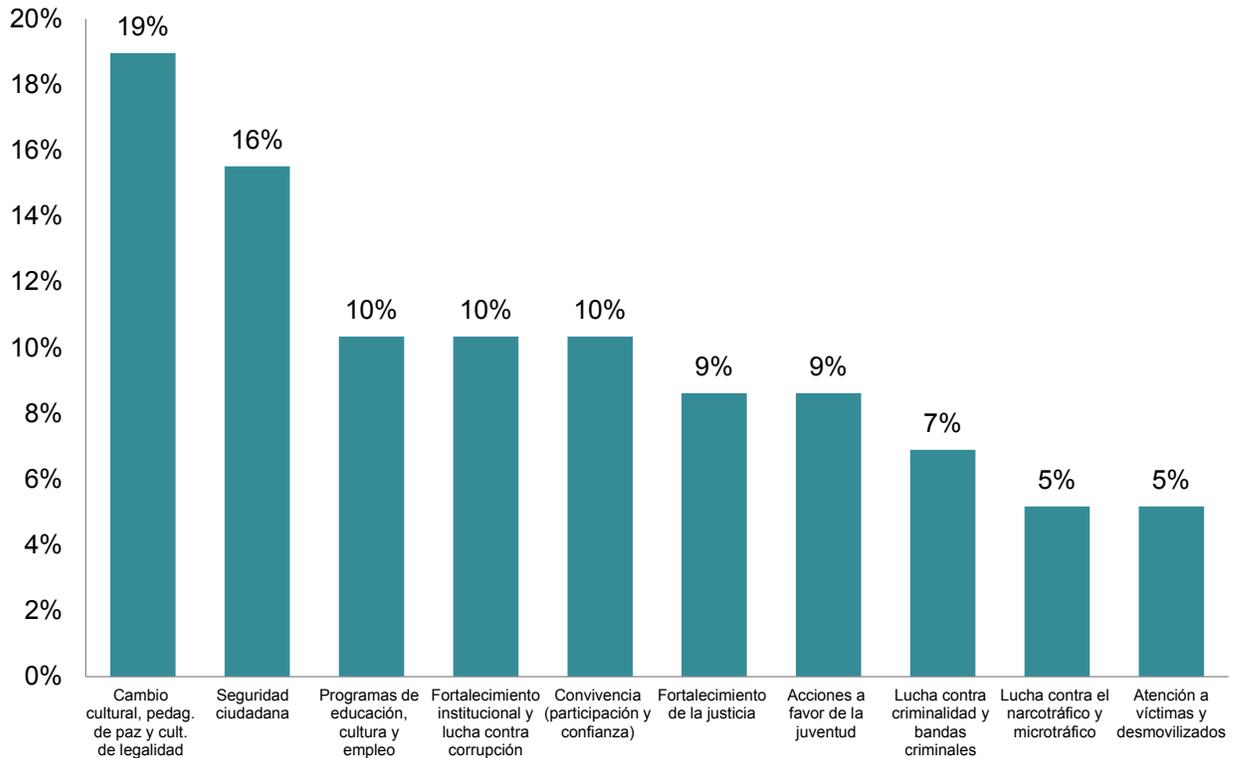
“Programas de desarrollo regional para reducir la inequidad pueden arreglar mucho la situación que puede generar violencia” (Experto local).

“Ese grupo de jóvenes seguirá siendo el combustible del conflicto armado urbano, y en eso hay que seguir trabajando” (Experto local).

“Involucrar a las élites de la ciudad, ya que en muchos casos son ellas las que promueven y replican la incitación a la violencia. Se debe vincular al sector privado” (Experto local).

De igual forma, una de las preguntas realizadas en las entrevistas indagó por los temas que deberían ser priorizados en materia de seguridad y convivencia. Aunque muchas de las opiniones de los entrevistados aluden a asuntos más generales, la mayoría coincide en que son prioritarios los temas de cambio cultural, pedagogía de paz y cultura de la legalidad (19%), seguido por seguridad ciudadana (16%), los programas de educación, cultura y empleo (10%), el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción (10%) y la convivencia que incluye aquí también confianza y participación (10%). El siguiente es el gráfico resultante del análisis estadístico textual:

Gráfica 15. Frecuencias de la pregunta sobre temas a ser priorizados



Fuente: Elaboración propia

Aprendizajes de experiencias internacionales y nacionales

Adicional a las recomendaciones descritas anteriormente, los expertos comentaron también sobre aprendizajes de otros países y patrones locales que contribuyen a la comprensión de lo que podrían implicar los escenarios post-acuerdo.

En esta medida, los académicos y algunos representantes de organizaciones entrevistados dieron sus percepciones sobre las lecciones en otras zonas urbanas de diferentes lugares del mundo que hayan enfrentado procesos de postconflicto. Algunos de los expertos señalaron que aunque se pueden extraer aprendizajes, “la literatura sobre postconflicto no es muy buena y hay mucho por aprender”. Esto se suma al hecho que Colombia tiene muchas particularidades que hace que no sean tantas las fuentes de información comparables, y adicionalmente que el tema de la construcción de paz en ambientes urbanos no es tan común en los estudios a nivel internacional. Con esta claridad, las opiniones giraron en torno a dos grandes componentes: uno que hacía referencia a las experiencias en torno a la criminalidad y temas de seguridad, y otro sobre otros asuntos de la vida social y civil que deben ser considerados.

Sobre el primer asunto, relacionado con la criminalidad la experiencia que se referenció en mayor medida fue la centroamericana. Al respecto se precisó que la experiencia de esta parte del continente, es un buen ejemplo de casos no exitosos de lucha contra la criminalidad que ilustran los riesgos que existen luego de firmada la paz. Así las cosas, se explica que luego de este momento histórico proliferaron manifestaciones de violencia y criminalidad, que han convertido a Centroamérica en la región con más homicidios del mundo. Esto supondrá que el Estado desarrolle una capacidad para neutralizar a las organizaciones criminales que siguen generando rentas ilegales. Ejemplo de esto, según un experto, son también Sarajevo en Bosnia Herzegovina y Kabul en Irak; en estos casos, “los actores de esas economías ilegales tienen poder político en el postconflicto”. En San Salvador y Belfast también emergieron bandas criminales.

Otro aprendizaje del caso de Yugoslavia es que emergieron otras formas de rentas ilegales como “la trata de personas, con circulación y tráfico de armas, tráfico de drogas, entre otros”. Hay otros ejemplos como Italia, en donde existe dinamismo en las lógicas de la criminalidad, “incluso comparables con los países latinos o con Colombia-Medellín”.

Un aspecto clave además de las grandes estructuras ilegales, son las pandillas de menor escala que por ejemplo en El Salvador proliferaron luego del acuerdo. En este caso, también se debe considerar que jóvenes que se fueron a Estados Unidos, se empezaron a organizar en torno a estas pandillas y en el momento de ser deportados de nuevo a sus países trajeron ese modelo de maras y criminalidad.

En términos de la política de seguridad, además del asunto de la criminalidad algunos expertos mencionaron también lo importante de definir un enfoque de política que sea adecuado. En este sentido, se enfatizó en que no se puede caer en una perspectiva punitiva de la seguridad, como sucedió en Nicaragua. Como se mencionó en una entrevista: “la transición que hizo Nicaragua, a diferencia de El Salvador, no fue hacia una situación de paz-violenta sino a una situación de paz-represiva, puesto que es un régimen muy autoritario. Pero en las políticas de seguridad ha sido menos autoritario que sus vecinos”. En El Salvador por su parte, existieron otros problemas como la “disolución de la Policía y el Ejército como parte de la política de garantía de no repetición”, lo cual conlleva al incremento de la criminalidad.

Sobre el tema de desmovilización, ciertos expertos argumentan que se han hecho análisis de distintas intervenciones pero no hay una receta clara: “Algunos muestran que lo mejor es darles plata, otros que lo mejor es darles entrenamiento para empleo o educación, otros sugieren que la

participación política hay que apoyarla. Aunque hay otros estudios que muestran lo contrario”. En esto va a ser clave, según los expertos, la creatividad e innovación sumada a las experiencias ya vividas, puesto que por ejemplo en el caso de Sudáfrica la reintegración ha sido un reto.

Por su parte, otro grupo de opiniones centra los aprendizajes en temas estructurales más allá de la seguridad y que involucran a actores distintos del Estado y la sociedad civil. Por ejemplo, se hicieron menciones a que deben atacarse las causas que ocasionaron el conflicto, y que apuntan a problemas estructurales de la sociedad colombiana. En el caso de Centroamérica, un experto señaló que “se quedaron mucho en los temas de participación política, la reintegración y eso. Pero se olvidaron de acordar políticas orientadas a atacar las causas del conflicto”. Para el caso de Sudáfrica esa omisión, desencadenó ya no un “apartheid político” sino un “apartheid social y económico” dados los altos niveles de inequidad. Este aprendizaje radica en entender esos factores económicos y sociales, y comprender además que pueden activar mecanismos de violencia.

Una enseñanza adicional yace en el caso de Alemania en el cual se tiene una pedagogía sobre lo que ocurrió en perspectiva de brindar a las nuevas generaciones un panorama de lo que ha sido el conflicto en la ciudad. La labor pedagógica empieza desde ahora, pues por ejemplo, en Guatemala los acuerdos no fueron refrendados con la ciudadanía y eso “creó una fisura entre la ciudad y el campo, pues a las ciudades las blindaron de la información que viniera del campo. De hecho se sabía más de la guerra guatemalteca en el extranjero que en ciudad de Guatemala”.

Así mismo, el caso chileno ilustra lo importante de evitar una polarización pues aunque en ese país las personas se declaren “pinochetistas” o “allendistas” pueden tolerarse en medio de sus diferencias, y no emplear la violencia para solucionarlas.

Dentro de estos aprendizajes se encuentra también uno relacionado con la Iglesia y el papel que ha tenido en el marco de la negociación y la intermediación con organizaciones criminales y Estado, pues esta organización puede ser clave para el trámite de los conflictos. Como dijo un experto “En Centroamérica se ha trabajado muchísimo con la iglesia en la transformación de las lógicas de la guerra”. Así mismo también son fundamentales los apoyos de la cooperación, como en el caso de Bélize en donde el PNUD realizó un proyecto con hombres sobre masculinidades muy exitoso.

“La experiencia de Centroamérica muestra que después de firmada la paz el riesgo de erupciones de la violencia y criminalidad es demasiado alto por la disponibilidad de armas, destrucción de lazos sociales, experiencia en organizaciones criminales, el legado de corrupción, etc.” (Experto local).

“Respecto de El Salvador muchos jóvenes se fueron huyendo de la guerra para Estados Unidos y se convirtieron en Los Ángeles en pandillas y Maras. Luego fueron deportados y empezó una nueva generación de violencia. Una pregunta para Antioquia, es cómo interrumpir estos ciclos intergeneracionales de violencia” (Experto internacional).

“Guiar las políticas de seguridad planteando la mano dura es el peor negocio y Guatemala, Salvador y Honduras arrojan esa lección con claridad. Políticas de tolerancia 0 en el postconflicto son una receta para el desastre” (Experto local).

“Comprender que el problema más grande no va a ser la desmovilización, hay que tener en cuenta el caso de México como un referente de lo que puede ocurrir en Colombia si la capacidad del Estado no mejora” (Experto internacional).

“El otro caso sería Alemania. Tienen una pedagogía sobre qué fue lo que pasó.

Tenemos que cambiar la realidad desde los niños. Hay que decir que es lo que está pasando y lo que ha pasado. No se puede esconder la realidad” (Experto local).

Adicional a los aprendizajes señalados por los académicos, se les preguntó a los expertos provenientes de la institucionalidad o de sectores sociales, de cooperación o de gestión, por cuáles pueden ser los patrones derivados de procesos anteriores de transición que puedan llegar a ser valiosas experiencias o conocimientos para la ciudad en un eventual escenario de firma de la paz.

Algunas de las intervenciones de este tipo de expertos versaron sobre procesos de paz anteriores con grupos armados de la década de los noventa. Al respecto se afirma por parte de un entrevistado que el proceso “relativamente más exitoso que se pueda conocer fue el del MIR-COAR”. De este se destaca el desarme efectivo y la inserción de la población en posibilidades productivas. Por el contrario el proceso del “COCERCOM” fracasó en términos del mismo experto, pues se “creó una cooperativa con sus miembros que ejerciera labores de seguridad y eso no fue exitoso”.

Sobre el EPL aunque muchos se desmovilizaron, el “grupo de Caraballo” por ejemplo no lo hizo y se evidenciaron divisiones internas. Se afirma que algunos terminaron cooptados por AUC y narcotraficantes. Otro aprendizaje resultó de la desmovilización de las Milicias Populares en donde se “les terminó pagando a gente que ni siquiera eran de esas organizaciones”. Otra opinión es que

derivado de todos los procesos de desmovilización anteriores un patrón es la llegada de desmovilizados a la ciudad, por lo cual con las FARC puede que ocurra lo mismo.

Ahora bien, los expertos afirman que además de considerarse aprendizajes de procesos anteriores deben tenerse en cuenta las realidades actuales, por ejemplo de los desmovilizados individuales de las FARC que ya están en la ciudad, y sus correspondientes características, de modo tal que se busque un blindaje contra un eventual reclutamiento o reincidencia para obtener rentas criminales. Un patrón al que se debe prestar atención se relaciona con el mantenimiento de estructuras criminales como los Triana y la Terraza, que llevan según un experto, “25 años sobreviviendo, y el Estado no ha podido desmantelarlos”.

Finalmente, hubo referencias sobre intervenciones que deben potenciarse pues han dejado grandes lecciones para ciudad. Algunas de las mencionadas son la de cuadrantes y puntos calientes; la relación entre sectores empresariales y la Alcaldía (como los vínculos con Proantioquia); el acompañamiento de la Iglesia y puntualmente de la Pastoral Social para ciertos temas; la formación de opinión de algunas organizaciones como Corporación Región; la “Consejería para Medellín y el Área Metropolitana” y programas como “Buen Comienzo”, “Medellín Solidaria”, etc. Varias opiniones coinciden en que deben darse esfuerzos por sistematizar estas y otras experiencias en perspectiva de hacer un balance, y adicionalmente deben compartirse los aprendizajes con la población y otros territorios del departamento.

“El proceso relativamente más exitoso que se pueda conocer fue el del MIR-COAR. Fue exitoso en que efectivamente se desmovilizaron, dejaron las armas y se insertaron en proyectos productivos” (Experto local).

“Los procesos de desmovilización anteriores han demostrado que gran parte de los combatientes que dejan las armas vienen a las ciudades. Eso lo demostró los procesos de los 90, los de las AUC y seguramente con las FARC no será la excepción” (Experto local).

“Yo siento que el tema de cuadrantes y el tema de la Universidad de los Andes, el de los puntos calientes, hay que seguirlo trabajando. Esta política, sostenida en el tiempo, es exitosa y brinda información valiosa para seguir trabajando” (Experto local).

“Lo más exitoso giró alrededor de la consejería para Medellín y el Área Metropolitana, y fue básicamente la posibilidad de generar escenarios de diálogo, de reflexión colectiva, de construcción de sentido y visión de ciudad. Esa es muy buena práctica” (Experto nacional).

Reflexiones del evento de socialización frente a las recomendaciones

Adicional a mostrar las recomendaciones identificadas en las entrevistas a expertos, durante el evento se discutieron sobre estas sugerencias y otras que pudieran surgir del diálogo. Las principales recomendaciones que se emitieron por parte del grupo fueron las siguientes:

- Aprender de las experiencias del pasado para saber qué es lo que la ciudad puede, necesita reactivar o seguir haciendo en temas de seguridad y convivencia.
- Resolver el dilema de seguridad y consolidar la política de seguridad de la ciudad.
- Desarrollar pedagogías para la paz y la humanización del oponente.
- Fortalecer la justicia.
- Desarrollar programas de desarrollo local de los territorios y para los territorios.
- Programas de desarrollo regional para reducir la inequidad por medio de la generación de oportunidades.
- Realizar acciones a favor de los jóvenes.
- Estas estrategias deben ser mixtas en donde intervenga el Estado, cooperación internacional y la sociedad civil.

En general, se identifica que los expertos convocados a la sesión de socialización coinciden con los expertos entrevistados en la necesidad de aprender de estas experiencias del pasado, hacer énfasis en la definición de la política de seguridad, realizar acciones y programas integrales a favor de los jóvenes, generar estrategias de desarrollo local y promover una pedagogía de la paz. En este sentido, un experto comentó que “la pedagogía es uno de los grandes retos a tratar, en el cual ya se pueden ver algunos aprendizajes de victimarios hablando con las víctimas y trabajando conjuntamente en pro de la construcción de paz”.

El desarrollo de este bloque temático también generó el espacio para que los participantes señalaran que recomendación podría ser incluida o aclarada. En general, los comentarios apuntaron al fortalecimiento de las capacidades comunitarias y la promoción de la participación ciudadana, en clave de inclusión de toda la sociedad.

Así mismo, se hicieron precisiones para la definición de la política de seguridad y convivencia, enfatizando que deben incluirse con claridad elementos de convivencia y otros enfocados con la transformación social para la construcción de paz, como se definieron en la política pública

recientemente aprobada. En relación con este elemento, se encuentra el fortalecimiento de la justicia.

En términos pedagógicos y de divulgación se recomienda generar estrategias de comunicación pública para la comprensión del conflicto, de los acuerdos en sí mismos y para propiciar el involucramiento de otros actores. Unido a esta sugerencia se encuentra la formación en DDHH.

Finalmente, se recomendaron políticas integrales para la protección de niños, niñas y adolescentes (NNA) y otros segmentos vulnerables como las madres cabeza de hogar.

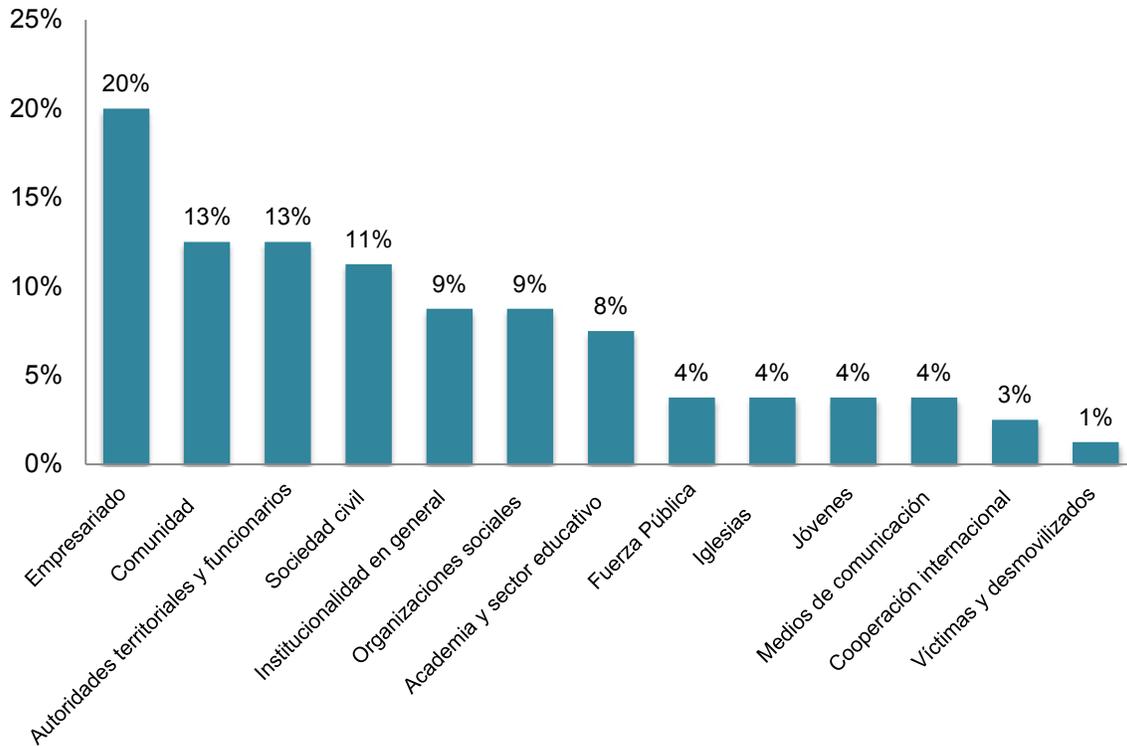
ACTORES INVOLUCRADOS

El último bloque temático de la metodología general del proyecto definió la necesidad de conocer las opiniones de los entrevistados en torno a los actores involucrados en un eventual proceso post-acuerdo. En este sentido, las entrevistas contemplaron las siguientes 2 preguntas:

- ¿Cuáles son los actores clave para la construcción de paz tras la firma de un acuerdo de paz con las FARC? ¿Por qué son importantes?
- Teniendo en cuenta eso, ¿cuál cree entonces que es el rol que desempeñará su organización en políticas de seguridad y convivencia tras una eventual firma del acuerdo de paz con las FARC?

En términos generales las respuestas a la primera pregunta, indican que los entrevistados consideran que son múltiples los actores llamados a participar en los escenarios que surjan tras la firma del acuerdo de paz. El siguiente gráfico muestra las tendencias resultantes del análisis estadístico textual:

Gráfica 16. Frecuencias de la pregunta sobre actores involucrados en un escenario postconflicto



Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, se identificaron 13 categorías de respuesta que, aunque podrían recategorizarse en más pocas, se dejaron sin agrupar con el fin de preservar de manera fidedigna las percepciones de los entrevistados y mostrar de manera más clara las diferencias entre las opiniones. Los expertos identificaron al “empresariado” como un actor clave en el escenario postconflicto, y fue evidente a lo largo del análisis textual que casi la totalidad de los expertos al menos lo mencionó en una oportunidad. A este sector le siguen la “comunidad” y “autoridades territoriales y funcionarios”, cada una con el 13% de las respuestas totales. Si se agregan las opciones correspondientes a “comunidad”, “empresariado”, “sociedad civil” y “organizaciones sociales” se obtiene el 53% y por tanto se reconoce el importante papel que jugarán este tipo de actores sociales en escenarios de post-acuerdo.

Se destaca que nuevamente los jóvenes fueron mencionados varias veces por los expertos y se configuran como reto pero también como un actor clave. Las víctimas y desmovilizados solo recibieron una mención en esta pregunta.

Finalmente, sobre la pregunta del rol que desempeñará la organización de los entrevistados, no se pudo llevar a cabo el análisis puesto que solo tres expertos respondieron el interrogante.

Reflexiones del evento de socialización frente a los actores clave

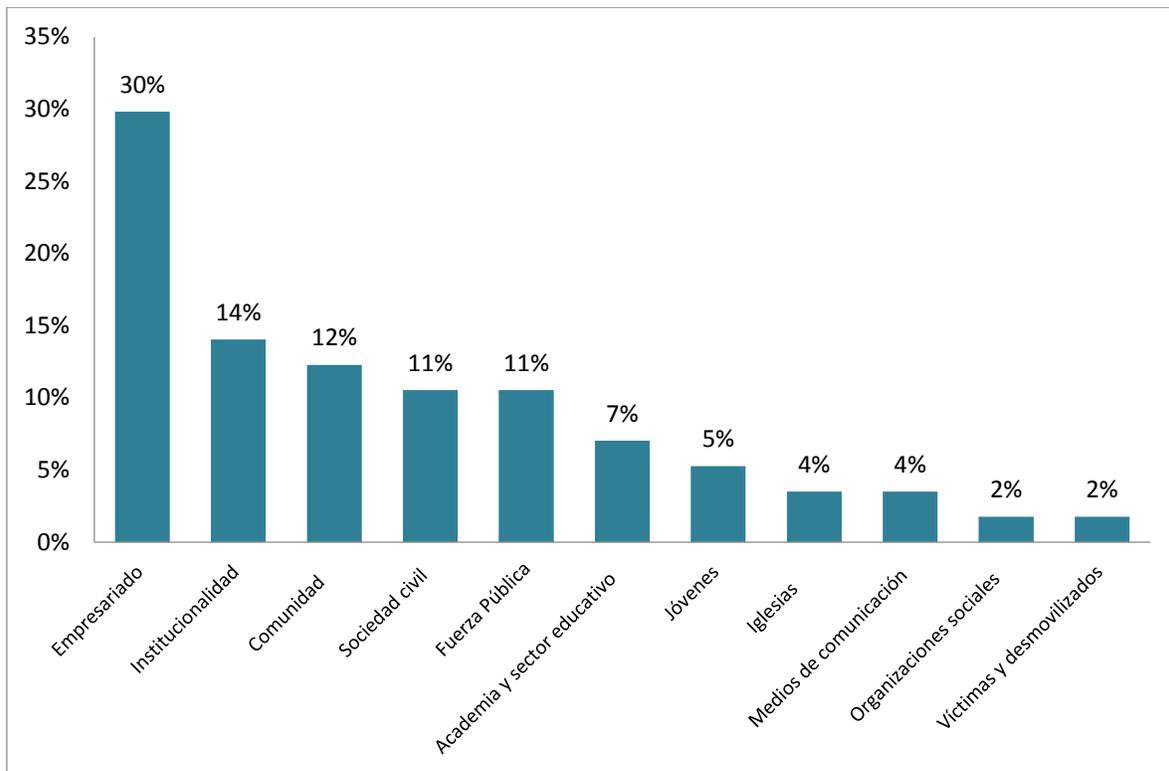
Con base en los actores clave identificados, en el evento de socialización los expertos también identificaron que los actores no institucionales serán fundamentales en el postconflicto. Durante este bloque se pidió a los participantes que enumeraran en orden de importancia los 3 actores que consideran más importantes luego de un acuerdo de paz con las FARC, y como se observa en la tabla y gráfica siguientes, el empresariado ocupa un lugar significativo en la percepción de importancia en un escenario post-acuerdo. A este le siguen la institucionalidad, la comunidad, la sociedad civil y la Fuerza Pública.

Tabla 1. Orden de importancia de actores en el evento de socialización

	Primer lugar	Segundo lugar	Tercer lugar
Empresariado	21%	42%	26%
Comunidad	16%	16%	5%
Sociedad civil	11%	11%	11%
Institucionalidad	32%	0%	11%
Organizaciones sociales	0%	5%	0%
Academia y sector educativo	5%	11%	5%
Fuerza Pública	0%	5%	26%
Iglesias	0%	0%	11%
Jóvenes	5%	5%	5%
Medios de comunicación	11%	0%	0%
Víctimas y desmovilizados	0%	5%	0%

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 17. Actores percibidos como más importantes en el evento de socialización



Fuente: Elaboración propia

TENDENCIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

De acuerdo al diseño metodológico, un instrumento complementario consistió en la realización de un análisis de prensa con el fin de hacer un rastreo general de tendencias de opinión sobre el tema del acuerdo de paz y escenarios postconflicto, en los principales medios de comunicación escritos a nivel nacional y local, además de tres medios de relevancia internacional.

Como se mencionó al inicio de este informe, el periodo que comprendió la búsqueda de información fue entre el 1 de Enero de 2012²⁷ y el 30 de Julio de 2015. La fecha inicial corresponde al año en el que iniciaron los diálogos de paz entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la fecha de corte coincide con el inicio del presente proyecto.

²⁷ A pesar de que las conversaciones empezaron oficialmente en Octubre de 2012, el análisis se lleva a cabo desde el mes de Enero, debido a que desde este mes hay registro de material de prensa.

Las categorías de búsqueda empleadas para realizar este rastreo fueron: postconflicto, escenarios de postconflicto, conflicto armado en Antioquia, Medellín, acuerdos de paz, fuerza pública, seguridad ciudadana, construcción de paz y delincuencia asociada a las FARC.

Metodológicamente, el procedimiento realizado para lograr lo anterior fue el siguiente: i) Establecer un periodo determinado de tiempo, que fue el anteriormente señalado; ii) Definir categorías de búsqueda con respecto al tema de postconflicto y asuntos relacionados que puedan afectar el departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín con una eventual firma de un acuerdo entre las FARC y el gobierno colombiano; iii) Sistematizar el material de prensa; iv) Analizar los resultados.

Se identificaron en total 142 referencias bibliográficas, de las cuales el 18% fueron encontradas en Semana (portal web); 17% en El Tiempo; 15% en El Espectador; 14% El Mundo; 8% en Las Dos Orillas; 6% en El Colombiano; 6% en Razón Pública; 6% The Guardian; 5% en El País (España); 4% en La Silla Vacía y 2% en The Economist. El 50% del material de prensa encontrado corresponde a tres medios de relevancia nacional (El Tiempo, El Espectador y la Revista Semana); por el contrario, los tres medios con menor porcentaje de reporte de este tipo de noticias son The Economist, El País y La Silla Vacía. Con relación a la temporalidad de las referencias se evidencia que el 42% están publicadas en el 2015, el 27% en el 2014, el 26% en el 2013 y el 4% en el 2012.

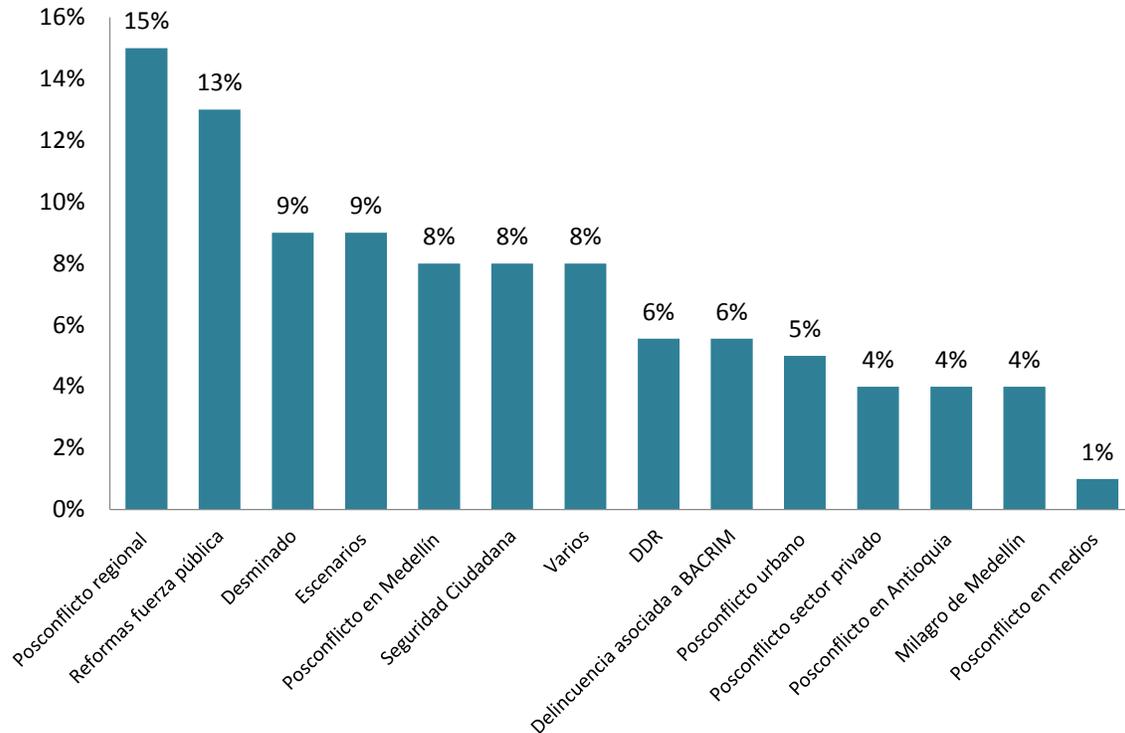
La variación entre el porcentaje del 2015 (42%) y el 2014 (27%) podría explicarse por la creación de un Ministerio del Postconflicto que es anunciado por el presidente Juan Manuel Santos en Agosto de 2014 lo cual pone en la agenda mediática el tema de postconflicto tan solo hacia el segundo semestre del año; por el contrario el 2015 se perfiló como el año en el que el proceso de paz, según el Gobierno Nacional, está en su fase final y por consiguiente esto puede explicar el auge de registro mediático. Por último, se puede decir que la poca producción de prensa en el 2012 se debe principalmente a que en este periodo, específicamente en octubre, se da el inicio oficial de las conversaciones de paz entre FARC y Gobierno, y los temas de los medios giraron en torno a la instalación y discusión de la agenda pactada entre las partes (La Silla Vacía, 2015).

En cuanto a los géneros periodísticos²⁸ que componen la muestra, se identificaron un 61% de artículos de opinión, 28% de noticias, 7% de entrevistas, 2% de editoriales, 1% de infografía y 1% de informe.

²⁸ La selección de las categorías se construyó con base en el análisis de prensa de Jorge Iván Bonilla para el Proyecto Antonio Nariño (*Vid.* Proyecto Antonio Nariño, 2004.)

Para la clasificación del material encontrado se crearon 14 categorías de análisis²⁹, de las cuales el 46% corresponden a Postconflicto Regional, Reformas de la Fuerza Pública, Escenarios y Desminado, mientras que las que obtuvieron menos menciones fueron Postconflicto (1%), Milagro de Medellín (3%) y Postconflicto Sector Privado (4%).

Gráfica 18. Categorías de análisis revisión de prensa



Fuente: Centro de Análisis Político (CAP), 2015

Las cuatro categorías que dan cuenta de los temas que han guiado la agenda mediática priorizada por los principales medios de comunicación nacionales son, en primer lugar, “Postconflicto Regional” con un 15%. Esta categoría se refiere a los procesos de construcción de paz que se deben llevar a cabo desde las regiones, además del impacto que puede tener el postconflicto en ciertos departamentos. Una de las opiniones de la prensa que representa esta categoría es la siguiente: “El postconflicto debe aterrizar en los 281 municipios en los que en los últimos 30 años, las FARC y el ELN han tenido presencia permanente. Aunque son uno de cada cinco del país, son pocos poblados: en ellos vive apenas 12 por ciento de los colombianos” (León, 2015).

²⁹ Ver anexo 4: Definición Categorías de Análisis.

En segundo lugar, se encuentra la categoría de “Reformas a la Fuerza Pública” con una participación del 13%, la cual pone énfasis en las posibles transformaciones y nuevos roles del Ejército y la Policía. Como se menciona en prensa: “Se hace necesaria una fuerza de policía polifacética, dotada de una capacidad de adaptación que le permita ajustarse con facilidad a un escenario de violencia dinámico permanente” (Manrique, 2013).

En tercer lugar aparece “Desminado” con un 9% del total del material encontrado, la cual recoge los desafíos que tiene el país para remover las minas anti personales del territorio nacional, aclarando que el desminado es una tarea compleja, costosa y lenta. En este sentido, en prensa se menciona que “una de las mayores dificultades es que las FARC no tienen información exacta sobre dónde han sembrado las minas a lo largo de las décadas. Sin embargo, en casos como el de San Miguel, tienen la memoria fresca. Como las sembraron hace apenas tres meses, puede ser un buen lugar para arrancar” (Bermúdez, 2015).

En cuarto lugar, con un porcentaje de 9%, se encuentra la categoría “Escenarios”, que hace referencia a los retos y posibles situaciones que se deriven de la eventual firma de un acuerdo de paz entre FARC y Gobierno Nacional. La mayoría del material de prensa encontrado no pone énfasis en los cambios y las consecuencias que tendría un postconflicto en las ciudades, por el contrario se destaca que los principales problemas se centrarán en el campo pues el conflicto se ha vivido más directa e intensamente en zonas rurales. Dado lo anterior los medios y sus columnistas destacan que las ciudades principales tendrán la tarea de atender procesos de DDR, recibir los niños y adolescentes reclutados forzosamente y reintegrarlos a la sociedad ofreciéndoles educación y oportunidades.

SÍNTESIS DE LOS HALLAZGOS

El análisis de las entrevistas, grupos focales, análisis de prensa y evento de socialización realizados, permite establecer hallazgos en relación a lo que depararán los eventuales escenarios tras el acuerdo de paz con las FARC. La información resultante de este análisis parte de unos aprendizajes que tiene la ciudad en el marco de procesos de desmovilización de combatientes y atención a víctimas, que constituyen un punto de referencia y de fortaleza para futuros procesos.

En general, los escenarios identificados dan cuenta de dos situaciones generales en donde por un lado no hay efectos significativos sobre Medellín y por el otro, puede que si existan impactos en la ciudad. Como se pudo observar en la sección de escenarios, estos impactos dependen de las

estrategias que desarrollen los actores implicados como las FARC, el crimen organizado, el Estado y otros actores. Puntualmente, frente a las FARC se contemplan dos escenarios sobre eventuales desmovilizaciones que lleguen a la ciudad o en cambio, desmovilizaciones que se circunscriban en el ámbito rural con un impacto indirecto en zonas específicas del Municipio controlables a través de los programas de desmovilización.

Con esta información se puede concluir que fueron muchas las advertencias de los expertos sobre posibles escenarios relacionados con el aumento de la criminalidad organizada en la ciudad tras los vacíos de poder que puedan llegar a dejar las estructuras de las FARC. No resulta entonces ser tan probable el escenario donde los desmovilizados llegan de manera masiva a la ciudad aunque si se estima que podrían llegar a mediano y largo plazo en busca de oportunidades laborales o desplazados por la violencia de la zona rural.

En este sentido, las opiniones de las entrevistas y del evento de socialización coinciden en que el escenario más probable es que las BACRIM pueden fortalecerse en un escenario post-acuerdo, y también se puede aumentar la criminalidad asociada al narcotráfico y la minería legal. La mayoría de argumentos coincide en que la expansión de las economías criminales desde las áreas rurales y otras regiones de Antioquia a Medellín puede ser un gran riesgo para la seguridad. También es interesante, como en el escenario de diálogo entre expertos se hizo énfasis en el importante rol que jugarán otros actores sociales en el post-conflicto como los empresarios, la sociedad civil organizada y el sector educativo.

Por otra parte, los entrevistados enfatizaron en que debe tratarse al ELN con singularidad porque su estructura y temáticas de interés son distintas, y eso terminaría repercutiendo en la agenda de negociación. En todo caso, se tiene optimismo frente a esta negociación y como escenarios se plantean que continúen los mismos problemas o que se recrudezca la violencia bien sea en la ciudad o en las zonas rurales. Todo depende de la ruta que defina un posible acuerdo con esa organización.

Sobre los retos luego de la firma de un acuerdo de paz, se visibilizan el desafío del fortalecimiento y capacitación de la institucionalidad local de cara al post-acuerdo, seguido por prepararse para los desafíos que plantea la persistencia y posible afectación de la inseguridad dados reacomodos dentro de la criminalidad; la política de desmovilización y reinserción, y en cuarto lugar, la transformación cultural y mensajes simbólicos. Este último reto, fue el más enfatizado en el evento, así como todo lo relacionado con los retos de la institucionalidad y la política de seguridad en calve de capacitación de los funcionarios y el desarrollo de estrategias localizadas que combinen enfoques de

seguridad pública, ciudadana y humana, con un gran peso en medidas de policía orientada por y para la comunidad.

En particular, frente al tema de la política de desarme, desmovilización y reinserción, los retos principalmente aluden al tema de la reintegración social y económica, la posible reincidencia y nexos de los desmovilizados con organizaciones criminales, la estigmatización frente a esta población, la seguridad de los desmovilizados, su integración laboral con proyectos capacitación y proyectos de vida sustentables, la participación política de los mismos y la desvinculación sostenible de menores de edad.

Por su parte, los desafíos de la política de reparación a víctimas se relacionan en primer lugar con la materialización de la reparación como tal, seguido de temas como la verdad y reparación simbólica, el reconocimiento de las víctimas, asuntos de la política social, la institucionalidad y recursos y la relación entre las víctimas y los desmovilizados. No obstante, el tema de víctimas tanto en el análisis de entrevistas como en el evento de socialización fue un reto que pudiera interpretarse no es tan prioritario como otros ya mencionados, en parte debido a la significativa tarea que en esta materia viene realizando la institucionalidad de la ciudad.

Así mismo, las recomendaciones de los expertos parten de reconocer las valiosas experiencias del pasado y realizar acciones que consoliden la política de seguridad, busquen implantar una pedagogía para la paz, fortalezcan las políticas de reintegración de desmovilizados y víctimas, se acerquen a los jóvenes como mecanismo de prevención de nuevas violencias, entre otras.

En relación con lo anterior, los entrevistados y participantes del evento consideran que son prioritarios los temas de cambio cultural, pedagogía de paz y cultura de la legalidad, seguido por seguridad ciudadana, programas de educación, cultura y empleo, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción y la convivencia que incluye también confianza y participación. Esto demuestra que el tema cultural que impacta a la convivencia es percibido como necesario en complemento de una política de seguridad coherente y consolidada en la ciudad.

El análisis también dejó lecciones frente a experiencias internacionales y patrones locales que permitieron establecer que todavía hay bastante que aprender, y que deben involucrarse cada vez un número mayor de actores sociales. Precisamente, la pregunta sobre actores permite evidenciar el peso percibido que deberá tener el empresariado en un postconflicto, así como la comunidad, la sociedad civil y las autoridades territoriales y funcionarios.

Como aporte del análisis de prensa se identifica que la agenda mediática en torno al postconflicto se concentra en temas específicos como la construcción de paz en las regiones, las posibles reformas de las fuerzas armadas y el desminado. Es de destacar que Medellín es mencionada en la prensa como una ciudad clave en temas de DDR, debido a sus experiencias pasadas y su capacidad institucional. Por otro lado, medios nacionales e internacionales, hacen alusión a las iniciativas de construcción de paz que ha adelantado la ciudad como el Museo Casa de la Memoria, La Escombrera y sus intervenciones en urbanismo social. En este sentido, la sinergia entre la nueva política de seguridad y convivencia, y el proyecto de Garantías de No Repetición es fundamental.

También se identifica que el debate del Postconflicto en los medios no ha estado protagonizado por el papel que tendrán las ciudades, incluso en medios locales, pero si se puede observar un panorama optimista respecto a lo que será un eventual escenario post-acuerdo.

V. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL POST ACUERDO: UNA AGENDA PARA MEDELLÍN

El ejercicio planteado a lo largo de este documento refleja la valiosa información que se produjo en el diálogo con los expertos así como en las reflexiones frente a la literatura internacional y nacional. Es así como de acuerdo a una metodología orientada a la construcción de un ejercicio de inteligencia colectiva y de valoración de aprendizajes teóricos y prácticos; el documento logra cumplir el objetivo de establecer escenarios, retos y recomendaciones de un posible postconflicto en Medellín. Se siguió un camino que empezó con la revisión de la literatura sobre postconflicto, seguridad y construcción de paz, que arrojó distintas lecciones para el manejo de las ventanas de oportunidad y riesgos que las transiciones generan para las sociedades, llegando a una conclusión valiosa y es aun seminal la producción que abarque de manera compleja y micro social las variables de seguridad y convivencia en ámbitos urbanos luego de un proceso de paz.

Así mismo, y siguiendo la evidencia comparativa identificada: la seguridad es el pre requisito fundamental, la condición esencial para que los postconflictos sean exitosos. Su clave está en el control territorial para devolvérselo a las comunidades. Claro está, como lo muestra la evidencia, que la seguridad por sí misma, sin una robusta inversión económica en las poblaciones y territorios de la ciudad con menores ingresos; tendrá tan solo un alcance limitado sin la combinación con otras iniciativas de impacto comunitario y de infraestructura. De no balancearse la mirada sobre la seguridad y la convivencia más allá de miradas securitarias, dado que el peso esta mirada ha generado efectos perversos en el aumento de los riegos en los postconflictos alrededor del mundo.

Un hallazgo fundamental que refleja la esencia del enfoque de la nueva política de seguridad y convivencia del Municipio, tiene que ver con que la importancia de la relación postconflicto, seguridad, convivencia y desarrollo. Alrededor del mundo la evidencia reitera la importancia de resolver el problema del orden social como primer paso hacia la paz a través del fortalecimiento institucional como medida esencial para domesticar la incertidumbre del tránsito. Esto implica que la gobernanza de la seguridad en la Medellín del postconflicto debe hacer un gran énfasis por la construcción de soluciones a problemas en los territorios, basándose en la construcción de confianza, legitimidad y lealtad, así como en sanar las heridas abiertas en el pasado en la relación entre autoridades y comunidades en las 16 comunas y los 5 corregimientos de la ciudad.

Así mismo el fortalecimiento institucional en clave de presencia territorial para la construcción de confianza, legitimidad y lealtad es un aspecto fundamental de la política del postconflicto. Como lo

evidenció la literatura revisada, sin un tránsito de las instituciones de la guerra a la de la paz, y en especial desde la economía de la guerra a un orden económico legal, no se puede esperar que la seguridad y la convivencia mejoren durante el conflicto, pues el gran enemigo del nuevo orden de la paz será sin duda el crimen organizado, ese elefante en la sala que Medellín sigue queriendo ignorar. Esto hará más difícil superar el dilema de seguridad, y ganarle los proyectos de vida a favor de la ciudad, que dadas las tentaciones de la ilegalidad no encontrarán atractivos los dividendos de la paz.

Como afirma uno de los expertos participantes en este estudio, las zonas que podrán sufrir el mayor deterioro en términos de seguridad, son aquellas zonas que actualmente están bajo el dominio de los grupos guerrilleros. Ya que la fuerza pública ha logrado avanzar, los espacios bajo el control de las guerrillas y donde el Estado tiene poco alcance son cada vez más remotos y usualmente rurales. En estas zonas, donde podemos hablar de algo así como "rebelocracias" (Arjona 2014), escenarios locales en donde hay reglas que los ciudadanos tienen que respetar si quieren evitar castigos severos y arbitrarios. Estas rebelocracias se parecen a estados muy autoritarios donde se controla la violencia con mucha represión³⁰. Las mismas pueden co-existir simultáneamente con órdenes sociales establecidos por el Estado, y la categoría aplica para órdenes criminales como lo han identificado Schultze-Kraft (2015) y Casas (2015).

¿Qué significa esto para la desmovilización de las FARC en el país y en la ciudad? En las zonas de actual dominio de las FARC, cuando este grupo se desmoviliza, un estado autocrático será reemplazado por el estado legítimo y más democrático, pero débil. Después de esta transición, el costo de cometer un crimen disminuye dramáticamente lo que posiblemente aumentará la delincuencia común. Esta reducción de costos para la comisión de crímenes incrementará la delincuencia común y sin duda será un reto para el Estado en esas zonas. En este sentido, una vez el sistema de autoridad que ejercen las FARC desaparece, la violencia en sus zonas de dominio incrementará, primero, en la medida en que se dé un tránsito de un sistema autocrático hacia un sistema un poco más democrático (lo que reduce los costos para el crimen), y segundo, en la medida

³⁰ En términos generales como señala Enzo Nussio para esta investigación, las dos formas de gobierno donde hay menos violencia en el mundo son las democracias, donde la gente no usa la violencia porque no tiene incentivos para hacerlo; y las autocracias, donde el estado reprime cualquier forma de violencia (Hegre et al. 2001). Donde se concentra la mayor parte de violencia en el mundo es entre estas dos formas de gobierno, es decir en los regímenes que se encuentran entre democracia y autocracia – semi-democracias, democracias imperfectas o regímenes híbridos

en que los narcotraficantes no cuenten con una autoridad para manejar los conflictos de interés que surgen de su negocio, como preocupantemente se especula en la ciudad dados fenómenos asociados a la existencia de mecanismos de coordinación entre ilegales.

Así, se puede pensar entonces en una alta probabilidad de que la violencia se incrementará en las zonas de actual dominio de las FARC, y prever un bajo impacto directo en las ciudades. Una evolución parecida puede ser observada para algunas zonas de anterior dominio paramilitar después de su desmovilización como por ejemplo en Córdoba (Munévar y Nussio 2009; Nussio y Howe 2014). Sin embargo, las mayores zonas urbanas del país no estarán directamente expuestas a estas dinámicas ya que la presencia de la guerrilla en estas zonas es prácticamente nula. Esto dependerá de la estrategia de seguridad que el Gobierno desarrolle con un enfoque de victorias tempranas, que prevea los reacomodos de las estructuras criminales ya existentes, y de aquellas que puedan surgir como efecto de la desmovilización.

Los participantes en este estudio parecen coincidir en que las ciudades no sufrirán directamente las consecuencias del postconflicto. En cuanto a dinámicas relacionadas con el reacomodo de organizaciones criminales, las zonas de control de las FARC y de poca presencia estatal serán el foco de disputa y violencia. Sin embargo, como lo ha sugerido Nussio en el transcurso de esta investigación, “en la medida en que organizaciones criminales asentadas en las ciudades o cerca de ellas hayan tenido conexiones con los grupos guerrilleros, ya sea por el suministro de coca, por la injerencia en la minería ilegal o por otro negocio ilegal, la desmovilización de los grupos guerrilleros puede significar algún desequilibrio con repercusiones en las ciudades, muy relacionado con las dinámicas de los legados criminales de las economías de guerra” (como lo han comprobado autores como Heupel 2006; Newman y Keller 2007).

En cuanto al rol de los excombatientes, y como se ha analizado en este estudio, no es tan probable que representen un desafío para el postconflicto en materia de seguridad, más aun cuando se espera que los actuales miembros de las FARC estén menos interesados en asentarse en las grandes ciudades que los desmovilizados individuales y colectivos del pasado, que estaban además interesados en buscar el anonimato para protegerse de posibles amenazas a su seguridad (Nussio, 2011). Esto dependerá también de las oportunidades generadas en zonas rurales, por ejemplo el establecimiento de una policía rural, de actividades de desminado y de los programas de reintegración que generan oportunidades de asentamiento en zonas rurales (Nussio, 2015).

En opinión de la mayoría de los participantes en este estudio hay de hecho razón para el optimismo en las ciudades de Colombia. Una vez terminada la confrontación armada, puede haber un reajuste en las prioridades del sector de seguridad. Una mayor inversión en trabajo policial así como una menor inversión para las fuerzas militares es un escenario realístico a mediano plazo, considerando que Colombia tiene una alta concentración de población en zonas urbanas con sus relacionados problemas de criminalidad. De hecho, ya se están gestando ideas con nuevas estrategias policiales que son promisorias y que van más allá de iniciativas de gobiernos locales, como ha sido común en el pasado (Gutiérrez Sanín et al. 2013; Hoelscher and Nussio 2015; Cerdá et al. 2012). El Plan Nacional de Cuadrantes de la Policía, que en Medellín suma 411, ha sido evaluado de manera positiva (FIP, 2012) y puede tener un impacto a mayor escala a través del tiempo.

En este sentido, la metodología *Delphi* empleada en este proyecto y el desarrollo de los ejercicios de entrevistas con expertos, los dos grupos focales con desmovilizados, el análisis de prensa y el evento de socialización permitieron generar conocimiento prospectivo sobre variables, factores y circunstancias que son imprescindibles para la materialización de políticas sostenibles en el marco de la construcción de paz. Si bien no es posible dar una única conclusión, en general se identifica que aunque existe un ambiente optimista frente a los resultados de las negociaciones con las FARC no se identifica que esto vaya a suponer cambios radicales para la situación de seguridad de la ciudad. Sin embargo, se espera que los grandes retos provengan de la convivencia y de las transformaciones culturales necesarias para la construcción de una cultura de paz en los territorios de la ciudad.

No obstante, los expertos han señalado una variedad de retos y recomendaciones que implicarán unas acciones muy específicas por parte de las próximas autoridades electas en la ciudad. Su responsabilidad yace en mantener el camino virtuoso recorrido por la ciudad hasta el momento y potenciar las oportunidades que trae el postconflicto, minimizando los riesgos que en él se encuentran inmersos. Las experiencias internacionales ofrecen ejemplos sobre lo que puede resultar útil. Esto depende de una planeación basada en un enfoque comprensivo de la seguridad, la convivencia y el desarrollo como eje fundamental de la agenda del postconflicto en Medellín. Como se observó la población clave a proteger, acompañar y promover siguen siendo los y las jóvenes de la ciudad, con especial atención en las poblaciones víctimas y desmovilizadas. La ciudad debe estar lista para aprovechar el escenario de postconflicto para tender una mano a los jóvenes involucrados en organizaciones criminales, así como diseñar estrategias de sometimiento a la justicia. Será más

importante evitar la constitución de una “nueva generación de violentos”, que de hecho ya se está formando, y que se sustenta en una serie de factores sociales negativos como la desigualdad, la falta de oportunidades, una cultura de violencia, el machismo y la desconfianza generalizada.

En este sentido, en la eventualidad de producirse un acuerdo de paz con las FARC, la ciudad tendrá el reto de estar adecuadamente preparada en materia técnica, financiera y humana para sortear los desafíos que conllevarán los escenarios planteados en ese momento. Además de la síntesis de hallazgos presentada anteriormente, es fundamental pensar en una agenda de temas e intervenciones prioritarias para los próximos dirigentes de Medellín en clave de construcción de paz.

A pesar de este escenario alentador para las ciudades, también hay que tener en cuenta una serie de incertidumbres que están relacionadas con el postconflicto o continúan siendo relevantes con o sin postconflicto:

Es posible que a corto plazo no se de una reorientación en el sector de la seguridad, para calmar los ánimos de unas fuerzas militares que temen su propia reducción. De hecho, es posible que en un primer momento después de la terminación del conflicto habrá una sobreatención a las necesidades del campo relacionada a la paz territorial, término acuñado por el Comisionado para la Paz (Jaramillo, 2014). Si esto ocurre, es posible que al tiempo haya una negligencia de las ciudades, lo que facilitaría la comisión de delitos en las ciudades a corto plazo. Sin embargo, aunque este escenario exista, los gobiernos locales deben trabajar fuertemente para reducir la probabilidad de ocurrencia de estos hechos a través de estrategias de prevención.

Es posible que a partir de una firma de un acuerdo de paz con los grupos guerrilleros y un cese bilateral de hostilidades, la atención mediática se enfoque cada vez más en zonas urbanas. Como los problemas de seguridad de las ciudades tienen una serie de causas no directamente relacionadas con el conflicto, es muy probable que la violencia urbana se mantenga constante en un primer momento y fluctúe alrededor de los promedios usuales. Esto puede llevar a frustración y malestar entre los ciudadanos debido a las expectativas positivas que genera un acuerdo de paz. En este sentido, es clave que se manejen las expectativas y no se espere demasiado con la inversión en seguridad urbana, es tarea de los gobernantes locales comunicar a la ciudadanía y señalar claramente su interés prioritario para cada contexto. Una reacción tardía a la inseguridad continua en las ciudades puede llevar a políticas improvisadas y cortoplacistas, como se han usado en otros países latinoamericanos y en la misma Colombia, y que han sido poco efectivas, como el populismo penal, la cero tolerancia y otras políticas relacionadas de mano dura (Roberts et al. 2002; Jütersonke,

Muggah, and Rodgers 2009). La nueva política de seguridad y convivencia para Medellín ofrece un enfoque adecuado y pertinente para enfrentar este último reto.

Es posible que la etiqueta del postconflicto lleve a un exclusivo enfoque en los legados del conflicto y sus poblaciones respectivas (desmovilizados, militares, víctimas, desplazados etc.) a pesar de que otras poblaciones vulnerables requerirán también de atención. Es particularmente importante pensar en los jóvenes de barrios marginados que han sido tradicionalmente expuestos a la violencia. Para algunos, la socialización en un mundo de violencia los ha encarrilado en una carrera criminal. Para el caso de Medellín abundan ejemplos de esta naturaleza (Baird, 2012; Rubio, 1997). Programas más amplios enfocados en jóvenes serán entonces un aspecto clave para reducir la violencia urbana, con o sin postconflicto (ver por ejemplo: Skogan et al. 2008; Slutkin, 2012).

Siguiendo con la misma línea de ideas, existen una serie de intervenciones, con las que ya se han experimentado en Colombia, que deben ser usados de manera más contundente para prevenir y reducir la violencia en las ciudades. Estrategias como el *hot spots policing* (Braga, Papachristos, and Hureau, 2012), intervenciones urbanísticas (Cassidy et al. 2015), ocasionales restricciones de uso de alcohol (de Mello, Mejía, and Suárez, 2013), restricción de uso de armas (Restrepo and Aguirre, 2010), generación de empatía entre enemigos de pandillas diferentes (Strocka, 2009) y estimulación de organizaciones comunitarias (Vilalta, 2013); lo que además ayuda también a la reintegración social de los excombatientes (Kaplan and Nussio, 2012), pueden contribuir a reducir la violencia urbana. Independientemente de si hay o no postconflicto, estas y otras estrategias deben ser estudiadas y aplicadas para generar mayores niveles de seguridad en las ciudades colombianas (ver también: CAF, 2014; UNDP, 2013; World Bank, 2011).

Por último, pero no menos importante es resaltar que aunque en el informe se habla de un postconflicto, es claro que el término no es adecuado y sobre todo para el caso colombiano y el de Medellín. La violencia y los conflictos son fenómenos que no van a desaparecer con la firma de un acuerdo. De hecho, se espera una eclosión de conflictos y de violencias que se mantenían latentes durante la guerra. Por esta razón concebir la etapa que iniciará posiblemente después de marzo de 2016, será una de postacuerdo que augura una gran habilidad para enfrentar las violencias y las conflictividades que se harán notorias en los territorios de la ciudad.

A manera de puente entre este trabajo y las iniciativas que la ciudad viene preparando en materia de postconflicto, seguridad y convivencia, desde este estudio se sugieren las siguientes acciones a la administración municipal de cara al alistamiento para cada posible escenario identificado. Así

mismo, se plantean algunas líneas de intervención para los retos establecidos y sugerencias para el adecuado involucramiento de los actores perfilados como claves en circunstancias de construcción de paz. Los mismos se materializan de manera sucinta a continuación:

Agenda		
Escenarios	1. Se fortalecerá el crimen organizado, especialmente las BACRIM que ocuparán espacios que dejarán las FARC	<ul style="list-style-type: none"> - El postconflicto es la oportunidad para iniciar un diálogo social franco orientado a construir un pacto ciudadano para la ruptura de lazos entre la legalidad y el crimen organizado en la ciudad. -Lo anterior implica que la Secretaría de Seguridad lidere un proceso de investigación sobre la vinculación de estas economías y promueva la acción penal contra los actores legales que hasta el momento se han beneficiado de las economías criminales. -Poner en marcha la nueva política de seguridad urbana, en particular sus componentes 5 (Transversalización) y 7 (Justicia) para transformar la política criminal de la ciudad, con unas metas claras para la rendición de cuentas en el primer año del nuevo gobierno de la ciudad. - Una estrategia frontal para recuperar a los jóvenes arrebatados por el crimen organizado bajo el principio de no dejar ni un joven atrás. - Un fuerte trabajo en materia de comprensión e intervención de la corrupción policial, con experimentos locales para la adaptación de la fuerza pública en entornos de crimen urbano y rural para los corregimientos de la ciudad. No se puede olvidar que la policía será la cara del Estado en los territorios del postacuerdo, y que hará las veces de fuerza de mantenimiento de paz en los mismos. -Usar la nueva política para profundizar estrategias novedosas de justicia local (aprovechando también la línea de justicia de la nueva política) de las pequeñas disputas para evitar la injerencia de los actores ilegales en la regulación de la convivencia, con énfasis en la capacitación de los funcionarios territoriales en habilidades de resolución de conflictos para el fomento de la eficacia colectiva de las comunidades.
	2. No habrá efectos significativos sobre la ciudad de Medellín	<ul style="list-style-type: none"> - Aprovechar dichos efectos para prestar cooperación técnica a los municipios circundantes para llevar la atención de los programas que se prestan en la ciudad a esos territorios, y así evitar el desplazamiento y fomentar el arraigo. -Generación de instancias de articulación interinstitucional entre el Área Metropolitana, Medellín y la Gobernación para acompañar a las regiones más afectadas por el postconflicto. - Definición de estrategias para la recepción de población desmovilizada y víctima expulsada de municipios con altos niveles de violencia. -Un trabajo masivo de pedagogía de paz en toda la ciudad y con los medios de comunicación para construir un sentido de apropiación colectiva del proceso, transformar imaginarios e identificar los réditos del dividendo de la paz; así como las posibilidades transformadoras del postacuerdo para los proyectos de vida de los medellinenses y la vida misma de la ciudad.
	3. Las desmovilizaciones hacia la ciudad de	<ul style="list-style-type: none"> -Fortalecer los programas de desmovilización en la ciudad para avanzar en una nueva relación con sus aliados clave. En particular con los empresarios, centros educativos y organizaciones sociales

<p>Medellín no serán masivas</p>	<p>para la oferta de proyectos de vida sostenibles, la capacitación y la formación para el trabajo y la vida, así como ejercicios de emprendimiento económico entre víctimas, desmovilizados y poblaciones no afectadas como experimentos locales para la transformación de prejuicios e imaginarios a partir de la iniciativa. Económica. Como se ha hecho en otros países después de la guerra.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aprovechar los liderazgos de los equipos territoriales de las secretarías, así como de los reintegradores del CEPAR para mejorar sus condiciones laborales, sus rutas de capacitación de cara a ampliar sus actividades a nuevas iniciativas de los programas de cara a los territorios de la ciudad. -Es urgente preparar a la ciudad para recibir e integrar socialmente a los excombatientes y a las víctimas de una manera abierta, aprovechando los liderazgos que han construido en el pasado y que se pueden canalizar de manera positiva en múltiples escenarios.
<p>4. Se generará el fortalecimiento de las instituciones del Estado</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Generar una propuesta de construcción territorial de paz en clave de seguridad y convivencia para ser presentada al Gobierno Nacional, en el mes de diciembre para que Medellín se convierta oficialmente en un laboratorio de paz territorial. - Lo anterior implicaría un gran experimento institucional civil en torno a la readecuación de las instituciones para la construcción de paz en un marco de descentralización y fortalecimiento de capacidades, susceptible de medición y evaluación durante el primer año del postacuerdo, y que sirva como modelo para otras ciudades. -Es fundamental un trabajo experimental con policía también, dada la oportunidad que abren los ejercicios que ha venido haciendo el gobierno nacional y la secretaría de seguridad en la materia. Esta vez el ejercicio tendría que ver con un diseño de la estrategia de policía orientada por y para las comunidades con acompañamiento de ONU y de intercambios con otras policías, como ya se ha hecho en el pasado en la ciudad. La clave aquí es pensar el rol de la policía como constructora y garante de la paz.
<p>5. Ciertas zonas rurales del departamento serán afectadas negativamente tras el acuerdo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Definir una estrategia con la Gobernación de Antioquia para el fortalecimiento de capacidades de los municipios del departamento especialmente de categorías 5 y 6. - Documentar y socializar las lecciones aprendidas frente a las políticas de desmovilización y víctimas en el periodo reciente del programa de paz y reconciliación, así como de los aprendizajes de la MAPP OEA y las organizaciones locales. -Establecer desde el SISC un sistema de indicadores basado en condiciones que permitan establecer riesgo de impacto negativo en los 5 corregimientos de la ciudad. Usando un índice compuesto en clave de categorías centrales relativas con debilidad institucional, impacto previo del conflicto o factores asociados al mismo, así como por el impacto y presencia de la criminalidad, así como por variables relativas a la convivencia, el SISC podría identificar los riesgos territoriales. Esta herramienta podría ser extremadamente útil para acompañar la estrategia de desarticulación de las estructuras criminales en la ciudad.
<p>6. Otros actores sociales se involucrarán activamente con</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar experimentos comunales de construcción de intervenciones y soluciones a problemas de seguridad y convivencia para activar la participación efectiva de actores sociales en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas asociadas,

	acciones derivadas de los acuerdos	empezando con diálogos barriales y zonales para identificar la priorización de problemáticas en la agenda pública de la ciudad. -Realizar con el apoyo de la cooperación internacional, un concurso municipal de iniciativas de construcción de paz en las comunas y los corregimientos con incentivos reputacionales.
Retos	1. Institucionalidad local, seguridad y criminalidad	- Generar una estrategia de empalme con los nuevos mandatarios de la ciudad buscando reflexionar sobre mecanismos para la consolidación de articulaciones institucionales y de la política de seguridad y convivencia en clave de postacuerdo y de construcción de paz territorial. -Desarrollar una alianza con la Dirección de la Policía para hacer pilotos locales de policía hacia un modelo local de policía orientada por y para las comunidades -Un estudio experimental con intervenciones para el diseño de medidas anticorrupción en el servicio de cuadrantes de policía.
	2. Desafíos relacionados con políticas públicas de Justicia Transicional	- Construir la agenda integrada de postacuerdo para la ciudad de Medellín que basada en el Proyecto de Garantías de no repetición permita desarrollar la nueva política de seguridad y convivencia. -Continuar el apoyo y fortalecimiento de la Unidad Municipal de Víctimas de Medellín y el programa de reintegración de la ciudad, posicionándolos como referente a nivel nacional.
	3. Transformación cultural y mensajes simbólicos	- Realizar un experimento masivo de medios a través de una estrategia de comunicación para la paz y pedagogía de los acuerdos que permita llegar a diferentes públicos y medir los efectos en la transformación de actitudes. -Construir puentes con la Secretaría de educación para realizar ejercicios locales de comprensión de los problemas escolares y la oportunidad que estos ofrecen para la construcción de habilidades para la resolución de conflictos y los liderazgos transformadores en materia de convivencia. -En particular se sugiere un trabajo liderado por la Secretaría de Seguridad como piloto de transformación de masculinidades, desvinculación de las pandillas, y desarrollo de espacios sociales para el uso del tiempo libre con estrategias de artes marciales y otras disciplinas y prácticas como se ha hecho en otros contextos complejos en el mundo.
	4. Otros desafíos (oferta del Estado)	- Propiciar desde el Plan de Desarrollo mecanismos de integración de la oferta para las políticas de justicia transicional y el resto de oferta sectorial.
	5. Desafíos de Medellín frente a las subregiones del departamento	- Desarrollar diálogos regionales por la seguridad y la convivencia del departamento en donde se intercambien aprendizajes locales y Medellín se posicione como formador y brinde asistencia técnica a los municipios. Esto a través de canales de apoyo técnico desde la Secretaría de seguridad y el SISC, así como el desarrollo de procesos de monitoreo de evolución del posconflicto para desarrollar un modelo de gestión y análisis de información en contextos de postacuerdo con financiación de un cooperador internacional.
Actores	1. Empresariado	- Desarrollar un diálogo para la comprensión de las expectativas y posibles roles del empresariado en contribuir a la seguridad y la convivencia en el postconflicto. -Apoyar el fomento de vinculación laboral y capacitación de

	<p>poblaciones en procesos de reintegración</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buscar una alianza para el apoyo al SISC en un área de monitoreo que permita analizar la evolución del postconflicto y el impacto sobre la seguridad y la economía local
2. Comunidad	<ul style="list-style-type: none"> - Incidir en los espacios de diálogo local que se propicien desde la institucionalidad para el diseño e implementación de las políticas de construcción de paz.
3. Autoridades territoriales y funcionarios	<ul style="list-style-type: none"> - Ofrecer una oferta de asistencia técnica subregional en seguridad y convivencia de acuerdo a las posibilidades de la administración de Medellín y de las gestiones con el Gobierno Nacional.
4. Sociedad civil	<ul style="list-style-type: none"> - Respalidar las acciones diseñadas en escenarios del postconflicto teniendo en cuenta la autonomía y sostenibilidad que estas acciones deben generar.
5. Institucionalidad en general	<ul style="list-style-type: none"> - Flexibilizar la oferta para consolidar las políticas clave del postconflicto y establecer pactos por la seguridad y convivencia.
6. Organizaciones sociales	<ul style="list-style-type: none"> - Brindar sus experiencias de cumplimiento de la legalidad y promoción de la convivencia. - Respalidar a la institucionalidad en las acciones que se diseñen en materia de seguridad y convivencia.
7. Academia y Sector Educativo	<ul style="list-style-type: none"> - Generar estrategias de difusión y pedagogización de la paz.
8. Fuerza Pública	<ul style="list-style-type: none"> - Promover el enfoque de la política pública de seguridad y convivencia - Apropiar los mensajes de construcción de paz y los deberes de la fuerza pública en este nuevo panorama.
9. Iglesias	<ul style="list-style-type: none"> - Hacer parte de las alianzas por la seguridad, a partir del fortalecimiento comunitario y organizacional. - Buscar alianzas con las iglesias para el desarrollo microlocal de la nueva política de seguridad y convivencia en su punto 3.
10. Jóvenes	<ul style="list-style-type: none"> - Generar acciones de formación e inclusión laboral para jóvenes en riesgo de reclutamiento y reincidencia en delincuencia.
11. Medios de comunicación	<ul style="list-style-type: none"> - Contribuir a la comprensión de los acuerdos y la construcción de lo que implica la transición a la paz.
12. Cooperación internacional	<ul style="list-style-type: none"> - Aportar responsablemente recursos para la construcción de paz en respeto de las autonomías nacionales, y la generación de acciones sin daño.
13. Víctimas y Desmovilizados	<ul style="list-style-type: none"> - Contribuir con la institucionalidad en las acciones que se diseñen para su reparación o reintegración.

Sin lugar a duda, como se mencionó en la sección de resultados uno de los retos más apremiantes será la difusión de lo ocurrido y la pedagogía sobre de los derechos y deberes que implicará la transición a la paz. En particular en los significados para la vida privada e inmediata de las familias; así como una discusión muy franca sobre los efectos sociales de los modelos de seguridad en el pasado en la ciudad, y un gran trabajo de socialización del nuevo modelo que inspira y desarrolla la política pública de seguridad y convivencia.

Concientizar a los medellinenses y a sus autoridades en como valorar y aprovechar este “dividendo de la paz” será fundamental para que Medellín consolide su trayectoria de innovación y efectividad en el manejo de la seguridad, y se perfile de manera sólida a enfrentar los retos que impondrán las economías criminales y los desafíos de la convivencia en la ciudad.

Como este equipo lo ha planteado en estudios anteriores, el de Medellín es un milagro a medias. El elefante en la sala, el crimen organizado, seguirá siendo el principal enemigo del proyecto virtuoso de la ciudad; así como el principal obstáculo a la definición del problema no resuelto del orden social en la ciudad. Mientras que Medellín no lo resuelva, no se concretará el milagro. Medellín seguirá viviendo en la esquizofrenia de una ciudad rica y virtuosa, que a la vez admite la más extrema inequidad y las peores formas de criminalidad como se constata en este estudio, aunque los impactos negativos del postacuerdo en materia de seguridad y convivencia no parecen ser alarmantes, si preocupa el hecho de que se robustezca el crimen organizado.

Lo anterior por dos razones: La primera, su presencia reta la condición esencial para el tránsito de la guerra a la paz y desde los modelos mentales (instituciones) de la violencia; la segunda, su presencia impedirá el tránsito fundamental desde los mercados de la guerra fundamental para romper con el pasado de la guerra y con los incentivos para la reproducción de la violencia. De no enfrentar esta realidad, al parecer como en el poema de Monterroso, “el dinosaurio seguirá allí” cuando Medellín despierte al postconflicto.

VI. BIBLIOGRAFÍA

Adler, M. & Erio Z. (1996) *Gazing Into the Oracle: The Delphi Method and Its Application to Social Policy and Public Health*. Jessica Kingsley Publishers.

Aguirre Tobón, K. (2014). *Analizando la violencia después del conflicto: el caso de Guatemala en un estudio subnacional*. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 59(220), 191-234.

Alcaldía de Medellín. Centro de Análisis Político Universidad EAFIT (2015) Encuesta de percepción sobre seguridad, la convivencia y la victimización en Medellín. Secretaría de seguridad-Alcaldía de Medellín, Centro de Análisis Político-Facultad de Ciencias y Humanidades, Universidad EAFIT; Invamer- Gallup. Medellín-Colombia.

Alcaldía de Medellín. Centro de Análisis Político Universidad EAFIT. (2014) Acompañamiento en el diseño de la política de seguridad y convivencia para Medellín. Medellín- Colombia. Secretaría de Seguridad del Municipio de Medellín. Centro de Análisis Político-Facultad de Ciencias y Humanidades, Universidad EAFIT.

Alonso, M., Giraldo, J., & Sierra, D. (2007). Medellín: el complejo camino de la competencia armada. *Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos*. Bogotá: Corporación Nuevo Arco Iris. Intermedio Editores.

Andreas, P. (2004). The clandestine political economy of war and peace in Bosnia. *International Studies Quarterly*, 48(1), 29-52.

Archer, D., & Gartner, R. (1976). Violent acts and violent times: A comparative approach to postwar homicide rates. *American Sociological Review*, 41(6), 937-963.

Arias, M.A. Camacho, A. Ibáñez, A. M. Mejía, D. Rodríguez, C. (2014) *Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia. ¿Cómo sonctruir un postconflicto sostenible?* Bogotá: Facultad de Economía, Universidad de Los Andes.

Arias, M.A, Ibáñez, A.M. Querubín, P. (2014) *The Desire to Return during Civil War: Evidence for Internally Displaced Populations in Colombia*. En *Journal Peace Economics, Peace Science and Public Policy*. Volume 20, Especia Issue 1: Conflict, Crime and Violence in Colombia (Enero 2014).

- Arjona, A. (2014) "Wartime Institutions: A Research Agenda." HiCN Working Paper 169. Households in Conflict Network.
- Arnson, C. (1999). Introduction. En C. Arnson (Ed.) *Comparative Peace Processes in Latin America* (pp. 1-28). Washington: Woodrow Wilson Center, Stanford University Press.
- Arreaza, C. Mason, A. (2012) Los actores internacionales y la construcción de paz en Colombia. En: Rettberg, A. (Comp). *Construcción de paz en Colombia*. Bogotá. Universidad de los Andes.
- Auyero, J., Burbano de Lara, A. B., & Berti, M. F. (2014). Violence and the State at the Urban Margins. *Journal of Contemporary Ethnography*, 43(1), 94-116.
- Baird, A. 2012. "Negotiating Pathways to Manhood: Rejecting Gangs and Violence in Medellín's Periphery." *Journal of Conflictology* 3 (1).
- Barraza, C. Caicedo, L.P. (2007) "Mujeres Entre Mafiosos Y Señores de La Guerra. Impacto Del Proceso de Desarme, Desmovilización Y Reintegración En La Vida Y Seguridad de Las Mujeres En Comunidades En Pugna. Caso Villavicencio." Bogotá: Corporación Humanas and Unifem.
- Barreto Henriques, M. (2014). Preparar el post-conflicto en Colombia desde los programas de desarrollo y paz: retos y lecciones aprendidas para la cooperación internacional y las empresas. *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, 9(1), 179-197.
- Barrientos Marín, J., Tamayo Bustamante, V., & Valencia Agudelo, G. D. (2014). Conflicto Armado, Paz y Economía. *Economía del Caribe*, (13), 61-89.
- Beall, J., Goodfellow, T., & Rodgers, D. (2013). Cities and conflict in fragile states in the developing world. *Urban Studies*, 50(15) 3065–3083
- Becker, G. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 101, 169-217.
- Bermúdez, A. (08 de Marzo de 2015). El desminado será el primer aterrizaje real de la Habana. La Silla Vacía. Recuperado de: <http://bit.ly/1Ggg1oM>.

Bogner, A., Littig, B., & Menz, W. (eds.). (2009). *Interviewing Experts. Methodology and Practice*. Basingstoke England: Palgrave Macmillan

Blair, E., Grisales, M., y Muñoz, A. M. (2009). Conflictividades urbanas vs. «guerra» urbana: otra «clave» para leer el conflicto en Medellín. *Universitas humanistica*, (67), 29-54.

Braga, A. Papachristos, A. Hureau. D. 2012. "The Effects of Hot Spots Policing on Crime: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis." *Justice Quarterly* 31 (4): 633–63.

Branch, A. (2010, Junio). *No Peace without justice?*. Ponencia presentda en Panel Discussion, International Criminal Court Review Conference, Kampala, Uganda.

Branch, A. (2013). Gulu in war... and peace? The town as camp in northern Uganda. *Urban Studies*, 50(15), 3152-3167.

Briceño-León, R. (2012). Tres fases de la violencia homicida en Venezuela. *Ciência & Saúde Coletiva*, 17(12), 3233-3242.

Bourguignon, F. (1999). *Crime and Inequitable Development*. Ponencia presentada en la Conferencia Annual del Banco Mundial sobre Economía del Desarrollo, del 28 al 30 de abril, en Washington, Estados Unidos.

CAF (2014) "Por Una América Latina Más Segura. Una Nueva Perspectiva Para Prevenir Y Controlar El Delito." Caracas: Corporación Andina de Fomento.

Caicedo, L.P. (2005) "Riesgos Para La Seguridad de Las Mujeres En Procesos de Reinserción de Excombatientes. Estudio Sobre Montería Y Tierralta." Bogotá: Corporación Humanas and Unifem.

Call, C.T. (2007) *Constructing Justice and Security After War*. United States Institute for Peace.

Call, C. T., & Cousens, E. M. (2008). Ending wars and building peace: International responses to War-Torn Societies. *International Studies Perspectives*, 9(1), 1-21.

Cárdenas, J.C., Cásas, A., y Méndez, N. (2014). The Hidden Face of Justice: Fairness, Discrimination and Distribution in Transitional Justice Processes. En *Journal Peace Economics, Peace Science and Public Policy*. Volume 20, Especia Issue 1: Conflict, Crime and Violence in Colombia (Enero 2014).

Casas-Casas, A. (2015) Arquitecturas institucionales y mecanismos informales para la transformación de la seguridad y la convivencia en el Municipio de Medellín. En Casas-Casas, A. Giraldo, A. (2015) *Seguridad y Convivencia en Medellín: aproximaciones empíricas a sus dinámicas y desafíos*. Medellín: EAFIT-Alcaldía de Medellín. En prensa.

Casas-Casas, A. Méndez, N. y Ramírez, A. M. (2015) “Abriendo la ‘Caja negra’ de la Justicia Transicional” en *Transiciones diferenciadas: Aproximaciones empíricas a la justicia transicional*, Angelika Rettberg y Carlos Alberto Mejía (Eds) Bogotá: Editorial Uniandes. En prensa.

Casas-Casas, A. Méndez, N. (2015) “Capital social, lealtad y eficacia colectiva: Una aproximación microsocia a la seguridad y la convivencia en las comunas de Medellín”. En Giraldo, J. (Ed) *Territorios y sociabilidades violentas*. Medellín: Universidad Eafit.

Castel, A. (2009). La justicia tradicional en la reconciliación de Rwanda y Burundi. *Revista CIDOB d'Afers internacionals*, (87), 53-63.

Cassidy, Tali, Melikaya Ntshingwa, Jakub Galuszka, and Richard Matzopoulos. 2015. “Evaluation of a Cape Town Safety Intervention as a Model for Good Practice: A Partnership between Researchers, Community and Implementing Agency.” *Stability: International Journal of Security & Development* 4 (1).

Centro de Análisis Político (2015) Cuadernos de trabajo en Gobierno y Ciencias Políticas No1. Medellín: Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas – Escuela de Humanidades, Universidad EAFIT.

Centro de Análisis Político-Universidad (CAP) - EAFIT. (2014). *Encuesta de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la ciudad de Medellín*. Medellín: Universidad EAFIT- Secretaría de Seguridad-Alcaldía de Medellín.

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). *Informe General ¡Basta Yá! Colombia: memorias de guerra y dignidad*. Bogotá. CNMH.

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2012). *Encuesta Nacional ¿Qué piensan los colombianos después de siete años de Justicia y Paz?*. Bogotá: CNMH.

Cerdá, Magdalena, Jeffrey D. Morenoff, Ben B. Hansen, Kimberly J. Tessari Hicks, Luis F. Duque, Alexandra Restrepo, and Ana V. Diez-Roux. 2012. "Reducing Violence by Transforming Neighborhoods: A Natural Experiment in Medellín, Colombia." *American Journal of Epidemiology* 175 (10): 1045–53.

Chaux, E. (2012) "Contribución de la educación a la construcción de paz". En Rettberg, A. *Construcción de paz en Colombia*. Bogotá: Universidad de Los Andes.

Colak, A. A., & Pearce, J. (2015). Securing the global city?: an analysis of the 'Medellín Model' through participatory research. *Conflict, Security & Development*, 15(3), 197-228.

Collier, P., Hoeffler, A. and Soderbom, M., 2006, 'Post-Conflict Risks', CSAE Working Paper Series no. 12, Centre for the Study of African Economies, University of Oxford, Oxford.

Cortés, D. Montolio D. (2013) Provision of Public Goods and Violent Conflict: Evidence from Colombia. En *Journal Peace Economics, Peace Science and Public Policy*. Volume 20, Especial Issue 1: Conflict, Crime and Violence in Colombia (Enero 2014).

Coscione, M. (2013). Un nuevo desafío para el comercio justo latinoamericano en el actual contexto colombiano. *Equidad & Desarrollo*, (20), 51-70.

Crang, M. and Cook, I. (2007). *Doing Ethnographies*. London: Sage Publications.

Crang, M. (2003). Qualitative methods: touchy, feely, look-see? *Progress in Human Geography*, 27(4), 494-504.

Cruz, J.M, Fernández de Castro, R. y Santamaría, B, G. (2012). Political Transition, Social Violence, and Gangs: Cases in Central America and Mexico. En C. Arnson (Ed.). *In the Wake of War, Democratization and Internal Armed Conflict in Latin America* (pp. 317-349). Washington: Woodrow Wilson Center Press.

De León Beltrán, I. & Garzón, J. C. (2014). Mercados urbanos de drogas y zonas de impunidad en Colombia: los supuestos, los hechos y las respuestas detrás del narcotráfico. (2), 1-16.

De Mello, J. Mejía, D. and Suárez, L. 2013. "The Pharmacological Channel Revisited: Alcohol Sales Restrictions and Crime in Bogotá." IDB WORKING PAPER SERIES No. IDB-WP-394. Washington D.C.: Inter-American Development Bank.

Duncan, G. (2005). *Del campo a la ciudad: la infiltración urbana de los señores de la guerra*. Disponible en: <http://bit.ly/1FcoFJH>.

Duncan, G. (2015a). *Exclusión, insurrección y crimen*. Disponible en: <http://bit.ly/1YxxXpN>.

Duncan, G. (2015b). Más que plata o plomo: el poder político del narcotráfico en Colombia y México. Bogotá: Debate.

Duncan, G. (2015). Riesgos en seguridad de un eventual postconflicto y desmovilización de las FARC para la ciudad de Medellín. Documento de trabajo. CAP Universidad EAFIT.

Escobar, A. (2013). Desarme, desmovilización y reintegración en Camboya. *Colombia Internacional*, (77), 73-105.

Esser, D. E. (2014). Security scales: spectacular and endemic violence in post-invasion Kabul, Afghanistan. *Environment and Urbanization*, 26(2), 373-388.

Fajardo Landaeta, J. (2013). Para ambientar la paz. *El Tiempo*. Recuperado de: <http://bit.ly/1Ggg1oM>.

Fearon, J. D., Humphreys, M., & Weinstein, J. M. (2009). Can development aid contribute to social cohesion after civil war? Evidence from a field experiment in post-conflict Liberia. *The American Economic Review*, 99(2), 287-291.

Fearon, J. (2004) Why Do Some Civil Wars Last so Much Longer than Others? *Journal of Peace Research*, 41 (3), 275-301.

Fundación Ideas para la Paz. (2014) *Retorno a la legalidad o reincidencia de excombatientes en Colombia: dimensión del fenómeno y factores de riesgo*. Bogotá: Informes FIP # 22.

Fundación Ideas para la Paz. (2012) "Evaluación de Impacto Del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria Por Cuadrantes." Informes FIP 18. Bogotá: FIP.

Fundación Ideas para la Paz. (2014) "Retorno a La Legalidad O Reincidencia." Informes FIP. Bogotá: FIP

Fundación ideas para la paz. (2015) La relación FARC-BACRIM y sus lugares comunes. Bogotá: FIP, 25 de septiembre.

Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research* 6 (3), 167-191.

Gambetta, D. (2007). *La Mafia Siciliana. El Negocio de la Protección Privada*. México: Fondo de Cultura Económica. Publicado originalmente en 1993.

Gambetta, Diego (1996) *The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection*. Harvard: Harvard University Press.

Giraldo, A. Casas-Casas, A. (2015) *Seguridad y Convivencia en Medellín: aproximaciones empíricas a sus dinámicas y desafíos*. Medellín: EAFIT-Alcaldía de Medellín. En prensa.

Giraldo Ramírez; J. (2015). *Política y guerra sin compasión*. Disponible en: <http://bit.ly/1MKIQOI>

Giraldo, A. Rendón y G. Duncan, (Coords.) (2014). *Nuevas modalidades de la captación de rentas ilegales en Medellín*. Medellín: Universidad EAFIT, ESU, Alcaldía de Medellín.

Giraldo, J. (2013). EL gobierno del oro en el Bajo Cauca: una lectura weberiana sobre la explotación. En J. Giraldo (Ed.), *Economía criminal y poder político*. Medellín: Universidad EAFIT y Colciencias. 33-68.

Giraldo, J. (2015). *Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos*. Disponible en: <http://bit.ly/1Jm7G2y>.

Giraldo, J. y Fortou, J. (2014). Seguridad y violencia homicida en Medellín 2003-2012. En A. Ávila et al., *Violencia Urbana. Radiografía de una región*. Bogotá: Aguilar.

Giraldo, J. y Mesa, J. P. (2013). Reintegración sin desmovilización: el caso de las milicias populares de Medellín. *Colombia Internacional*, (77), 217-239.

Giraldo, J. y Preciado, A. (2015). Medellín, from Theater of War to Security Laboratory. *Stability: International Journal of Security and Development*, 4(1), Art-34.

Gobernación de Antioquia. Centro de Análisis Político Universidad EAFIT (2014). Encuesta de percepción de

la seguridad y la convivencia ciudadana en el Departamento de Antioquia. Gobernación de Antioquia, Centro de Análisis Político-Facultad de Ciencias y Humanidades, Universidad EAFIT; Invamer-Gallup. Medellín-Colombia.

Gómez Tatis, D. L. (2013). Hacia el fortalecimiento de capacidades de gestión pública en un escenario de postconflicto en San Jacinto (Bolívar), Montes de María, Caribe colombiano. *Equidad & Desarrollo*, (20), 211-228

Goodfellow, T., & Smith, A. (2013). From urban catastrophe to 'model'city? Politics, security and development in post-conflict Kigali. *Urban studies*, 50(15), 3185-3202.

Grasa, R. (2015) Perspectivas, retos y oportunidades de los empresarios colombianos en la construcción de paz. Observatorio colombiano de violencia y gobernanza. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung.

Green, K. C., Armstrong, J. S., & Graefe, A. (2007). Methods to elicit forecasts from groups: Delphi and prediction markets compared. *Foresight: The International Journal of Applied Forecasting*, 8, 17–20.

Guerra, M., & Plata, J. J. (2005). Estado de la investigación sobre conflicto, postconflicto, reconciliación y papel de la sociedad civil en Colombia. *Revista de Estudios Sociales*, (21), 81-92.

Guerrero Sánchez, E., Rojas, A. A., Torres, M. Y. & Bourdon Rojas, N. A. Plan prospectivo para el desarrollo agrario en las regiones colombianas a partir del postconflicto al año 2025. *El Ágora USB*, 14(2), 397-417.

Gurr, T. (1970). *Why Men Rebel*. Princeton University Press. Princeton.

Gutiérrez Sanín, Francisco. 2008. "Telling the Difference: Guerrillas and Paramilitaries in the Colombian War." *Politics & Society* 36 (1): 3–34.

Gutiérrez Sanín, F. Pinto, M. Arenas, J.C. Guzmán, T. Gutiérrez, M. (2013) "The Importance of Political Coalitions in the Successful Reduction of Violence in Colombian Cities." *Urban Studies* 50 (15): 3134–51.

Habyariman, J., Humphreys, M., Posner, D., & Weinstein, J. (2008). Better institutions, not partition. *Foreign Affairs*, 87(4), 158-141.

Harcourt, B. (1998). Reflecting on the Subject: A Critique of the Social Influence Conception of Deterrence, the Broken Windows Theory, and Order Maintenance Policing New York Style. *Michigan Law Review Association*, 97 (2), 291-389.

Hegre, Håvard, Scott Gates, Nils Petter Gleditsch, and Tanja Ellingsen. 2001. "Toward a Democratic Civil Peace? Democracy, Political Change, and Civil War, 1816–1992." *American Political Science Review* 95 (01): 33–48.

Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, P. (1998). Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill.

Henriques, M. B. (2014). Preparar el post-conflicto en Colombia desde los programas de desarrollo y paz: retos y lecciones aprendidas para la cooperación internacional y las empresas. *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, 9(1), 179-197.

Herrera, D., & González, P. (2013). Estado del arte del DDR en Colombia frente a los estándares internacionales en DDR (IDDRS). *Colombia Internacional*, (77), 272-302.

Heupel, Monika. 2006. "Shadow Trade War Economies and Their Challenge to Peacebuilding." *Journal of International Relations and Development* 9 (2): 140–69.

Hill, R., Temin, J & L. Pacholek (2012). Building Security Where There Is No Security. *Journal of Peacebuilding and Development*, 3(2), 38-52.

Hoelscher, K., & Nussio, E. (2014). Understanding Unlikely Successes in Urban Violence Reduction. *Urban Studies*, June, 1-20.

Hopmann, P. T., & Zartman, I. W. (2010). Overcoming the Nagorno-Karabakh Stalemate. *International Negotiation*, 15(1), 1-6.

Humphreys, M., & Weinstein, J. M. (2008). Who fights? The determinants of participation in civil war. *American Journal of Political Science*, 52(2), 436-455.

Hurtado, S. (2002). Criterio de expertos. Su procesamiento a través del método DELPHY. Consultado en: www.ub.es/histodidactica/epistemologia/delphy.htm.

Ibañez, A., Arias, M.A., Camacho, A., Mejía, D., & Rodríguez, C. (2014). *Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia ¿Cómo construir un postconflicto sostenible?*. Bogotá: Universidad de los Andes. Facultad de Economía.

International Crisis Group (2014) *El día después de mañana: Las FARC y el fin del conflicto en Colombia*. Informe sobre América Latina N°53, 11 de diciembre.

Instituto Catalán Internacional para la Paz. (2014). *Colombia en el Postconflicto Violento: retos y escenarios para construcción de la paz*. Barcelona: ICIP.

Instituto Catalán Internacional para la Paz (2014). *Escenarios Postconflicto en Colombia: agenda, oportunidades y hoja de ruta, del seminario Barcelona*. Barcelona: ICIP.

Jaramillo, S. (2014) "La paz territorial" [en línea] <http://www.semana.com/nacion/articulo/lea-discurso-integro-del-alto-comisionado-para-paz-sergio-jaramillo/352033-3>

Jaramillo, Sergio. 2014. "No va a Haber Otra Oportunidad Para La Paz": Sergio Jaramillo." *El Tiempo*, April 7.

Jaramillo, A. (2011) *Acerca de los estudios sobre conflicto armado y violencia urbana en Medellín*. En J. Giraldo, A. Naranjo y G. Duncan (Eds.) *Economía criminal en Antioquia: Narcotráfico*. Medellín: Universidad EAFIT.

Joshi, M. (2013). Inclusive institutions and stability of transition toward democracy in post-civil war states. *Democratization*, 20(4), 743-770.

Junne, G. & Verokren, W. (Ed) (2005) *Post-conflict development: meeting new challenges*. Boulder, CO.

Jütersonke, O., Muggah, R., & Rodgers, D. (2009). Gangs, urban violence, and security interventions in Central America. *Security Dialogue*, 40(4-5), 373-397.

Kalyvas, S. (2007). Civil Wars. En C. Boix & S. Stokes (Eds.) *The Oxford Handbook of Comparative Politics* (pp. 416-434). New York: Oxford University Press.

Kaplan, O. Nussio, E. (2012) "Community Counts: The Social Reintegration of Ex-Combatants in Colombia." *SSRN eLibrary*, August.

Kaplan, O. Nussio, E. (2013) "Explaining Recidivism of Ex-Combatants in Colombia." *SSRN eLibrary*.

Klisberg, B. (2008). ¿Cómo Enfrentar la Inseguridad en América Latina? La Falacia de la Mano Dura. *Nueva Sociedad*, 215, 4-16.

Kaker, S. A. (2014). Enclaves, insecurity and violence in Karachi. *South Asian History and Culture*, 5(1), 93-107.

Knight, W. A. (2008). Disarmament, demobilization, and reintegration and post-conflict peacebuilding in Africa: an overview. *African security*, 1(1), 24-52.

Kronenberger, W. G et al. (2005). Media violence exposure and executive functioning in aggressive and control adolescents. *Journal of clinical psychology*, 61(6), 725-737.

Kyamusugulwa, P. M., Hilhorst, D., & Van Der Haar, G. (2014). Capacity builders for governance: community-driven reconstruction in the eastern Democratic Republic of Congo. *Development in Practice*, 24(7), 812-826.

Lakhdar Brahimi, (2007) Former Special Adviser of the Secretary-General of the United Nations, State building in crisis and post-conflict countries.

Lederach, J. P. (2007). The Moral Imagination: the Art and Soul of Building Peace Association of Conflict Resolution, Sacramento, September 30, 2004. *European Judaism*, 40(2), 9-21.

León, J. (2015). Las 10 conclusiones más interesantes del informe de León Valencia. La silla Vacía. Recuperado de: <http://bit.ly/1hIYZ1P>.

León, J. (2015). Así transformarían a Colombia los acuerdos logrados con las Farc. La Silla Vacía. Recuperado de: <http://bit.ly/1rfE2bZ>.

Linstone, H., & Turoff, M. (1975). *The Delphi Method*. Addison-Wesley.

Littig, B. (2011). Interviews, Expert. En B. Badie & D. Berg-Schlosser & L. Morlino (Eds.). *The International Encyclopedia of Political Science*, volume 5. Sage: London/Thousand Oaks/New Delhi.

Llorente, M.V. Vranckx, A. (2012) El control democrático de las armas ilegales en Colombia: una apuesta de construcción de paz. En: Rettberg, A. (Comp). *Construcción de paz en Colombia*. Bogotá. Universidad de los Andes.

Mac Ginty, R. & O. Richmond (2013). The Local Turn in Peace Building: A Critical Agenda for Peace. *Third World Quarterly*, 34(5), 763-783.

Mamdani, M. (2008). The new humanitarian order-Is the ICCs" responsibility to protect" really just an assertion of neocolonial domination?. *The Nation*, 287 (9), 17-22.

Mamdani, M. (2009). The International Criminal Court's Case against the President of Sudan: A Critical Look. *Journal of International Affairs*, 62(2), 85.

Mamdani, M. (2011). An African reflection on Tahrir Square. *Globalizations*, 8 (5), 559-566.

Mamdani, M. (2006). From Piety to Politics. *The Nation*. Disponible en: <http://bit.ly/1LXOUmC>.

Mantzavinos, C. (2001): *Individuals, Institutions, and Markets*, Cambridge: Cambridge University Press.

Mantzavinos, C. (2009) "Institutions". En *SAGE Handbook of Philosophy of Social Science*. En Ian C. Jarvie and Jesús Zamora Bonilla (Eds.). SAGE.

Mantzavinos, C., Douglass, North and Syed, Shariq (2004): "Learning, Institutions and Economic Performance", En *Perspectives on Politics*, vol. 2, p. 75-84.

Manrique, V. (23, Mayo de 2013. Después de la Habana: ¿Cómo debe responder la Policía. *Revista Semana*. Recuperado de: <http://bit.ly/1JrbNOM>.

Martin, G. (2012). *Medellín, tragedia y resurrección: mafia, ciudad y estado. 1975 – 2012*. Bogotá: Planeta.

Massé, Frédéric, Victor Negrete, Enzo Nussio, and Juan E. Ugarriza. 2011. "Presencia de Desmovilizados E Inseguridad En Las Ciudades. Casos de Estudio: Villavicencio, Montería Y Bogotá." Cuarto Informe Del Observatorio de DDR Y Ley de Justicia Y Paz. Madrid: CITpax.

McConnell, S. (2012). Nicaragua's Pacted Democracy. En C. Arnsen (Ed.). *In the Wake of War, Democratization and Internal Armed Conflict in Latin America* (pp. 139-173). Washington: Woodrow Wilson Center Press.

McDermott, J. (2015) ¿Cómo se verá el panorama criminal tras un acuerdo de paz con las Farc? Observatorio colombiano de violencia y gobernanza. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung.

McDermott, Jeremy. 2013. "The FARC, the Peace Process and the Potential Criminalisation of the Guerrillas." Bogotá: Insight Crime.

McIlwaine, C., & Moser, C. O. (2001). Violence and social capital in urban poor communities: perspectives from Colombia and Guatemala. *Journal of International Development*, 13(7), 965-984. Moncada, E. (2009). Toward democratic policing in Colombia? Institutional accountability through lateral reform. *Comparative Politics*, 41(4), 431-449.

McIlwaine, C., & Moser, C. O. (2004). Drugs, alcohol and community tolerance: an urban ethnography from Colombia and Guatemala. *Environment and Urbanization*, 16(2), 49-62.

McMichael, G. (2014). Rethinking access to land and violence in post-war cities: reflections from Juba, Southern Sudan. *Environment and Urbanization*, 26 (2), 389-400.

Moya, A. (2014) ¿Pueden la violencia y los trastornos mentales condenar a la población desplazada a una situación de pobreza crónica? En En Ibañez, A., Arias, M.A., Camacho, A., Mejía, D., & Rodríguez, C. *Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia ¿Cómo construir un postconflicto sostenible?*. Bogotá: Universidad de los Andes. Facultad de Economía.

Méndez, N. Casas-Casas, A. (2015) Una aproximación cuantitativa a la medición de la seguridad y convivencia en Medellín. En Casas-Casas, A. Giraldo, A. (2015) *Seguridad y Convivencia en Medellín: aproximaciones empíricas a sus dinámicas y desafíos*. Medellín: EAFIT-Alcaldía de Medellín. En prensa.

Moncada, E. (2013). Business and the politics of urban violence in Colombia. *Studies in Comparative International Development*, 48(3), 308-330.

Muggah, R. (2013). Negotiating disarmament and demobilisation: a descriptive review of the Evidence. *Colombia Internacional*, (77), 19-41.

Muggah, R. (2014). Deconstructing the fragile city: exploring insecurity, violence and resilience. *Environment and Urbanization*, 26(2), 345-358.

Munévar, Juan, and Enzo Nussio. 2009. "Desmovilizados: Víctimas Y Causas de Inseguridad. Estudio de Caso Sobre El Municipio de Tierralta En El Departamento de Córdoba." Segundo Informe Del Observatorio de DDR Y Ley de Justicia Y Paz. Bogotá: CITpax.

Murillo Amarís, S. J. (2012). Hacia una política pública de reconciliación social: tipología y casos. *Papel Político*, 17(2), 423-467.

Newman, E., & Keller, N. (2007). Criminal Legacies of War Economies. *Journal of Peacebuilding & Development*, 3(3), 49-62.

Nicholas, S. (2014). Peacebuilding for faith-based development organisations: informing theory and practice. *Development in Practice*, 24(2), 245-257.

North, D. (2005) *Understanding the process of economic change*. New Jersey: Princeton University Press.

Nussio, E. 2011. "How Ex-Combatants Talk about Personal Security. Narratives of Former Paramilitaries in Colombia." *Conflict, Security & Development* 11 (5): 579–606.

Nussio, E. 2012. *La Vida Después de La Desmovilización. Percepciones, Emociones Y Estrategias de Exparamilitares En Colombia*. Bogotá: Universidad de los Andes.

Nussio, Enzo, and Kimberly Howe. 2012. "What If the FARC Demobilizes?" *Stability: International Journal of Security & Development* 1 (1): 58–67.

Nussio, E. 2014. "When Protection Collapses: Post-Demobilization Trajectories of Violence." *Terrorism and Political Violence* Online first. doi:10.1080/09546553.2014.955916.

Nussio, Enzo, and Juan E. Ugarriza. 2013. "Are Insurgents Any Different from Counterinsurgents? A Systematic Integration and Validation of Motivational Studies from Colombia." *Social Science Research Network, Working Paper Series*.

Nussio, E. (2013). Desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes: políticas y actores del postconflicto. *Colombia Internacional*, (77), 8-16.

Nussio, E. (2015). ¿Cómo afecta un posible postconflicto la seguridad y convivencia en las ciudades? Documento interno de trabajo. CAP Universidad EAFIT.

Observatorio de Derechos Humanos (2013) Atlas del impacto regional del conflicto armado en Colombia Vol. 1. Dinámicas locales y regionales en el periodo 1990-2013. Bogotá: Presidencia de la República de Colombia.

O'Donnell, G. (1993). Acerca del Estado, la Democratización y Algunos Problemas Conceptuales. Una Perspectiva Latinoamericana con Referencias a Países Poscomunistas. *Desarrollo Económico*, 33 (130), 163-184.

Palacios, M. y Stanford, F. (2002). *Colombia: país fragmentado, sociedad dividida: su historia*. Bogotá: Editorial Norma.

Palou, J. C. Méndez, M. L. (2012) "Balance de los procesos de desarme, desmovilización y reintegración en Colombia 1990-2011". En: Rettberg, A. (Comp). *Construcción de paz en Colombia*. Bogotá. Universidad de los Andes.

Pearce, J. (1999). Peace-building in the periphery: lessons from Central America. *Third World Quarterly*, 20(1), 51-68.

Pearce, J. (2010). Perverse state formation and securitized democracy in Latin America. *Democratization*, 17(2), 286-306.

Peraza, X. (2008). Migrant-Local Government Relationships in Sending Communities: The Power of Politics in Postwar El Salvador. *Migraciones internacionales*, 4(3), 105-130.

Piedrahita, I. (2015). Investigaciones sobre violencias en el marco del conflicto armado en medellín 2010 – 2015 – hacia la construcción de una estrategia de garantías de no repetición por una cultura de paz para medellín. Cooperación Región.

Pizarro, E. (2015). *Una lectura múltiple y pluralista de la historia*. Disponible en: <http://bit.ly/1QVySLF>.

Posada Carbo, E. (2006). *La nación soñada: violencia, liberalismo y democracia en Colombia*. Bogotá: Editorial Norma.

Proyecto Antonio Nariño. (2004). Calidad informativa y cubrimiento del conflicto: Estándares de calidad periodística en el cubrimiento del conflicto armado en Colombia. Bogotá: Fondo Editorial Cerec.

Remler, D & Van Ryzin, G. (2011). *Research Methods in Practice. Strategies for Description and Causation*. Sage Publications. Los Angeles, California.

Restrepo, Jorge A., and Katherine Aguirre. 2010. "El Control de Armas Como Estrategia de Reducción de La Violencia En Colombia: Pertinencia, Estado Y Desafíos." *Criminalidad* 52 (1): 265–84.

Rettberg, A. (Comp). (2012) *Construcción de paz en Colombia*. Bogotá. Universidad de los Andes.

Rettberg, A. Rivas, A. (2012) "El sector empresarial y la construcción de paz en Colombia. En Rettberg, A. (Comp). *Construcción de paz en Colombia*. Bogotá. Universidad de los Andes.

Revista Semana (2015) ¿Se dividirán las Farc tras una acuerdo de paz? En <http://www.semana.com/especiales/disidencias-paz-farc/index.html>

Revista Semana (2015) Encuesta los colombianos y la paz En <http://www.semana.com/nacion/galeria/sube-apoyo-al-proceso-de-paz/444944-3>

Revista Semana. 2009. "12 Por Ciento de Las Bacrim Son Desmovilizados: Policía Nacional," August 1.

Roberts, Julian V., Loretta J. Stalans, David Indermauer, and Mike Hough. 2002. *Penal Populism and Public Opinion : Lessons from Five Countries: Lessons from Five Countries*. Oxford: Oxford University Press.

Rubio, Mauricio. 1997. "Perverse Social Capital: Some Evidence from Colombia." *Journal of Economic Issues* 31 (3): 805–16.

Rodgers, D. (2009). Slum wars of the 21st century: gangs, mano dura and the new urban geography of conflict in Central America. *Development and Change*, 40(5), 949-976.

Salomons, D. (2005) Security: an absolute prerequisite. En Junne, G. & Verokren, W. (Ed) (2005) Post-conflict development: meeting new challenges. Boulder, CO.

Schuberth, M. (2015). A transformation from political to criminal violence? Politics, organised crime and the shifting functions of Haiti's urban armed groups. *Conflict, Security & Development*, 15(2), 169-196.

Schulthofer-Wohl, J. Sambanis, N. (2010) DDR programs: An Assesment. Sweden: Folke Bernadotte.

Schultze-Kraft, M. (2015) *Crimillegal Orders: Revisiting Organized Crime's Political Power*. Departamento de Estudios Políticos-CIES. Cali: Univerisdad Icesi. Work in Progress.

Schultze-Kraft, M. (2012) "La cuestión military en Colombia": la fuerza pública y los retos de la construcción para la paz. En: Rettberg, A. (Comp). *Construcción de paz en Colombia*. Bogotá. Universidad de los Andes.

Secretaría de Seguridad (2015) *Seguridad: No encerrarse, confiar, vivir sin miedo*. Brochure Ciudad Segura. Medellín: Alcaldía de Medellín.

Seils, P. (2015). Squaring Colombia's Circle: The Objectives of Punishment and the Pursuit of Peace. *ICTJ, June*, 1-16.

Skocpol, T. (1979). *States and Social Revolutions. A Comparative Analysis of France, Russia and China*. London: Cambridge University Press.

Skogan, Wesley G., Susan M. Hartnett, Natalie Bump, Jill Dubois, R. Hollon, and D. Morris. 2008. "Evaluation of Ceasefire-Chicago." Chicago: Northwestern University. <http://www.ncjrs.gov/App/AbstractDB/AbstractDBDetails.aspx?id=249182>.

Slutkin, Gary. 2012. "Violence Is a Contagious Disease." *Cure Violence*.

Smit, A. R. (2006). Housing and Property Restitution and IDP Return in Kosovo. *International Migration*, 44(3), 63-88.

Sosa, E. (2013). *Dinámica de la Protesta Social en Honduras*. Tegucigalpa: Editorial Guaymuras.

Steenkamp, C. (2011). In the shadows of war and peace: making sense of violence after peace accords. *Conflict, Security & Development*, 11(3), 357-383.

Strocka, Cordula. 2009. "Piloting Experimental Methods in Youth Gang Research: A Camping Expedition with Rival Manchas in Ayacucho, Peru." In *Youth Violence in Latin America: Gangs and Juvenile Justice in Perspective*, edited by Gareth A. Jones and Dennis Rodgers, 105–32. New York: Palgrave Macmillan.

Sunstein, C. (2006) *Infotopia: How Many Minds Produce Knowledge*. Oxford University Press.

Surowiecki, J (2004) *The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations*. Doubleday/Anchor.

Svenden, G. L. H. (2006). Studying social capital in situ: A qualitative approach. *Theory and Society*, 35 (1), 39-70.

Taberner, L. T. (2014). "Nosotros, las víctimas": violencia, justicia transicional y subjetividades políticas en el contexto peruano de recuperación postconflicto. *Papeles del CEIC*, 2014/1(106), 1-32.

The Royal Society of Canada. (1998). Expert panels: manual of procedural guidelines. En página de la Unión Europea: http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/examples/lib_too_pan_one_en.pdf

Thorsell, S. (2013). Towards People-Centred Economic reintegration? An analysis of the Economic reintegration strategy of demobilised Combatants in Colombia. *Colombia Internacional*, (77), 177-215.

Turoff, M. (1970) "The Design of a Policy Delphi". *Technological Forecasting and Social Change* 2 (2).

Ugarriza, J. E. (2013). La dimensión política del postconflicto: discusiones conceptuales y avances empíricos. *Colombia Internacional*, (77), 141-176.

UNDP. 2013. "Citizen Security with a Human Face: Evidence and Proposals for Latin America." Human Development Report for Latin America. New York: UNDP.

Unión Europea. (2005). Panel de expertos. Herramientas de evaluación de la Comisión Europea. Disponible en: http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/tools/too_pan_how_es.htm

Uribe, G. (07, Julio de 2015). Delincuencia en el postconflicto. Revista Semana. Recuperado de: <http://bit.ly/1JofQJ3>

Uribe-López, M. (2013). Civil Wars and Violent Peace in Africa and Latin America: A General Outlook. *Africa Peace and Conflict Journal*, 6(3), 50-63.

Uribe-López, M. (2014). Ruanda: Crecimiento Económico y Paz Represiva. *Noticias en Desarrollo*, Cider, Universidad delos Andes. Recuperado de: http://cider.uniandes.edu.co/Noticias/2014_10/Ruanda_crecimiento_economico_paz_represiva_02052014.asp

Vargas, J.F. (2012) Costos del conflicto y consideraciones económicas para la construcción de paz. En Rettberg, A. (Comp). (2012) *Construcción de paz en Colombia*. Bogotá. Universidad de los Andes.

Vilalta, Carlos Javier. 2013. "Towards an Understanding of Community Organization against Crime: The Case of Ciudad Juarez, Mexico." *Stability: International Journal of Security and Development* 2 (1).

Villa, E. Restrepo, J. Moscoso, M. (2014) "Crecimiento económico, conflicto armado y crimen organizado, evidencia para Colombia". En Arias, M.A. Camacho, A. Ibáñez, A.M. Mejía, D. Rodríguez, C. (2014) *Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia. ¿Cómo sonctuir un postconflicto sostenible?* Bogotá: Facultad de Economía, Universidad de Los Andes.

Villarraga Sarmiento, Á. (2013). Experiencias históricas recientes de reintegración de excombatientes en Colombia. *Colombia Internacional*, (77), 107-140.

World Bank. 2011. "Violence in the City. Understanding and Supporting Community Responses to Urban Violence." Washington D.C.: World Bank.

Uribe, M. (2013). Civil Wars and Violent Peace in Africa and Latin America: A General Outlook. *Africa Peace and Conflict Journal*. 6(3). 50-63.

Uribe, M. (2015). Notas sobre Construcción de Paz y la Cuestión Urbana. Documento de trabajo. Medellín CAP Universidad EAFIT.

USAID. (2014). Estrategia de cooperación 2014 – 2018. Un Camino hacia la paz. USAID

Weber, M. (2014). *Economía y sociedad*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.

Wehr, P., & Lederach, J. P. (1991). Mediating conflict in Central American *Journal of Peace Research*, 28 (1), 85-98.

Wennmann, A. (2014). Negotiated Exits from Organized Crime? Building Peace in Conflict and Crime-affected Contexts. *Negotiation Journal*, 30(3), 255-273.

Wills, M. E. (2015). *Los tres nudos de la guerra colombiana: Un campesinado sin representación política, una polarización social en el marco de una institucionalidad fracturada, y unas articulaciones perversas entre regiones y centro*. Disponible en: <http://bit.ly/1Fcokqu>.

Wood, E. (2012). Variación de la violencia sexual en tiempos de guerra: la violación en la guerra no es inevitable. *Estudios Socio-Jurídicos*, 14(1), 19-57.

Wood, E. J. (2006). The Ethical Challenges of Field Research in Conflict Zones. *Qualitative Sociology*, 29(3), 373-386.

Young, H., & Jacobsen, K. (2013). No way back? Adaptation and urbanization of IDP livelihoods in the Darfur Region of Sudan. *Development and Change*, 44(1), 125-145.

World Bank Group. (2002). Stakeholder Identification and Analysis. Disponible en: https://www.commddev.org/userfiles/PartOne_StakeholderIdentification_0.pdf

Zartman, I. W. (1974) The Political Analysis of Negotiation: How Who Gets What and When. *World Politics*, 26: 385-99.

Zartman, I. W. (1977) "Negotiation as a Joint Decision Making Process," *Journal of Conflict Resolution* 21, 4.

Zartman, I. W. (1989) *Ripe for Resolution*. New York: Oxford University Press. _____ (1993) "A Skeptic's

View,” in G. O. Faure and J. Z. Rubin, editors, *Culture and Negotiation*. Newbury Park, CA: Sage Publications.

Zartman, I. W. (2000) “Ripeness: The Hurting Stalemate and Beyond,” *International Conflict Resolution after the Cold War*. Washington: National Academy Press.

Zartman, I. W. (2010). Negotiation pedagogy: International Relations. *International Negotiation*, 15(2), 229-246.

Zartman, I. W. (2011). Greed and grievance: methodological and epistemological underpinnings of the debate. *Studies in Ethnicity and Nationalism*, 11(2), 298-307.

Zartman, I. W., & Spector, B. I. (2013). Post-Agreement Negotiating within Multilateral Regimes. *International Negotiation*, 18 (3), 325-332.

Zartman, W. I. (2009). Interest, Leverage and Public Opinion in Mediation. *International Negotiation*, (14), 1-5.

Zimmerman, A. & Maennling, C. (2007). Mainstreaming participation: Multi-stakeholder management, tools for stakeholder analysis. GIZ, Eschborn, Germany.

VII. ANEXOS

Anexo 1. Manual de Códigos del análisis de entrevistas

Pregunta 1: Escenarios FARC

Código 1	Variable / rótulo	No efectos en la ciudad
	Definición	Supone que la ciudad no tendrá afectaciones significativas por el escenario post-acuerdo dado que la ciudad en sí misma tiene sus propias dinámicas
	Color de código	Amarillo
Código 2	Variable / rótulo	Desmovilizaciones hacia la ciudad
	Definición	Incluye los efectos de la desmovilización de las FARC y su llegada o no a la ciudad de Medellín
	Color de código	Azul claro
Código 3	Variable / rótulo	Desmovilizaciones hacia lo rural
	Definición	Comprende las situaciones que se presentarán en el ámbito rural del departamento tras las desmovilizaciones de las FARC
	Color de código	Rosado
Código 4	Variable / rótulo	Desmovilizados de las FARC que ya están en la ciudad
	Definición	Se define como los elementos para analizar qué está pasando y pasará con los desmovilizados de las FARC que ya están en la ciudad
	Color de código	Gris claro
Código 5	Variable / rótulo	Asuntos relacionados con desmovilizaciones
	Definición	Comprende elementos específicos relacionados con las desmovilizaciones como rangos medios y disidencias.
	Color de código	Gris oscuro
Código 6	Variable / rótulo	Crimen organizado - BACRIM
	Definición	Es definido como el conjunto de factores asociados a la presencia de bandas y grupos de crimen organizado en especial a las BACRIM.
	Color de código	Rojo
Código 7	Variable / rótulo	Reformas institucionales del Estado
	Definición	Se categorizan aquí los factores relacionados con las instituciones del Estado y su rol en el postconflicto
	Color de código	Azul oscuro
Código 8	Variable / rótulo	Papel de otros actores de la sociedad civil
	Definición	Contiene elementos relacionados con el papel de otros actores sociales en el desarrollo de la paz
	Color de código	Púrpura
Código 9	Variable / rótulo	Convivencia conflictividades urbanas y otras formas de violencia
	Definición	Comprende nociones que pueden servir para ampliar el marco de análisis de lo que significa paz, conflicto y violencia.
	Color de código	Verde oliva

Pregunta 2: Escenarios no acuerdo FARC

Código 1	Variable / rótulo	No hayan cambios en la ciudad
	Definición	Es definido por el supuesto de que el rompimiento de los acuerdos no generará cambios significativos en las dinámicas y problemas de la ciudad.
	Color de código	Amarillo
Código 2	Variable / rótulo	Recrudescimiento violencia en la ciudad
	Definición	Comprende los efectos negativos que puede tener la no firma de los acuerdos en la ciudad de Medellín traducido sobre todo en fenómenos de violencia
	Color de código	Rojo
Código 3	Variable / rótulo	Recrudescimiento violencia en lo rural
	Definición	Comprende los efectos negativos que puede tener la no firma de los acuerdos en las zonas rurales traducido sobre todo en fenómenos de violencia
	Color de código	Verde

Pregunta 3: Escenarios ELN

Código 1	Variable / rótulo	No hayan cambios en la ciudad
	Definición	Significa que no se producirían cambios significativos en la ciudad tras un acuerdo con el ELN
	Color de código	Amarillo
Código 2	Variable / rótulo	Cambios en la ciudad
	Definición	Contendría todos los efectos identificados en la ciudad al producirse un acuerdo con el ELN
	Color de código	Verde
Código 3	Variable / rótulo	Asuntos de la negociación y agenda
	Definición	Se define como los supuestos que condicionarían los posibles escenarios
	Color de código	Rojo

Pregunta 4: Desafíos de la institucionalidad

Código 1	Variable / rótulo	Institucionalidad local
	Definición	Se relaciona con las instituciones del Estado en los territorios en una dimensión general.
	Color de código	Amarillo
Código 2	Variable / rótulo	Seguridad y criminalidad
	Definición	Comprende retos de las políticas de seguridad así como de fenómenos de criminalidad que están presentes en la ciudad
	Color de código	Azul claro
Código 3	Variable / rótulo	Política de desmovilización y reintegración
	Definición	Aborda distintos aspectos de los procesos de desarme,

		desmovilización y reintegración que se darán luego de un eventual acuerdo
	Color de código	Rosado
Código 4	Variable / rótulo	Implementación de acuerdos
	Definición	Se relaciona con desafíos generales derivados de la implementación y el cumplimiento de lo pactado
	Color de código	Gris claro
Código 5	Variable / rótulo	Transformación cultural y mensajes simbólicos
	Definición	Involucra asuntos concernientes a los mensajes políticos y simbólicos necesarios en el posacuerdo
	Color de código	Gris oscuro
Código 6	Variable / rótulo	Institucionalidad de la fuerza pública
	Definición	Supone distintos retos relacionados con reformas a las Fuerzas Armadas y Policía
	Color de código	Rojo
Código 7	Variable / rótulo	Oferta general del Estado
	Definición	Comprende una amplia variedad de derechos y supuestos del Estado Social de Derecho en su conjunto
	Color de código	Azul oscuro
Código 8	Variable / rótulo	Política de atención a víctimas
	Definición	Comprende retos de la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas y/o de su relación con políticas sectoriales
	Color de código	Púrpura
Código 9	Variable / rótulo	Otros desafíos
	Definición	Se definen en relación a otros desafíos identificados por los entrevistados asociados a elementos como participación, justicia, fortalecimiento de la comunidad y diagnóstico
	Color de código	Verde oliva

Pregunta 5: Dinámicas subregionales

Código 1	Variable / rótulo	Desmovilizados se quedarán en el campo
	Definición	Asume que las dinámicas después del acuerdo afectarán sobre todo al campo y en especial los desmovilizados se quedarán allí por distintas razones
	Color de código	Amarillo
Código 2	Variable / rótulo	Efectos sobre la ciudad en desmovilización y otros factores
	Definición	Comprende lo que puede llegar a pasar en la ciudad en relación con llegadas de desmovilizados, desplazados y asuntos relacionados con el rol de la ciudad en las rentas ilegales
	Color de código	Azul claro
Código 3	Variable / rótulo	No habrá desmovilización efectiva
	Definición	Es una posición que indica que habrá reductos de las FARC que no se desmovilizarán de manera efectiva
	Color de código	Rosado
Código 4	Variable / rótulo	Economías criminales y grupos organizados de criminalidad
	Definición	Está asociado a todas las actividades que las bandas criminales y grupos organizados seguirán realizando en territorios rurales y urbanos

	Color de código	Rojo
Código 5	Variable / rótulo	Desplazamientos masivos
	Definición	Aborda los eventuales desplazamientos a causa de la violencia o asuntos económicos
	Color de código	Verde

Pregunta 6: Política de reintegración

Código 1	Variable / rótulo	Reincidencia, desactivación de violencia y nexos ilegalidad
	Definición	Se relaciona con que se continúen actividades ilegales en desmovilizados reincidentes
	Color de código	Amarillo
Código 2	Variable / rótulo	Reinserción económica
	Definición	Supone todo lo asociado a ingresos, empleabilidad y condiciones para la reinserción económica
	Color de código	Azul claro
Código 3	Variable / rótulo	Reinserción social y comunitaria
	Definición	Comprende las condiciones del entorno familiar, comunitario y social para que el desmovilizado se reintegre efectivamente a la sociedad
	Color de código	Rosado
Código 4	Variable / rótulo	Estigmatización de la población
	Definición	Incluye las menciones a las actitudes e imaginarios de la sociedad que juzgan y señalan a los desmovilizados
	Color de código	Gris claro
Código 5	Variable / rótulo	Seguridad de desmovilizados
	Definición	Involucra lo referido a la seguridad física de los excombatientes
	Color de código	Púrpura
Código 6	Variable / rótulo	Participación política
	Definición	Comprende los aspectos relacionados con las formas, movimientos y mecanismos de participación en la vida política de los desmovilizados
	Color de código	Rojo
Código 7	Variable / rótulo	Menores de edad desvinculados
	Definición	Hace referencia a los retos que conlleva la desvinculación de menores de edad
	Color de código	Verde oliva

Pregunta 7: Política de víctimas

Código 1	Variable / rótulo	Reparación integral a víctimas
	Definición	Involucra todos los componentes de la reparación material como indemnización, rehabilitación, restitución y garantías de no repetición.
	Color de código	Amarillo
Código 2	Variable / rótulo	Verdad y Reparación Simbólica
	Definición	Comprende la reparación simbólica, acciones de memoria

		histórica y medidas de satisfacción, que aporten a los derechos a la reparación integral y a la verdad.
	Color de código	Azul claro
Código 3	Variable / rótulo	Política social
	Definición	Se define por todas las políticas sectoriales del país no solo en términos de atención a víctimas sino a todos los colombianos.
	Color de código	Rosado
Código 4	Variable / rótulo	Institucionalidad y recursos para la reparación
	Definición	Se relaciona con los asuntos de arquitectura institucional, presupuestos y demás aspectos del fortalecimiento institucional para la reparación.
	Color de código	Gris claro
Código 5	Variable / rótulo	Reconocimiento de las víctimas
	Definición	Supone un abordaje de cómo se reconoce a las víctimas frente a otros ciudadanos que también pueden ser vulnerables por razones distintas a la violencia política.
	Color de código	Verde
Código 6	Variable / rótulo	Relación entre víctimas y excombatientes
	Definición	Contiene los espacios, mecanismos y formas en que se encuentran (o encontrarán) víctimas y victimarios.
	Color de código	Rojo

Pregunta 8: Recomendaciones

Código 1	Variable / rótulo	Aprovechar experiencias del pasado
	Definición	Comprende las experiencias y aprendizajes que ha tenido la ciudad de Medellín en materia de desmovilización, víctimas y temas relacionados
	Color de código	Amarillo
Código 2	Variable / rótulo	Fortalecer políticas de reintegración y víctimas
	Definición	Implica la consolidación de estas políticas, y tener nuevos enfoques y mecanismos para su efectividad
	Color de código	Azul claro
Código 3	Variable / rótulo	Realizar acciones a favor de la pedagogía para la paz
	Definición	Implica actividades para transformar los imaginarios sobre el conflicto y la paz
	Color de código	Rosado
Código 4	Variable / rótulo	Consolidar la política de seguridad
	Definición	Hace referencia a diferentes mecanismos para garantizar la seguridad ciudadana
	Color de código	Gris claro
Código 5	Variable / rótulo	Fortalecer la justicia
	Definición	Comprende todos los mecanismos y formas de mejora del sistema judicial
	Color de código	Púrpura
Código 6	Variable / rótulo	Desarrollar programas de desarrollo local
	Definición	Se traduce tanto en acciones puntuales de desarrollo local como en un enfoque para garantizar la transversalidad del desarrollo como principio

	Color de código	Rojo
Código 7	Variable / rótulo	Realizar acciones específicas a favor de los jóvenes
	Definición	Comprende diferentes acciones para prevenir que los jóvenes caigan en la violencia a través de educación, empleo, etc.
	Color de código	Verde oliva
Código 8	Variable / rótulo	Involucrar a élites y sector privado
	Definición	Son todas las opiniones respecto a que estos dos actores hacen parte fundamental del post-acuerdo
	Color de código	Azul oscuro

Pregunta 9: Temas de priorización

Dado que son temas mencionados pero no necesariamente explicados a profundidad solo se tendrán en cuenta las categorías de “variable/rótulo” y color de código.

Código 1	Variable / rótulo	Fortalecimiento de la justicia
	Color de código	Amarillo
Código 2	Variable / rótulo	Cambio cultural, pedagogía de paz y cultura de la legalidad
	Color de código	Azul claro
Código 3	Variable / rótulo	Atención a víctimas y desmovilizados
	Color de código	Azul oscuro
Código 4	Variable / rótulo	Lucha contra criminalidad y bandas criminales
	Color de código	Rojo
Código 5	Variable / rótulo	Programas de educación, cultura y empleo
	Color de código	Gris claro
Código 6	Variable / rótulo	Fortalecimiento institucional y lucha contra corrupción
	Color de código	Verde claro
Código 7	Variable / rótulo	Seguridad ciudadana
	Color de código	Gris Oscuro
Código 8	Variable / rótulo	Convivencia
	Color de código	Púrpura
Código 9	Variable / rótulo	Acciones a favor de la juventud
	Color de código	Verde oscuro
Código 10	Variable / rótulo	Lucha contra el narcotráfico y microtráfico
	Color de código	Verde azulado

Pregunta 10a: Aprendizajes de otras experiencias

Código 1	Variable / rótulo	Atacar las causas del conflicto
	Definición	Comprende aprendizajes sobre factores estructurales de la sociedad que pasan por la garantía de otros derechos adicional a los relacionados con la seguridad
	Color de código	Amarillo
Código 2	Variable / rótulo	Organizaciones criminales en la ciudad
	Definición	Se define por los aprendizajes frente a las organizaciones y patrones de criminalidad
	Color de código	Azul claro

Código 3	Variable / rótulo	Enfoque de la seguridad
	Definición	Se relaciona con aprendizajes sobre las perspectivas en que se han abordado las políticas de seguridad
	Color de código	Rosado
Código 4	Variable / rótulo	Desmovilización
	Definición	Comprende aprendizajes sobre procesos de desarme, desmovilización y reinserción
	Color de código	Gris claro
Código 5	Variable / rótulo	Pedagogía
	Definición	Involucra experiencias sobre el cómo contar el conflicto a la ciudadanía y nuevas generaciones
	Color de código	Gris oscuro
Código 6	Variable / rótulo	Jóvenes y violencia
	Definición	Se enmarcan en esta categoría aprendizajes sobre cómo los jóvenes han sido actores centrales de procesos de criminalidad
	Color de código	Rojo
Código 7	Variable / rótulo	Papel de otros actores
	Definición	Se relaciona con aprendizajes sobre cómo otros actores de la sociedad se han involucrado con el desarrollo de los procesos de paz
	Color de código	Azul oscuro
Código 8	Variable / rótulo	Resolver las diferencias
	Definición	Hace referencia a un aspecto muy puntual de cómo se han generado experiencias de respeto a la diferencia
	Color de código	Púrpura
Código 9	Variable / rótulo	Reparación a víctimas
	Definición	Involucra lecciones sobre formas de reparación a víctimas en otras latitudes
	Color de código	Verde oliva

Pregunta 10b: Patrones de procesos anteriores

Código 1	Variable / rótulo	Procesos de desmovilización pasados
	Definición	Comprende procesos de desmovilización principalmente de la década de los noventas que implicaron la desmovilización de grupos armados
	Color de código	Rojo
Código 2	Variable / rótulo	Procesos actuales de intervención
	Definición	Se relaciona con aprendizajes de intervenciones de política pública en la ciudad
	Color de código	Verde
Código 3	Variable / rótulo	Condiciones actuales en la ciudad
	Definición	Incorpora elementos relacionados con ciertas condiciones políticas y sociales de la ciudad que deben tenerse en cuenta para el postconflicto
	Color de código	Amarillo

Pregunta 11: Actores clave

Dado que son temas mencionados pero no necesariamente explicados a profundidad solo se tendrán en cuenta las categorías de “variable/rótulo” y color de código.

Código 1	Variable / rótulo	Comunidad
	Color de código	Amarillo
Código 2	Variable / rótulo	Institucionalidad en general
	Color de código	Azul claro
Código 3	Variable / rótulo	Autoridades territoriales y funcionarios
	Color de código	Azul rey
Código 4	Variable / rótulo	Fuerza Pública
	Color de código	Rojo
Código 5	Variable / rótulo	Sociedad civil
	Color de código	Gris claro
Código 6	Variable / rótulo	Empresariado
	Color de código	Verde claro
Código 7	Variable / rótulo	Iglesias
	Color de código	Gris Oscuro
Código 8	Variable / rótulo	Academia y sector educativo
	Color de código	Púrpura
Código 9	Variable / rótulo	Organizaciones sociales
	Color de código	Verde oscuro
Código 10	Variable / rótulo	Víctimas y desmovilizados
	Color de código	Verde azulado
Código 11	Variable / rótulo	Jóvenes
	Color de código	Rojo Oscuro
Código 12	Variable / rótulo	Cooperación internacional
	Color de código	Rosado
Código 13	Variable / rótulo	Medios de comunicación
	Color de código	Azul oscuro

Anexo 2. Listado de expertos entrevistados

Número	Categoría	Nombre experto	Entidad/organización
1	Experto nacional	Juan Carlos Palou	Fundación Ideas Para La Paz
2	Experto nacional	Hugo Acero	Subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana
3	Experto nacional	Gustavo Duncan	Universidad EAFIT
4	Experto local	Jorge Giraldo	Universidad EAFIT
5	Experto nacional	Mauricio Romero	Pontificia Universidad Javeriana
6	Experto local	Pablo Emilio Angarita	Universidad de Antioquia
7	Experto nacional	Mauricio Uribe	Universidad EAFIT
8	Experto local	Max Yuri Gil	Corporación Región.
9	Expertos gestión, construcción, opinión	Jaime Fajardo Landaeta	Secretaría de Seguridad de Medellín.
10	Expertos gestión, construcción, opinión	Mario Agudelo	No especificada.
11	Expertos gestión, construcción, opinión	Paulo Serna	Paz y Reconciliación
12	Expertos gestión, construcción, opinión	Gonzalo Murillo	Red Prodepaz
13	Expertos gestión, construcción, opinión	José Antonio Girón	IPC (Instituto de Capacitación Popular)
14	Experta agencia internacional	Janna Greve	OEA
15	Expertos gestión, construcción, opinión	Juan Diego Restrepo	Universidad de Antioquia
16	Experta funcionaria	Luz Patricia Correa Madrigal	Unidad de Víctimas Municipal
17	Expertos gestión, construcción, opinión	Miguel Tamayo	Corporación Convivamos
18	Expertos gestión, construcción, opinión	Ursula Wagner	Unidad Municipal Atención a Víctimas (Medellín)
19	Experta funcionaria	Valeria Mejía	Secretaría de Juventud
20	Experto funcionario	Santiago Londoño	Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Antioquia
21	Experta internacional	Jenny Pearce	Universidad de Bradford
22	Experta internacional	Ana María Arjona	Northwestern University
23	Expertos internacional	Oliver Kaplan	Josef Korbel School of International Studies (University of Denver)
24	Expertos internacional	Rafael Grasa	Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP)
25	Experto internacional	Fernando Chinchilla	Universidad de Monterrey
26	Experto internacional	Robert Muggah	Instituto Igarapé
27	Experta internacional	Caroline Moser	N.A.
28	Experto internacional	Adam Baird	Coventry University
29	Experto internacional	James A. Robinson	Chicago University
30	Experto internacional	Stathis Kalyvas	Yale Univesrsiy
31	Experta nacional	Angelika Rettberg	Universidad de Los Andes
32	Expertos gestión	Edward Jaramillo	Gobernación de Antioquia

Anexo 3. Categorías de análisis de prensa

Categoría	Definición
DDR	Contenido de prensa referente al tema de postconflicto en clave de Desarme, Desmovilización y Reintegración.
Delincuencia asociada a Bacrim	Contenido de prensa referente a los efectos que tendrá el postconflicto en relación a la delincuencia asociada a bandas criminales
Desminado	Contenido de prensa referente al retiro de minas antipersonales en ciertas zonas del país.
Escenarios	Contenido de prensa asociado a posibles cambios (económicos, políticos, sociales) que se deriven de la firma de un acuerdo de paz
Reformas Fuerza Pública	Contenido de prensa que se refiere específicamente a los posibles cambios en presupuesto, pie de fuerza y otras reformas a las instituciones de fuerza pública(Policía y Ejército)

Milagro de Medellín	Contenido de prensa internacional que hace referencia a las transformaciones vividas en Medellín en los últimos años (2000-2013)
Postconflicto en Medios Internacionales	Contenido de prensa internacional que aborda el Postconflicto de manera general.
Postconflicto en Antioquia	Contenido de prensa que aborda el Postconflicto desde una perspectiva regional, específicamente el departamento de Antioquia.
Postconflicto en Medellín	Contenido de prensa que aborda el Postconflicto desde una perspectiva local, específicamente en la ciudad de Medellín
Postconflicto Regional	Contenido de prensa que pone énfasis en la necesidad de construir paz desde el nivel regional (departamentos)
Postconflicto Sector Privado	Contenido de prensa que se refiere al papel del empresariado ante un eventual Postconflicto en temas relacionados al empleo a ex combatientes e inversión social.
Postconflicto Urbano	Contenido de prensa que se refiere a los posibles efectos que puede tener el postconflicto en las principales ciudades de Colombia
Seguridad Ciudadana	Contenido de prensa que se refiere a las posibles afectaciones de seguridad ciudadana ante un escenario de postconflicto, además que abordan el tema de la creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana
Varios	Contenido de prensa que abarca dos o más categorías de análisis